



PRISMA



INVERSIONES Y DINÁMICAS TERRITORIALES EN CENTROAMÉRICA

Implicaciones para la gobernanza y
la construcción de alternativas

332.673

l62

sv

Inversiones y dinámicas territoriales en Centroamérica. Implicaciones para la gobernanza y la construcción de alternativas / Coordinador, Nelson Cuéllar; Equipo de trabajo, Andrew Davis, Fausto Luna y Oscar Díaz (Sistema de Información Geográfico); Colaboradoras, Geiselle Sánchez, Danira Miralda. -- 1a. ed. -- San Salvador, El Salv.: Fundación PRISMA, 2012.
65 p. : mapas col. ; 28 cm.

ISBN: 978-99923-965-5-1

1. Integración económica internacional. 2. Inversiones extranjeras. 3. América Central-Integración económica. I. Cuéllar, Nelson, coordinador. II. Título.

Diagramación: Leonor González

Diseño de portada: Wendy E. Peña

Mapas: Oscar Díaz



Esta publicación está liberada bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir Obras Derivadas Igual. Para mayor información: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

© Fundación PRISMA, febrero 2012

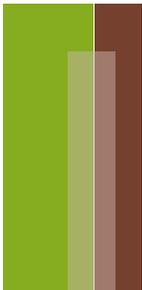
Esta publicación fue posible gracias al apoyo financiero institucional recibido por PRISMA de parte de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), de Fundación Ford y de Rights and Resources Initiative (RRI).



INVERSIONES Y DINÁMICAS TERRITORIALES EN CENTROAMÉRICA

IMPLICACIONES PARA LA GOBERNANZA Y
LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Nelson Cuéllar (Coordinador), Andrew Davis,
Fausto Luna, Oscar Díaz (Sistema de Información Geográfica)



FEBRERO, 2012

Este documento resume los resultados del proyecto *“Inversiones y Dinámicas Territoriales en Centroamérica”*, ejecutado por la Fundación PRISMA, con el auspicio de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI, por sus siglas en inglés). Con este proyecto se busca contribuir con una lectura regional que mejore la comprensión de los nuevos patrones de inversión y su vinculación con las dinámicas territoriales rurales en Centroamérica, por su relevancia para los derechos, las estrategias de actores territoriales indígenas, campesinos y afrodescendientes, así como para las condiciones de gobernanza territorial.

Equipo de trabajo

Nelson Cuéllar (Coordinador)
Andrew Davis
Fausto Luna
Oscar Díaz (Sistema de Información Geográfica)

Colaboradoras

Geiselle Sánchez
Danira Miralda

Contenido

Siglas	2
Introducción	4
Evolución y cambios en la inversión en Centroamérica	5
Algunos rasgos de la inversión extranjera directa a nivel mundial	5
Evolución de la inversión extranjera en Centroamérica	7
Destino sectorial de la inversión	9
Origen de la inversión hacia Centroamérica	10
Inversión extranjera, empresas transnacionales y regionales	11
Estrategias de inversión y territorios en Centroamérica	14
Inversiones y dinámicas territoriales en Petén, Guatemala	22
Palma africana	23
Nuevos cultivos no tradicionales: Papaya jatropha	28
Ganadería	30
Proyectos hidroeléctricos	31
Petróleo	32
Turismo	35
Plantaciones forestales, proyectos de carbono y REDD+	36
Implicaciones para comunidades rurales	37
Inversiones y dinámicas territoriales en la Mosquitia, Honduras	42
Dinámicas actuales	43
Nuevas amenazas prospectivas y viraje institucional	48
Implicaciones para las comunidades de la Mosquitia	52
Inversiones y dinámicas territoriales: Implicaciones para la gobernanza y la construcción de alternativas territoriales	55
Referencias	65

Siglas

ACOFOP	Asociación de Comunidades Forestales de Petén
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
AGROCYT	Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario
ALBA	Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América
BANADESA	Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CONAP	Consejo Nacional de Areas Protegidas
CONCYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DR - CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (por sus siglas en inglés)
FARES	Fundación para la Investigación Antropológica y Estudios Ambientales
FCPF	Forest Carbon Partnership Facility
FLEGT	Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (por su sigla en inglés)
FYDEP	Fomento y Desarrollo del Petén
GHF	Global Heritage Found
ICC	Iniciativa para la Cuenca del Caribe
IFC	Corporación Financiera de Inversiones (por sus siglas en inglés)
IIRSA	Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
INGUAT	Instituto Guatemalteco de Turismo
MAGA	Ministerio de Agricultura

MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MCC	Millenium Challenge Corporation
MCCA	Mercado Común Centroamericano
MEM	Ministerio de Energía y Minas
MINECO	Ministerio de Economía de Guatemala
ONG	Organización no Gubernamental
PACUNAM	Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya
PINFOR	Programa de Incentivos Forestales
PROFRUTA	Proyecto Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria
PRONACOM	Programa Nacional de Competitividad
PRORURAL	Programa de Desarrollo Rural
R-PP	Propuesta Preliminar de Preparación (por sus sigls en inglés)
RBM	Reserva de la Biosfera Maya
REDCA	Red Centroamericana de Fibras Opticas
RHBRP	Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano
RICAM	Red Interamericana de Carreteras
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
TLC	Tratados de Libre Comercio
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (por sus siglas en inglés)

Introducción

Las economías centroamericanas se han transformado profundamente durante las últimas décadas. Lejos de ser un proceso agotado, dicha transformación sigue expandiéndose no solo a través de nuevos y emergentes sectores, sino también hacia diversos territorios que en las décadas anteriores jugaron roles complementarios y/o marginales en los principales procesos de acumulación que prevalecieron en Centroamérica hasta las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX. En dicho proceso, la inversión (nacional, regional y transnacional) juega un papel clave en la región, pues se considera que es fundamental como fuente externa de financiamiento en las distintas estrategias de crecimiento y desarrollo.

Las estrategias y políticas de inversión impulsadas por el Estado siguen basándose en patrones de exclusión, despojo y expulsión de grupos y comunidades rurales. Esto se explica por el lugar preponderante que se le asigna a las estrategias y políticas de promoción de inversiones, pues bajo los argumentos de generación de empleos, ingresos, crecimiento económico, progreso y modernización, otros objetivos de política igualmente importantes, como la equidad y sustentabilidad, constituyen severas falencias no en las agendas de atracción y promoción de inversiones. La banca multilateral juega también un rol fundamental en el diseño, financiamiento y apoyo a la implementación de programas, políticas y proyectos de inversión impulsados por los gobiernos centroamericanos.

Centroamérica atraviesa por un replanteamiento de las estrategias de promoción de inversiones, lo cual ha revitalizado un conjunto de intereses por aprovechar el potencial productivo de distintos territorios a lo largo y ancho de la región. Además de esto, existen señales de que

Centroamérica ya comienza a ser una región receptora de nuevos flujos de inversión como resultado de la ‘fiebre por la tierra’, derivada de los acelerados procesos de aumento en la demanda mundial de alimentos y materias primas, entre otros.

Además de una discusión sobre las tendencias globales de la inversión, este informe incluye dos estudios de caso (Petén y Mosquitia hondureña) enfocados en entender la manera en que las inversiones inciden en las dinámicas territoriales, cuyo auge está profundizando las amenazas sobre los derechos, los medios de vida y las condiciones de gobernanza territorial para las comunidades rurales, campesinas y pueblos indígenas.

En este marco, este trabajo explora la manera en que las inversiones en Centroamérica se amplían y profundizan, y cómo transforman los desafíos y oportunidades de desarrollo que enfrentan las comunidades rurales en la región. Sin duda, los derechos y las condiciones de tenencia por parte de las comunidades rurales, campesinas y forestales, así como de los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan amenazas mucho más agresivas y aceleradas.

Por las condiciones nacionales, regionales y globales, la lógica con que se promueven las inversiones en Centroamérica requiere de nuevos territorios, magnificando los desafíos de exclusión, degradación y gobernanza, sin embargo, el actual contexto también plantea nuevas oportunidades, no solamente para defender y fortalecer los derechos, sino también para construir estrategias territoriales endógenas para avanzar hacia la equidad, la sustentabilidad, la gobernanza y la resiliencia frente al cambio climático.

Evolución y cambios de la inversión en Centroamérica

Las economías centroamericanas se han transformado profundamente durante las últimas décadas. Lejos de ser un proceso agotado, dicha transformación sigue expandiéndose no solo a través de nuevos y emergentes sectores, sino también hacia diversos territorios que en las décadas anteriores jugaron roles complementarios y/o marginales en los principales procesos de acumulación que prevalecieron en Centroamérica hasta las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX.

Ese proceso de transformación se da en un contexto fuertemente marcado por la globalización, por el impulso realizado a través de los procesos de liberalización y reformas económicas implementados sin excepción en los países de la región y por las estrategias de actores empresariales nacionales, regionales y transnacionales.

Una mirada a la evolución de la inversión permite dimensionar cómo se han transformado los patrones de inversión en Centroamérica. Con ese propósito, se discute brevemente la evolución y los principales cambios en la inversión extranjera directa y la inversión nacional, el papel y financiamiento proveniente de la banca multilateral, así como los marcos institucionales que buscan promover y atraer inversión hacia la región.

Algunos rasgos de la inversión extranjera directa a nivel mundial

La inversión extranjera directa juega un papel clave en los procesos globales vinculados con la expansión y movilización de los centros de producción; con la creciente apertura y liberali-

zación de los mercados; con el fortalecimiento de las empresas multinacionales y su incursión en nuevas áreas de negocios, incluyendo aquellas tradicionalmente administradas por los Estados; así como con los avances en los sistemas tecnológicos y financieros que facilitan como nunca antes el intercambio de conocimiento y capitales.

A nivel mundial, la inversión extranjera directa ha crecido de manera galopante en relación a los niveles de la década de los años setenta del siglo XX (Cuadro 1).

En cuatro décadas, la inversión extranjera directa mundial aumentó en una proporción de 40

Cuadro 1
Evolución de la Inversión Extranjera Directa, 1971-2010
(Millones de US\$ y porcentajes)

	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010
Millones de US\$				
Mundo*	280,425	1,082,376	5,216,467	11,356,425
Países en desarrollo	62,839	233,363	1,403,359	3,944,158
Países desarrollados	217,562	848,881	3,762,001	6,903,505
América Latina	33,002	68,275	508,674	1,134,011
Centroamérica**	8,937	26,522	116,102	274,608
Cambio porcentual (1971-1980 = 100%)				
Mundo*	100%	386%	1,860%	4,050%
Países en desarrollo	100%	371%	2,233%	6,277%
Países desarrollados	100%	390%	1,729%	3,173%
América Latina	100%	207%	1,541%	3,436%
Centroamérica**	100%	297%	1,299%	3,073%
Estructura porcentual				
Mundo*	100%	100%	100%	100%
Países en desarrollo	22%	22%	27%	35%
Países desarrollados	78%	78%	72%	61%
América Latina	12%	6%	10%	10%
Centroamérica**	3%	2%	2%	2%

* Incluye países en transición; ** Incluye México
Fuente: Elaborado con base en datos de UNCTAD

veces en comparación a los niveles de la década de los años setenta. Aunque en menor proporción comparando con los cambios mundiales, América Latina y Centroamérica también han mostrado aumentos sustanciales en los niveles de inversión extranjera.

Según el informe sobre las inversiones mundiales preparado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) correspondiente al 2011, hay cambios en la estructura de las inversiones a nivel mundial: por un lado, los países en desarrollo y los países en transición captan más de la mitad del total de la inversión extranjera directa mundial, y por otro, las salidas de inversión de dichos países están mostrando niveles sin precedentes, la cual mayoritariamente se dirige a otros países en desarrollo. (UNCTAD, 2011)

Una revisión rápida de la inversión extranjera durante los últimos cinco años permite identificar una serie de tendencias, entre las cuales se encuentran:

- Crecimiento de los flujos de inversión Sur-Sur: Con mayor frecuencia, empresas de países en desarrollo expanden sus operaciones hacia otras economías similares. De igual manera, el acceso a nuevos mercados, conocimiento y tecnología, junto a las alianzas con otras empresas, les permite a las empresas transnacionales de los países en desarrollo adquirir una mayor importancia dentro de la economía regional y mundial.
- Mayor interés por el sector extractivo y de recursos naturales: Como resultado del incremento en el mercado internacional de los precios de los productos básicos (hidrocarburos, metales, alimentos), surgen nuevas estrategias de negocios e inversiones alrededor de estos recursos, lo que implica en muchos casos, alianzas estratégicas entre empresas mul-

tinacionales y socios (empresas nacionales y gobiernos) en los países receptores de la inversión.

- Nuevas regulaciones para garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios: Esta situación se evidencia con mayor claridad en el interés creciente de los gobiernos por lograr más control sobre los ingresos generados por la inversión extranjera directa, específicamente en sectores estratégicos (hidrocarburos, energía, metales, etc.). Inclusive, se observa un aumento de los casos de procesos de nacionalización y/o establecimiento de nuevos contratos en estos rubros.
- Incremento considerable de la inversión destinada al sector agrícola: La inversión extranjera directa agrícola se triplicó entre 1990 y 2007. Ante la necesidad cada vez más frecuente de importar alimentos, el comportamiento de los precios de éstos y el surgimiento de un mercado creado en función de la demanda de tierra para la producción de biocombustibles, emergen nuevas modalidades de inversión como la “agricultura por contrato”, el arrendamiento de tierras en países en desarrollo y la compra adelantada de cosechas.
- Aparición de nuevas modalidades de inversión: Tradicionalmente la inversión extranjera directa se asociaba con la inversión de capital extranjero en una economía a través de la compra de activos (terrenos, edificaciones, maquinaria, etc.); sin embargo, aparecen con más frecuencia nuevas formas en las que los vínculos de la empresa y capital de origen con la economía de destino son menos evidentes y profundos. La fabricación por contrato, la subcontratación de servicios, las franquicias y licencias, son ejemplo de operaciones asumidas por empresas locales, con el consiguiente ahorro de costos para el inversionista principal.

- Existencia de nuevos actores dentro del contexto actual de la inversión: El crecimiento de las empresas transnacionales en los países en desarrollo se une a la consolidación y expansión de una serie de empresas públicas vinculadas principalmente al sector de hidrocarburos y energía, convirtiéndolas en dos categorías de actores de creciente importancia dentro de los flujos de inversión extranjera directa.

La crisis económica y financiera global del 2008 frenó el incremento que venía experimentando la inversión extranjera directa a nivel mundial, pero durante 2010 mostró una lenta recuperación, aunque las perspectivas para 2011 están influenciadas por rebotes de recesión que enfrentan las economías desarrolladas. Sin embargo, las perspectivas en los flujos de inversión hacia los países en desarrollo muestran un panorama más alentador. Según la CEPAL (2001), América Latina no solo mostró una gran resiliencia frente a la crisis, sino que además se convirtió en la región con mayor crecimiento, tanto en la recepción, como en la emisión de flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial.¹ Los mayores incrementos se concentraron en Sur América, particularmente en Brasil, Argentina, Perú y Chile.

Entre los factores que han incidido para este comportamiento reciente de la inversión hacia América Latina, están (CEPAL, 2011; UNCTAD, 2011):

- Estabilización de las economías desarrolladas, especialmente en los principales países inversores, tanto tradicionales (Estados Unidos, Canadá, España) como emergentes (China);

Nuevos dinamismos en sectores emergentes, principalmente aquellos vinculados a recur-

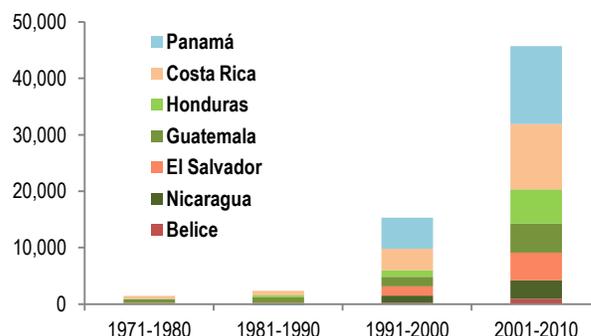
sos naturales (hidrocarburos, minería, alimentos);

- Crecimiento en los niveles de consumo y en la demanda interna en países de la región como Brasil, Chile, Colombia y México; y
- Creciente tercerización de empresas extranjeras, bajo modalidades de subcontratación de operaciones de producción y servicios.

Evolución de la inversión extranjera en Centroamérica

La inversión extranjera directa (IED) ha jugado –y sigue jugando– un papel clave en la región, pues se considera que es fundamental como fuente externa de financiamiento en las distintas estrategias de crecimiento y desarrollo. Rosenthal resalta el papel de la inversión extranjera directa en Centroamérica e identifica cuatro etapas claramente definidas (Recuadro 1). Los niveles de inversión extranjera directa hacia Centroamérica crecieron considerablemente durante las últimas dos décadas en comparación con los setenta y ochenta (Ver gráfico 1).

Gráfico 1
Centroamérica:
Cambios en la inversión extranjera directa, por décadas
(Millones de dólares)



Fuente: Elaborado con base en datos de UNCTAD

¹ Entre 2009 y 2010, la inversión extranjera directa total mundial solo creció 1%; en los países desarrollados disminuyó 7%; pero en los países en desarrollo aumentó 10%. (CEPAL, 2011)

Recuadro 1

Etapas de la inversión extranjera directa en el desarrollo de Centroamérica

La inversión en “enclaves”: Generalmente en la actividad bananera y, en menor escala, en la minería de oro. Esos enclaves, establecidos para exportar bienes al resto del mundo, desarrollaron su propia infraestructura, incluyendo la construcción y operación de ferrocarriles, puertos, generación de energía, comunicaciones y servicios conexos. La inversión de enclave tomó cuerpo en el último cuarto del siglo XIX, y continuó desarrollándose en las primeras décadas del siglo XX. Sus encadenamientos con el resto de la economía fueron tenues, excepto a través de la contratación de mano de obra. Muchas de estas empresas adquirieron una desproporcionada influencia, dada su importancia relativa para la economía y su fuerte protagonismo ante los gobiernos de turno.

La inversión que acompañó la formación del Mercado Común Centroamericano (MCCA): Privilegió la industrialización basada en la sustitución de importaciones, con miras a abastecer el mercado regional. Numerosas empresas transnacionales, sobre todo en la rama alimenticia, farmacéutica, metal-mecánica y textil, establecieron plantas en la región. Así, el esquema anterior de un número limitado de empresas internacionales de gran dimensión dio paso a un número mayor de inversionistas extranjeros, con una cartera mucho más diversificada de activos, y con mayores encadenamientos con la economía local, al transformar al menos algunas materias primas locales, y al usar un sistema de distribución y mercadeo para abastecer la demanda regional. Mucha de la inversión extranjera durante esta etapa se escudó detrás de aranceles de importación relativamente elevados, complementados por incentivos fiscales.

La inversión consecuente con la globalización de la economía: Empieza a vislumbrarse a partir de los años ochenta y, con más fuerza, en los años noventa. Se trata de la etapa, que llevó a todos los gobiernos a adoptar, con diferencias de grado e intensidad, políticas de liberalización comercial, la privatización de algunas empresas públicas, y la adopción de modelos de crecimiento económico liderados por el sector exportador. Con la desgravación comercial, se produjo cierta involución en las actividades manufactureras, pero de manera simultánea se registraron importantes inversiones en las industrias de transformación para la exportación de confecciones, electrónica, dispositivos médicos, y algunos servicios, incluyendo centros de llamadas. Al mismo tiempo, se produjo un sesgo en favor de los servicios, con la compra por parte de empresas internacionales de algunas empresas públicas, sobre todo en las ramas de telecomunicaciones y energía eléctrica. Durante esta etapa, la inversión extranjera directa refleja el esfuerzo deliberado de los países centroamericanos de mejorar su inserción en la economía global.

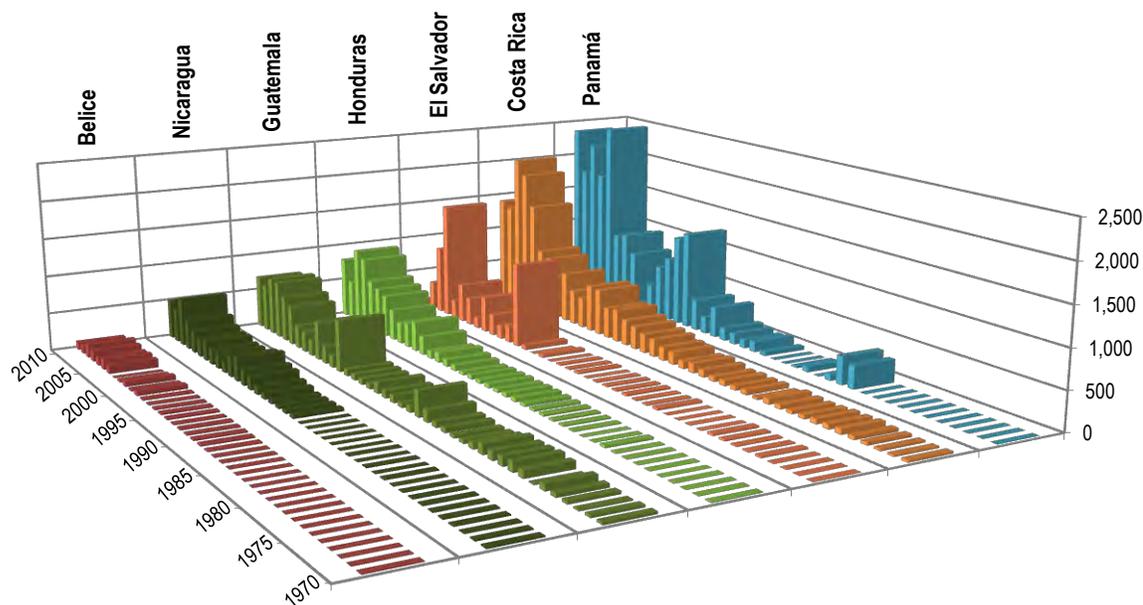
La profundización y ampliación de la globalización: Por último, con la firma de Tratados de Libre Comercio, se podría sostener que se está ad portas del inicio de una cuarta etapa de la inversión extranjera en Centroamérica que presumiblemente instalaría actividades productivas en Centroamérica en función de sus ventajas comparativas con miras a abastecer el mercado estadounidense y centroamericano. Al menos esa es la apuesta que llevó a los gobiernos de la región a negociar y suscribir el DR - CAFTA, y, de hecho, empiezan a producirse inversiones que parecen buscar un posicionamiento temprano para aprovechar los beneficios eventuales del TLC. Ciertamente, la región tiene el potencial de impulsar ese tipo de actividad, dado que se contará con “reglas claras” (pero también reglas exigentes) para acceder al mercado estadounidense.

Fuente: Rosenthal (2006).

Tanto la finalización de los conflictos internos, como la implementación de procesos de reforma y liberalización económica en los noventa, dieron como resultado que la región viera incrementados de manera vertiginosa los niveles de inversión extranjera, pasando de US\$1,437 millones en flujos acumulados de inversión durante toda la década de los setenta, a US\$45,708 millones en la primera década del siglo XXI. Este cambio refleja la evolución de la inversión extranjera a nivel mundial, la cual se

ha expandido de manera acelerada como resultado de la profundización del proceso de globalización. En los setenta y ochenta, Guatemala y Costa Rica eran los países que más inversión extranjera atraían. Actualmente, Panamá y Costa Rica son, por mucho, los países que más inversión extranjera directa atraen en la región. Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador atraen niveles más o menos similares de inversión extranjera, muy por encima de los flujos hacia Belice (Ver gráfico 2).

Gráfico 2
Centroamérica: Evolución de la inversión extranjera directa, por países, 1970-2010
(Millones de dólares)



Fuente: Elaborado con base en datos de UNCTAD

Destino sectorial de la inversión

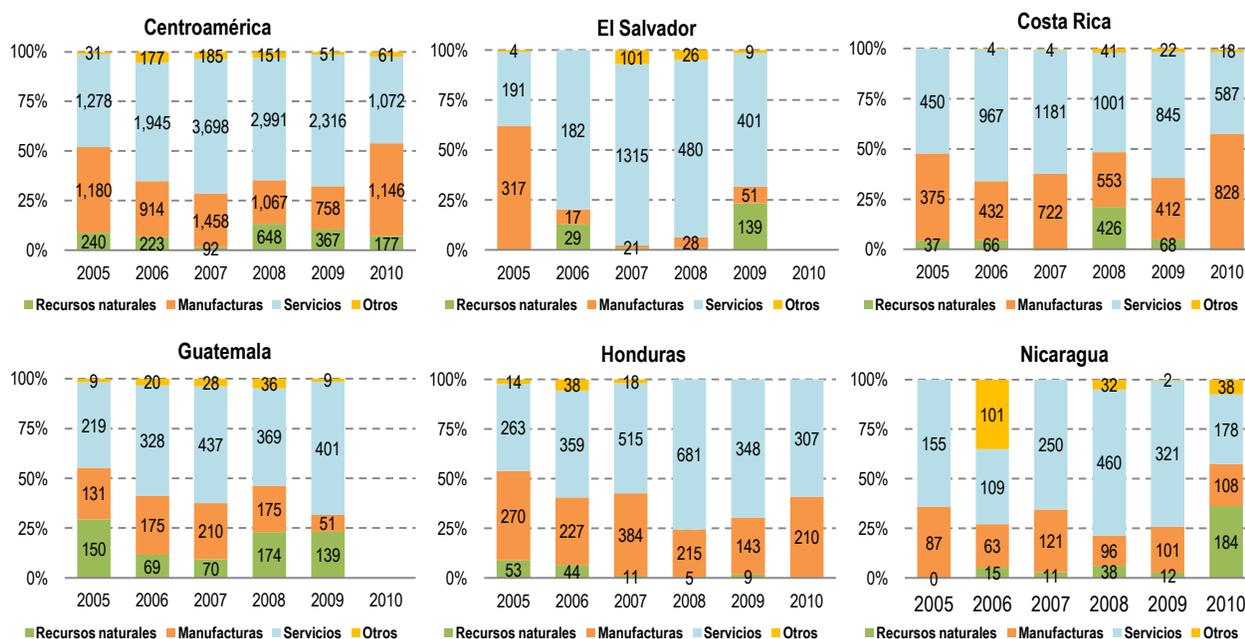
La composición de la inversión extranjera hacia Centroamérica durante los últimos años, muestra un claro predominio de los sectores industrial y de servicios, recibiendo flujos de inversión muy por encima de los niveles observados en el sector de recursos naturales. De los US\$22,226 millones en inversión extranjera durante 2005-2010 en Centroamérica (excluyendo Belice y Panamá), US\$1,747 millones (8%) se destinaron al sector de recursos naturales; US\$6,523 millones (29%) al sector de manufacturas; US\$13,300 millones (60%) al sector servicios; y US\$656 millones (3%) a otros sectores (Ver gráfico 3). En todos los países, la inversión hacia el sector servicios es significativamente mayor que el resto de sectores.

En la región, Guatemala es el país que más inversión extranjera atrae hacia el sector de recur-

sos naturales. Costa Rica y Honduras, son los países que muestran los mayores niveles de inversión hacia el sector de manufacturas.

Entre 2005 y 2010, Guatemala captó el 34% de la inversión destinada a los recursos naturales en la región, como resultado de las inversiones en agricultura, minas y canteras. Costa Rica y Nicaragua le siguieron con 33% y 15% respectivamente. Del total de inversiones destinadas al sector manufacturero en el mismo período, Costa Rica recibió el 51% mayoritariamente en la industria e inversión inmobiliaria; seguida de Honduras que logró captar el 22%, mayoritariamente destinada a la maquila. Costa Rica también concentró la mayor proporción de la inversión destinada a los servicios entre 2005 y 2010, con 38% hacia la región, de la cual, casi la mitad (43%) se destinó al turismo. Por su parte, El Salvador captó el 19% del total de inversión hacia los servicios, siendo el sector financiero el principal destino (casi 67% del total de ingresos

Gráfico 3
Centroamérica: Ingresos netos de inversión extranjera directa, por país y sector, 2005-2010 (Millones de US\$ y porcentajes)



* Excluye Belice y Panamá

Fuente: Elaborado con base en datos de CEPAL

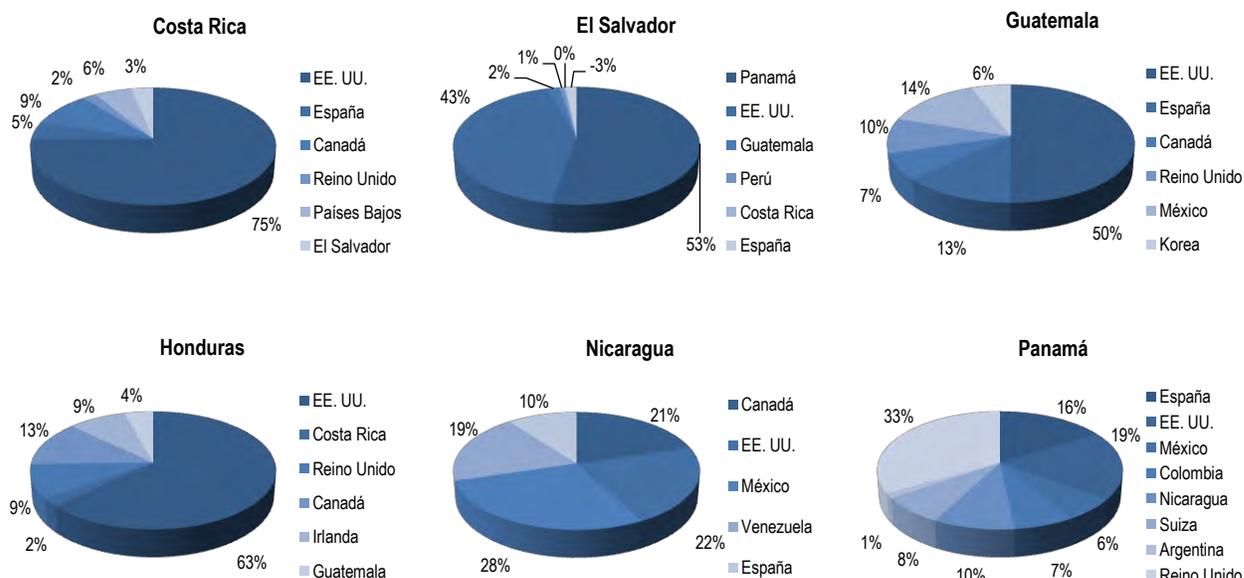
reportados por el país para este sector). La inversión hacia los servicios en Honduras también representó 19%, destacándose las inversiones en telecomunicaciones (65%).

Origen de la inversión hacia Centroamérica

Si bien las fuentes de inversión extranjera hacia Centroamérica son más diversas que en las décadas anteriores, la inversión proveniente de Estados Unidos sigue siendo mayoritaria. De los más de US\$22,000 millones de inversión extranjera neta hacia Centroamérica entre 2005 y 2010 reportados por la CEPAL (2011), más de tres cuartas partes provinieron de cuatro países: US\$10,549 millones de Estados Unidos (47%); US\$3,564 millones del Reino Unido (16%); US\$1,747 millones de España (8%); y US\$1,507 millones de México (7%). Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador son los países en que

la inversión extranjera depende mayoritariamente de los Estados Unidos, con una participación de 50% ó más (Ver gráfico 4). En Nicaragua, aunque el origen de la inversión proviene de un menor número de países, hay una dependencia más balanceada, aunque con una ligera predominancia de las inversiones mexicanas (28%), sobre las inversiones estadounidenses (22%). Panamá, que además de atraer los mayores flujos de inversión, también es el país con mayor diversificación, aunque con un ligero predominio de las inversiones estadounidenses (19%). Aunque en el total de inversión en los países receptores, los flujos provenientes de países centroamericanos no sobrepasan el 5%, representan una nueva tendencia en la región. Curiosamente, la excepción es Nicaragua, cuyos flujos de inversión neta acumulada entre 2005 y 2010 en Panamá ascendieron a US\$594 millones, representando 10% de la inversión captada durante dicho período.

Gráfico 4
Centroamérica: Ingresos netos de inversión extranjera directa, por principales países de origen, en porcentajes (2005-2010)



Fuente: Elaborado con base en datos de CEPAL.

Inversión extranjera, empresas transnacionales y regionales²

A continuación se describe brevemente la inserción de empresas transnacionales en los principales sectores de los países de la región. Asimismo se ejemplifican algunas de las principales empresas de los países de la región con inversiones dentro y fuera de Centroamérica.

Costa Rica

A diferencia del resto de países, Costa Rica implementó tempranamente políticas que lograron atraer inversiones de más de 200 empresas transnacionales en sectores de media y alta tecnología. En la actualidad, los sectores más importantes incluyen telecomunicaciones, ensamblaje eléctrico, componentes electrónicos, semiconductores, ingeniería y software, inge-

nería y reparación de tarjetas de circuito impreso, industria metalmeccánica e industria automotriz. Costa Rica busca consolidar y expandir la electrónica, los dispositivos médicos, la industria aeroespacial y el turismo, con una consolidación de las zonas francas y de la presencia de empresas como Intel y Hewlett Packard, así como de servicios empresariales de Procter & Gamble, Amazon, Oracle, DHL, UPS, Western Union y McKinsey, entre otros.

El número de empresas que invierten en Costa Rica ha crecido durante la última década. En 2009 ascendían a 113. Entre las actividades de estas empresas se incluyen servicios compartidos, centros de llamadas, sistemas de soporte administrativo, software, diseño, arquitectura y construcción, y publicidad interactiva y audiovisual. En el rubro de ciencias de la vida destaca la producción de dispositivos médicos, actividad iniciada en la subregión por Baxter Healthcare Corporation, suplidores de esterilización y laboratorios dentales. Esta industria

² Esta sección se basa en CEPAL (2011).

está compuesta por 38 empresas como Hospira, Boston Scientific, Cytec-Hologic, ArthroCare, Allergan, St. Jude Medical y Coloplast. Este sector ocupa el cuarto lugar en las exportaciones del país y sus ventas externas han crecido tres veces más rápido que el resto de las exportaciones de las zonas francas. Las inversiones costarricenses en la subregión son significativas e incluyen los sectores de bebidas y comercio (Café Britt y Florida Ice & Farm), software y servicios de telecomunicaciones (ITS InfoComunicación). Las inversiones costarricenses en Panamá han aumentado considerablemente gracias a empresas como la Constructora Meco (excavación seca en la ampliación del Canal de Panamá), el grupo financiero Improsa (fondos de inversión), la cooperativa Dos Pinos (agroindustrias) y el grupo La Nación (servicios informativos).

El Salvador

Se han registrado bajos niveles de inversión extranjera en comparación con otros países de la región. Los niveles más altos alcanzados por el país se registraron tras las privatizaciones de empresas públicas en 1995 y 1996, y la venta de bancos y empresas manufactureras en 2007 y 2008. La inversión extranjera alcanzó su máximo histórico en 2007, cuando ascendió a más de US\$1,500 millones producto de la venta de los principales bancos privados, adquiridos por HSBC, Citigroup, GE Capital, Scotiabank y Bancolombia. A partir de entonces la inversión se ha reducido considerablemente debido a la crisis internacional, a la inseguridad ciudadana, a los crecientes costos de operación de las empresas extranjeras y a la disminución de incentivos asociados a regímenes especiales. En la última década, para alcanzar una mayor diversificación —como alternativa a la concentración en la industria textil y de confección— se han promocionado con relativo éxito nuevos sectores que han atraído inversión extranjera, entre los que se encuentran: operaciones de mante-

nimiento de aviones comerciales (AEROMAN, vinculado con la aerolínea TACA) y manufactura de partes y fuselaje de aeronaves deportivas livianas; agroindustria (fruticultura, acuicultura, plantas ornamentales, alimentos y bebidas); componentes electrónicos; dispositivos médicos; telecomunicaciones, energía y transporte; logística y centros de distribución; textiles especializados; turismo; servicios empresariales (Sykes y Dell) y servicios de salud. El Salvador, que es uno de los mayores inversionistas de la subregión, ha expandido su presencia mediante inversiones de grupos empresariales como TACA y Poma, Agrisal y Roble (sector inmobiliario).

Guatemala

Las mayores inversiones fueron producto de las privatizaciones, en particular de la red eléctrica y los servicios de telecomunicaciones. A partir de 2005 la inversión se incrementó a raíz de las expectativas derivadas de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos y la apertura en el sector de los servicios, que permitió la entrada de empresas de seguros y otros servicios financieros. Guatemala se ha destacado como centro de producción y distribución de alimentos para el sur de México, Centroamérica, los Estados Unidos y el Canadá, gracias a su proximidad y rápido acceso a esos mercados. El país cuenta con ventajas aprovechadas por empresas translatinas como Bimbo (abundante mano de obra a precios competitivos y disponibilidad de materia prima). Los productos textiles y de confección han sido tradicionalmente la rama manufacturera exportadora más atractiva para la inversión. Desde finales de los años ochenta las inversiones en ese sector se han beneficiado de grandes incentivos y algunas empresas se han integrado verticalmente, creando encadenamientos productivos con empresas locales. Más recientemente, el país ha registrado un gran crecimiento en los centros de

llamadas y BPO (24/7, CapGemini, NCO Group, Digitex, Atento, Genpact y Transactel) y ha recibido importantes inversiones en servicios bancarios, energía (Duke Energy y Ashmore Energy), petróleo, telecomunicaciones (América Móvil, Telefónica, Televisión Azteca y Digicel), agricultura (Monsanto) y minería (grupos canadienses GoldCorp, Tahoe Resources, Firestone Ventures y Argonaut Gold). Se espera que en los próximos años estas actividades continúen recibiendo fuertes inversiones; por ejemplo, Jaguar Energy anunció una inversión de US\$600 millones para la construcción de una planta eléctrica. México se ha destacado por sus inversiones en alimentos y bebidas (Grupo Bimbo y Grupo Lala) y telecomunicaciones. Colombia ha invertido en electricidad mediante compañías como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Empresa de Energía de Bogotá tras la firma de su tratado de libre comercio con Guatemala. Las inversiones guatemaltecas en la región incluyen: Banco Industrial, G&T Continental, Grupo Pantaleón y Grupo Pharma, seguidos en importancia por Pollo Campero, Grupo Solid, Ingenio Magdalena, Molinos Modernos, Corporación Multinversiones, Panadería San Martín, PDC, Planesa, Refrigerua, Sarita, SPECTRUM, Transactel y Byte.

Honduras

Honduras ha atraído inversión en sectores de manufactura ligera (textiles y confección, y ensamblaje básico de partes para las industrias automotriz y electrónica), agroindustrias y servicios empresariales. Durante el período 2004-2009 el sector que más inversión recibió fue el de transporte, almacenaje y telecomunicaciones (34%) con inversiones de Digicel, Crowley y BIT Honduras. En servicios, las inversiones han sido significativas y fueron realizadas por Cinemark, Cinépolis, Hotel Clarion y MetroRed, mientras que Bimbo, Colgate-Palmolive, Elektra y Multiplaza dirigieron sus capitales al sector del comercio.

En ese mismo período el 23% del total de la inversión se destinó a empresas de zonas libres para la exportación. Más de dos tercios de la IED se dirigieron al sector de los textiles y la confección, seguido en importancia por los servicios a empresas, los componentes electrónicos, el comercio, los productos del tabaco y los productos de la pesca. Honduras ha recibido cuantiosas inversiones intrarregionales, sobre todo de grupos empresariales salvadoreños y guatemaltecos. En los últimos años las inversiones hondureñas en la subregión han sido significativas, especialmente las de los grupos Karim's (textiles y confección), Visión y M (sector inmobiliario) y Terra (construcción de hidroeléctricas en Guatemala). Una iniciativa novedosa, y a la vez controvertida, ha sido la reciente estrategia de atracción de inversiones mediante la creación de ciudades modelo con el objetivo de emular la experiencia de Hong Kong.

Nicaragua

Nicaragua ha mantenido y consolidado una posición preponderante como exportador de prendas de vestir a los Estados Unidos, debido al acceso preferencial a este mercado a través del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, y a sus menores salarios relativos. Algunas de las empresas internacionales para las que produce prendas son Target, JCPenney, Wal-Mart, Kohls y GAP. Más recientemente, la inversión extranjera directa se ha dirigido a energías renovables (hidroeléctrica Tumarín y geotérmica Polaris) y telecomunicaciones (América Móvil, Telefónica y la empresa rusa Yota). En el sector de la agricultura y la pesca cuenta con inversiones de Camaronera El Faro, Grupo CADECA y Standard Fruit. En minas y canteras se han realizado inversiones canadienses de American Pacific Corporation, Minerales entre Mares y Minerales de Occidente, entre otras. En electricidad, gas y agua, destacan

Aguas de San Pedro y Electrificaciones del Norte, y en construcción, Astaldi, Construcciones Nabla y Sococo de Costa Rica. En el sector servicios, han crecido las inversiones en servicios empresariales a distancia (centros de llamadas, BPO y KPO), soporte técnico, telemarketing y desarrollo de software. En la actualidad, 138 empresas operan bajo el régimen de zonas francas, entre las que se encuentran fabricantes de dispositivos médicos (Command Medical), arneses para automóviles (ARNECOM) y productos de acero inoxidable (Stainless Ride), incluidas partes para motocicletas. Entre las inversiones nicaragüenses en el exterior destacan las del grupo financiero LAFISE en casi toda la región e incluso fuera (Estados Unidos, México y de Venezuela).

Panamá

Es el mayor receptor de inversión con un patrón sectorial muy diferente al resto ya que históricamente ha sido una economía de servicios. La ampliación del canal, la plataforma logística y multimodal, así como pujantes sectores de servicios financieros y servicios empresariales a distancia, bienes raíces, construcción y turismo, han convertido a ese país en el gran polo de atracción de inversiones de la región. Han aumentado las inversiones en la banca con licencia nacional e internacional, y las empresas de la Zona Libre de Colón se han convertido en una fuente de dinamismo para toda la economía. La política de atracción de inversiones se centra en cuatro sectores estratégicos: logística, agroindustria, turismo y servicios financieros. En el sector de la logística el objetivo es atraer inversiones en la comercialización y el almacenaje de productos agroindustriales. Se promocionan las áreas económicas especiales que cuentan con leyes especiales de incentivos como el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, la Ciudad del Saber, las zonas procesadoras y la Zona Libre de Colón. Información parcial sobre fusiones y adquisiciones y los

anuncios de nuevas inversiones indican que algunas empresas financieras panameñas han comenzado a incursionar en mercados de la región (Banco General y Assa Compañías de Seguros en Costa Rica) y fuera de ella (el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADDEX) en Brasil, México y Perú). Entre las empresas manufactureras que están invirtiendo en el exterior destacan Plastigas, H.B. Fuller y Corrugados de Sula. En comercio, servicios y alimentos destacan Alemautos, Arango Software, ASI Consultant, Promotional Homes y las recientes inversiones de COPA en Aero República, Silva Tree (promotora de inversiones socialmente responsables en forestación) en el Reino Unido y Overseas Clearing Corporation en Nueva Zelanda.

Estrategias de inversión y territorios en Centroamérica

Durante las últimas décadas, en la región centroamericana se implementaron una serie de reformas institucionales orientadas hacia la liberalización económica. Los bancos multilaterales han desempeñado un rol fundamental en el diseño, financiamiento y apoyo a la implementación de una serie de programas y políticas por parte de los gobiernos en cada uno de los países centroamericanos que en conjunto han facilitado la configuración de los actuales marcos institucionales para la atracción de inversiones.

Una mirada a los objetivos y sectores prioritarios del Banco Interamericano de Desarrollo para la región permite identificar apoyos en tres direcciones estratégicas: a) finanzas públicas y modernización del Estado, con especial énfasis en el fortalecimiento de la gestión tributaria a través de iniciativas de reformas fiscales (Costa Rica, Guatemala y Honduras) y la búsqueda de eficiencia del gasto público; b) promoción de la competitividad, con acciones dirigidas a mejorar el clima de inversión y la integración

económica sectorial, incluyendo intervenciones en el sector energético (eficiencia, nuevas fuentes alternativas, marcos regulatorios); y c) inversiones destinadas a servicios sociales, financiando proyectos en educación, salud, agua y saneamiento, y gestión ambiental, entre otras áreas. El Fondo Multilateral de Inversiones, que forma parte del grupo del BID, financió casi 595 proyectos para micro, pequeñas y medianas empresas por un monto total acumulado de US\$ 210.6 millones (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2
FOMIN: Proyectos financiados por país entre 1979 y 2011
(Millones de US\$ y porcentajes)

País	Proyectos	Montos	%
Belice	15	7.35	3%
Costa Rica	89	37.3	18%
El Salvador	115	33.5	16%
Guatemala	114	43.9	21%
Honduras	98	34.0	16%
Nicaragua	104	37.6	18%
Panamá	60	17.1	8%
Total	595	210.6	100%

Fuente: Elaboración propia basada en información de FOMIN (<http://www5.iadb.org/mif/programaseideas/Listadeproyectos/>).

Por su parte, el Banco Mundial ha financiado programas y proyectos destinados a fortalecer la gestión financiera de los gobiernos, la estabilidad macroeconómica, la eficiencia y transparencia en el gasto público. Adicionalmente, los recursos del Banco Mundial se han utilizado en la implementación de diversas intervenciones en zonas rurales (proyectos de electrificación, telefonía, construcción de carreteras, etc.), el apoyo a programas orientados a estimular la competitividad y la productividad, así como el respaldo a programas sociales específicos de transferencias monetarias (El Salvador, Nicaragua). En Costa Rica se han canalizado fondos a través del Fondo Ambiental Global y se adelantan procesos de preparación del sector forestal para el fondo mundial de carbono.

Incluso, nuevas modalidades de cooperación al desarrollo, como las iniciativas enmarcadas en la Corporación Reto del Milenio (Millennium

Challenge Corporation, MCC) de los Estados Unidos³ tienen una fuerte vinculación con el enfoque y contenidos del Proyecto Mesoamérica. Los tres compactos⁴ aprobados por la MCC para Honduras, El Salvador y Nicaragua incluyen cada uno, el componente de infraestructura para mejorar la conectividad, representando la mayor parte de los recursos de cada compacto (Ver Cuadro 3).

Cuadro 3
Compactos de la Corporación Reto del Milenio
en Honduras, El Salvador y Nicaragua
(Millones de US\$ y porcentajes)

País y componentes	Montos	Porcentajes
Honduras (2005-2010)	238.0*	100%
Transporte	185.0	78%
Desarrollo rural	53.0	22%
El Salvador (2006-2012)	460.9	100%
Conectividad	248.8	54%
Desarrollo productivo	71.8	16%
Desarrollo humano	101.8	22%
Admin., seguim., y evaluación	38.5	8%
Nicaragua (2005-2011)	113.5	100%
Transporte	58.0	51%
Negocios rurales	32.9	29%
Regularización de la propiedad	7.2	6%
Admin., seguim., y evaluación	15.4	14%

* No incluye costos de administración, seguimiento, ni evaluación.
Fuente: Elaboración propia basada en MCC (<http://www.mcc.gov/>).

Durante la última década, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aumentó su participación hasta consolidarse como el principal organismo financiero a nivel regio-

³ La MCC fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 2004, como nueva modalidad de ayuda exterior basada en mejores políticas, en la apropiación nacional, en resultados y en la selección de ayuda por concurso. Para que un país sea elegible para recibir asistencia de la MCC se examina su desempeño a través de un conjunto de indicadores claves; se pide a los países seleccionados definir las prioridades de crecimiento económico sostenible y de reducción de la pobreza; y de ser seleccionado para recibir ayuda, el país debe establecer su propia entidad local para gestionar y supervisar todos los aspectos de la aplicación. La modalidad de ayuda busca la creación de socios con países pobres, los cuales se comprometen a fortalecer el buen gobierno, las libertades económicas, e invertir en los ciudadanos.

⁴ Compacto es el término utilizado por la MCC para referirse al proyecto ó programa aprobado y financiado para cada país.

nal, particularmente por el apoyo decidido a los proyectos estratégicos de infraestructura contemplados en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), entre los que se encuentran la remodelación de puertos y aeropuertos (Guatemala, Honduras), junto a la Red Interamericana de Carreteras (RICAM), el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y la Red Centroamericana de Fibras Ópticas (REDCA) (Ver Mapas 1 y 2).

Este proyecto constituye el principal esfuerzo estratégico regional que los países de Centroamérica (incluyendo a Belice y Panamá), junto con México⁵ vienen impulsando desde el 2001. En 2008, relanzado como Proyecto Mesoamérica, con la incorporación de Colombia y República Dominicana, este proyecto quedó estructurado en dos ejes principales (Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 2011): i) interconexión física e integración (interconexión de la infraestructura de transporte, integración energética mesoamericana, interconexión de infraestructura e integración de los servicios de telecomunicaciones, y facilitación comercial y competitividad); y ii) desarrollo social y sostenible (medio ambiente y cambio climático, prevención y mitigación de desastres naturales, y vivienda social). La inversión estimada total asciende a unos US\$ 8,000 millones. (BID, 2008)

La incorporación de Colombia y República Dominicana revisten especial interés, pues ambos países visualizan a Mesoamérica como una región clave para sus propias estrategias de promoción de inversiones. En el caso de República Dominicana, esto se complementa con su participación en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), pero particularmente porque esto viabiliza la expansión de servicios de teleco-

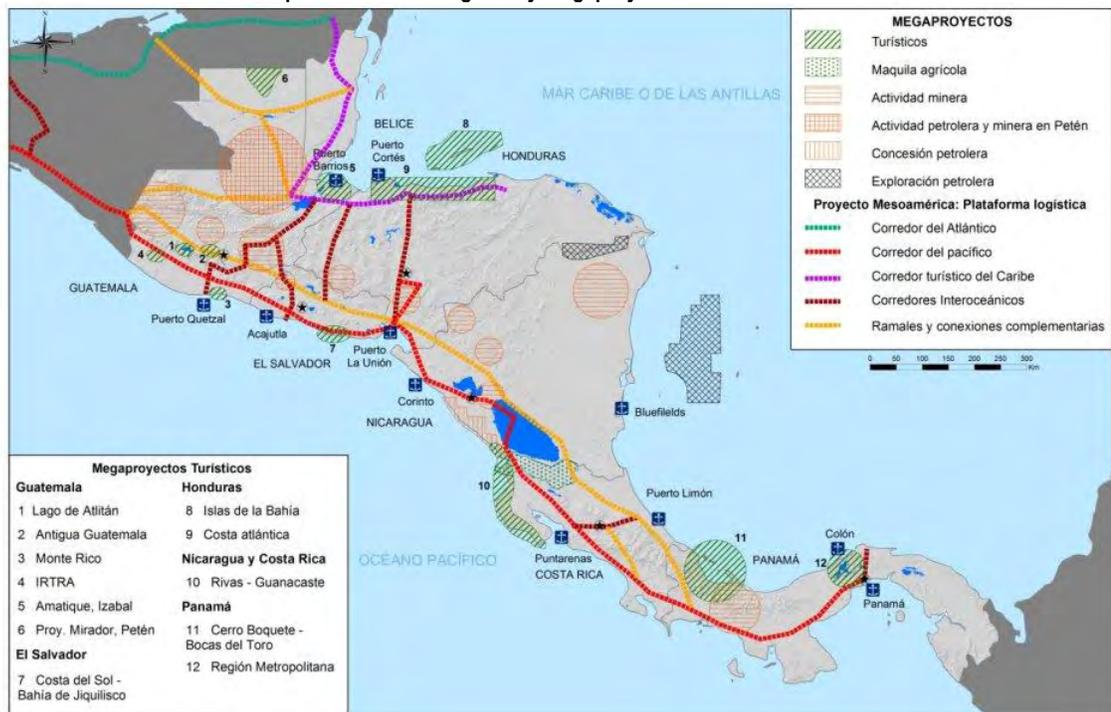
⁵ Incluye los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

municación. En el caso de Colombia, la participación en el Proyecto Mesoamérica es fundamental para ‘conectar’ con otro esfuerzo similar que se viene impulsando en Sur América, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).⁶

Los programas y proyectos financiados con recursos provenientes de los bancos multilaterales han tenido entre sus principales objetivos el mejoramiento del clima de inversión nacional y regional, y la creación de condiciones que favorezcan la atracción de inversión extranjera. Los marcos institucionales para la promoción y atracción de inversiones son pilares fundamentales para la atracción de empresas extranjeras, pero también para la expansión y consolidación de los principales grupos económicos regionales. El diseño de marcos legales especiales, además de la promoción inversiones derivada de los tratados y acuerdos comerciales como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y el DR-CAFTA, junto a la creación de oficinas gubernamentales destinadas a la promoción de inversiones, forman parte de los cambios institucionales impulsados simultáneamente en todos los países de la región, proceso que se impulsa desde finales de la década de los noventa. El conjunto de leyes aprobadas para fortalecer el clima de negocios incluyen la promoción de la inversión extranjera, incentivos arancelarios, simplificación de trámites administrativos y aduaneros, entre otras. El Cuadro 4 muestra algunas de las principales leyes para la promoción de inversiones en la región.

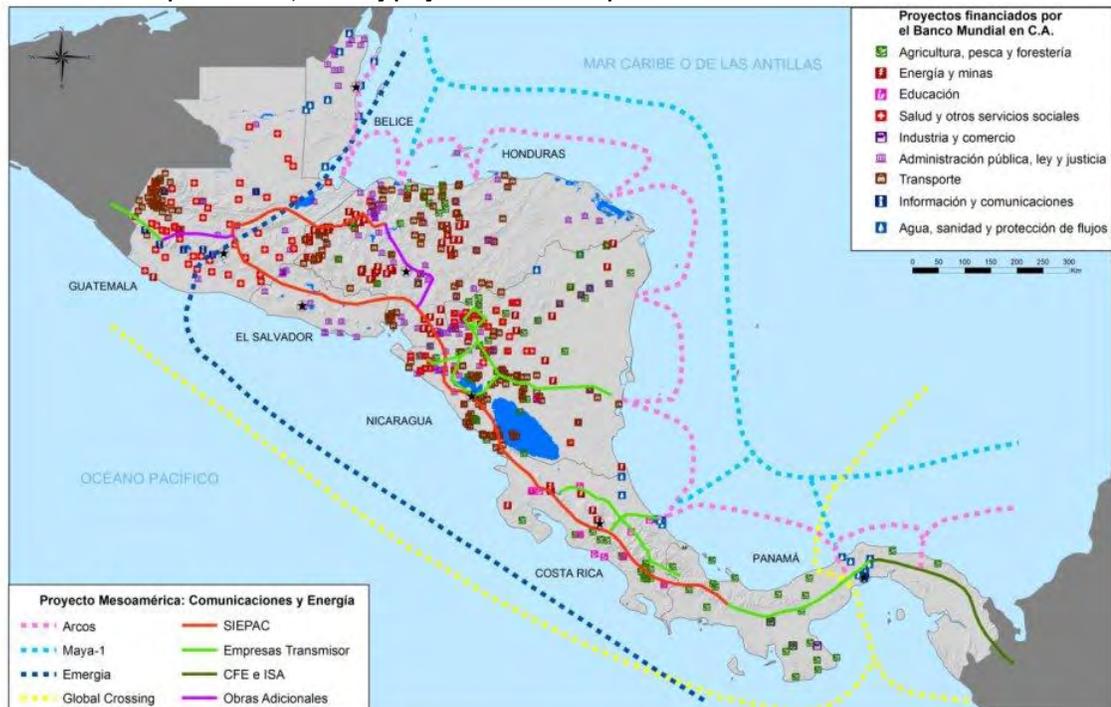
⁶ IIRSA se implementa desde el año 2000. Con una cartera inicial de 524 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, representando una inversión de \$ 96,119 millones. Los 12 países integrantes de la Iniciativa acordaron un conjunto acotado de 31 proyectos de alto impacto (Agenda de Implementación Consensuada 2005 - 2010), con una inversión estimada de \$ 14,023 millones.

Mapa 1: Plataforma logística y megaproyectos en Centroamérica



Elaborado por PRISMA, basado en García Vettorazzi y Lebeau (2007); Uribe (2007); Caballero y Maradiaga (2007); Miranda (2006); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

Mapa 2: SIEPAC, REDCA y proyectos financiados por el Banco Mundial en Centroamérica



Elaborado por PRISMA, basado en The World Bank Group (2012) <http://maps.worldbank.org/lac>; Proyecto Integración y Desarrollo MESOAMÉRICA (2010); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

Cuadro 4
Leyes de promoción de inversiones, por país

Pais	Leyes de promoción de inversión
Guatemala	Ley de zonas francas (1989); Ley para la actividad exportadora y maquila (1989); Ley forestal (1996); Ley de minería (1997); Ley de comercialización de hidrocarburos (1997); Ley de inversión extranjera (1998); Ley de libre negociación de divisas (2000).
Honduras	Ley de inversiones (1992); Ley de incentivos al turismo (1998); Ley de simplificación administrativa (2002); Ley de protección y promoción de inversiones (2011); Ley de promoción de alianzas público-privadas (2010).
El Salvador	Ley de zonas francas industriales y de comercialización (1998); Ley de inversiones (1999); Ley de turismo (2005); Ley de servicios internacionales (2007);
Nicaragua	Ley de incentivos a zonas francas (1991); Ley de incentivos turísticos (1999); Ley especial sobre exploración y explotación de minas (2001); Ley de residentes, pensionados y retirados (2002); Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal (2003); Ley de incentivos de energías renovables (2005);
Costa Rica	Ley de zonas francas (1990 y modificaciones 2010)
Panamá	Ley de estabilidad jurídica de las inversiones (1998); Ley "Sede regional de empresas multinacionales" (2007); Certificados de fomento industrial y fomento a las agroexportaciones (2009).

Fuente: Elaboración propia a partir de información de agencias de promoción de inversiones de cada país.

Por otro lado, existe un conjunto de políticas sectoriales orientadas a promover sectores económicos específicos como las actividades industriales en zonas francas, el turismo, la minería, la exploración y explotación de hidrocarburos, las plantaciones y producción forestal, los servicios logísticos y empresariales, entre otros.

La creación y/o fortalecimiento de las agencias de promoción de inversiones forma parte de las estrategias en todos los países de la región (Cuadro 5), lo que ha derivado en una mayor competencia y en la realización de acciones con un mayor grado de focalización pasando a un enfoque más activo y agresivo basado en el establecimiento de incentivos más atractivos que incluyen nuevos sectores y nuevas oportunidades de negocios, así como inversiones más sofisticadas. (CEPAL, 2007)

Cuadro 5
Agencias de promoción de inversiones y sectores estratégicos, por país

Pais	Agencia y año de creación	Sectores estratégicos para invertir
Guatemala	Invest in Guatemala, 1997	Agroindustria y forestal; manufacturas; turismo; servicios empresariales a distancia (call centers); energía; minería; petróleo y gas
Honduras	FIDE, Inversión y Exportaciones	Agroindustria; turismo; manufactura textil; servicios; forestería; infraestructura; energía; turismo
El Salvador	Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), 2011	Aeronáutica; agroindustria; electrónica; servicios empresariales a distancia; textiles especializados y confección; turismo
Nicaragua	ProNicaragua, 2002	Textiles y confección; turismo; servicios empresariales a distancia; manufactura ligera y ensamblaje; agroindustria y forestal; energía
Costa Rica	Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), 1984	Centros de contacto y servicios empresariales compartidos; manufactura avanzada (telecomunicaciones, software, componentes electrónicos, automotriz, dispositivos médicos); tecnologías limpias
Panamá	a) Dirección Nacional de Promoción de la Inversión b) Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PROINVEX), 2010	No se identifican sectores estratégicos específicos

Fuente: Elaboración propia a partir de información de agencias de promoción de inversiones de cada país.

Ejemplo de este tipo de políticas más agresivas de atracción de inversiones es la iniciativa 'Honduras is Open for Business' y las Ciudades Modelo, también en Honduras. Como iniciativa recién lanzada a mediados de 2011, Honduras is Open for Business, se enmarca en el Programa Nacional de Promoción de Inversiones, pero además, es complementada con una cartera de proyectos de inversión en los sectores de agronegocios, energía, forestería, infraestructura, industria y turismo. Los 147 proyectos tota-

lizan un monto global de US\$ 14,456.4 millones (Ver Cuadro 6). Además de la cartera de proyectos propuestos, forman parte de esa iniciativa la Ley de Protección de Inversiones, la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas y el Programa Nacional de Empleo por Horas.

Cuadro 5
Cartera de proyectos “Honduras is Open for Business”
(Millones de US\$ y porcentajes)

Sectores	Proyectos	%	Montos	%
Agronegocios	45	31%	965.5	7%
Energía	17	12%	2,526.6	17%
Forestería	18	12%	1,295.5	9%
Infraestructura	33	22%	8,772.8	61%
Industria y servicios	2	1%	10.8	0%
Turismo	32	22%	882.2	6%
Totales	147	100%	14,453.4	100%

Fuente: Elaboración propia basada en información contenida en <http://www.hondurasisopenforbusiness.com>.

Las ‘Ciudades Modelo’ es una nueva modalidad de inversiones que se promueve en Honduras. En Agosto de 2001, el Congreso hondureño aprobó el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo - RED (La Gaceta, 2001). El artículo 2 de dicho Estatuto, define las RED como *“entes del Estado de Honduras creadas con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de los hondureños”* (Ibid).

Considerando en su conjunto las iniciativas existentes, Centroamérica atraviesa por un replanteamiento profundo de las estrategias de promoción de inversiones. Con más de una década de implementación del Proyecto Mesoamérica, los avances alcanzados ya permiten evidenciar un replanteamiento en el rol de los territorios a lo largo y ancho de la región.

Si bien los nuevos sectores de atracción de inversiones nacionales, regionales y transnacionales están fuertemente vinculados con los servicios, hay una fuerte vinculación con el papel de las inversiones en infraestructura (transporte, energía y telecomunicaciones), pues son los pilares fundamentales para convertir a Centroamérica en una plataforma logística fuertemente articulada a los flujos internacionales de mercancías.

Además de estas reformas, una amplia gama de iniciativas se han implementado en el marco del Proyecto Mesoamérica, o asociados al Tratado de Libre Comercio (CAFTA). Con respecto a la primera iniciativa, se ha promovido la armonización de marcos institucionales en temas energéticos a lo largo de la región para facilitar la operación del mercado eléctrico regional, bajo la iniciativa SIEPAC. Los tratados de libre comercio también han requerido cambios en legislación para garantizar el trato igualitario, tanto de inversionistas internacionales, como regionales, así como nuevas reglas en temas de inversiones públicas y propiedad intelectual, entre otros (Schatan et al, 2008). Si bien hay diversas formas en que se han implementado las legislaciones respecto a la inversión extranjera y los cambios vinculados a los tratados de libre comercio, no queda duda que la región ha seguido un rumbo agresivo de orientación al exterior. Esto se evidencia también en el índice de la Libertad Económica, publicada por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, donde los países centroamericanos pasaron de tener un ranking por debajo del promedio mundial en 1995 a estar por encima del promedio mundial en 2011, respecto a las condiciones que favorecen el flujo de inversiones, con excepción de Costa Rica y El Salvador que siempre estuvieron por encima del promedio (cálculos propios a partir de datos de Heritage Foundation).

Los tratados de libre comercio también han sido clave en conducir a una homologación y armonización de reglas y normas sobre inversión. Si bien los alcances de este impacto son debatibles, esta homologación ha facilitado la formación de grupos regionales de inversión, que compiten y se articulan de distintas formas con otros grupos transnacionales vinculados a otros centros de capital en la economía global. (Schantan et al, 2008)

La Corporación Financiera de Inversiones (IFC, por sus siglas en inglés) ha sido activa en los sectores agroindustrial, forestal y energético. En el sector azucarero y energético, la IFC ha apoyado a Pantaleón Sugar Holdings Company Ltd. con varios préstamos. Esta empresa es la mayor productora de azúcar en Centroamérica, con ingenios en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Desde 2007, la IFC también ha apoyado a Pantaleón y sus subsidiarias con paquetes financieros por al menos \$130 millones, que combinados con inversión proveniente de estos grupos privados sumaron unos \$340 millones en la región para aumentar la producción de azúcar y para la construcción de plantas de etanol, entre otros (IFC, 2011; IFC, 2011a; IFC, 2011b). La IFC también ha apoyado inversiones en Nicaragua, a través de Nicaragua Sugar Estates Limited, uno de los mayores productores de azúcar en Centroamérica, con al menos dos préstamos de \$25 millones para expandir la producción, adquiriendo 1,500 hectáreas de tierras en Nicaragua, mejorar la eficiencia en los ingenios azucareros e invertir en nuevas plantaciones. (IFC, 2011c)

La IFC también ha apoyado inversiones en el sector de aceites de palma. En 2009 aprobó un préstamo de \$30 millones a la Corporación Dinant S.A., empresa hondureña de alimentos y palma africana con un alto grado de integración vertical desde las plantaciones hasta la producción de alimentos. Estos fondos fueron parte de un proyecto de inversión privada de \$75 millo-

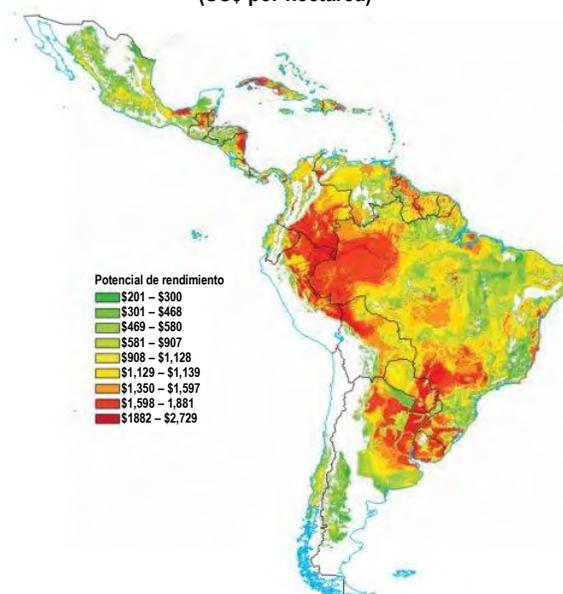
nes, incluyendo el desarrollo de plantaciones de palma africana y el aumento de la capacidad de producción en las divisiones de aceites comestibles (IFC, 2011d). Además, la IFC ha aprobado un préstamo destinado a varias empresas que forman parte del Grupo Jaremar, caracterizado por un alto grado de integración vertical en alimentos y aceite de palma, e incluye otro préstamo por \$25 millones para un proyecto con una inversión total de \$65 millones para ampliar la producción de la palma y construir una planta de biogás, entre otros (IFC, 2011e). Además de estos proyectos, la IFC apoya con una operación por \$25 millones a Cukra en Nicaragua (Cukra Development Corporation y Río Escondido Industrial, S.A.); la naturaleza de este proyecto no está clara, pero la empresa se especializa en el cultivo y producción de aceite de palma (IFC, 2011i). La IFC también financia al sector forestal en Nicaragua (\$10 millones para un proyecto de \$22 millones) (IFC, 2011f) y al sector hidroeléctrico, apoyando la construcción de proyectos hidroeléctricos en Panamá y Honduras por montos de al menos \$70 millones. (IFC, 2011g; IFC, 2011h)

Además de lo anterior, Centroamérica ya comienza a ser una región receptora de nuevos flujos de inversión como resultado de la 'fiebre por la tierra', que se vincula con los acelerados procesos de aumento en la demanda mundial de alimentos, madera, piensos y biocombustibles (Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011).

Como se muestra a nivel mundial, en dichos flujos hay una confluencia de inversiones extranjeras, nacionales e intrarregionales, y están profundizando las presiones sobre la tierra que se explica por un renovado interés por grandes extensiones de tierra de parte de distintos tipos de inversionistas. De hecho, en una perspectiva regional, más allá de Centroamérica, también existen propuestas que buscan responder a las 'nuevas oportunidades de inversión' derivadas

del aumento en la demanda mundial de alimentos y otras materias primas, tal como la realizada por Gunther Fischer y Mahendra Shah (citado en Deininger y Byerlee, 2011), según la cual, en América Latina habrían territorios específicos para promover inversiones y obtener rendimientos importantes por hectárea de tierra (Ver Mapa 3).

Mapa 3
Valor máximo potencial de rendimiento
para América Latina y el Caribe
(US\$ por hectárea)



Fuente: Fischer y Shah, citado en: Deininger y Byerlee (2011).

Si bien estas aún son propuestas, ciertamente forman parte de las opciones de distintos inversionistas, tanto nacionales, regionales como transnacionales para Centroamérica. Aunque la escala es sustancialmente menor en comparación con América del Sur y otras regiones del mundo, en territorios como Petén, la Mosquitia hondureña y la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, hay evidencias de que estos son procesos que ya están iniciando.

Además de que las estrategias de superación de la pobreza rural y de manejo de recursos naturales en Centroamérica, a menudo excluyen

confrontar las dinámicas territoriales prevalentes en los territorios, cada vez más las estrategias y políticas de promoción de inversión (nacional, regional y transnacional), incluso las inversiones públicas mismas, están reconfigurando un contexto sumamente complejo para avanzar hacia modalidades de desarrollo que pongan al centro las estrategias y los medios de vida de comunidades rurales, campesinas y pueblos indígenas.

A pesar de esto, las estrategias de inversión de manera generalizada parten de supuestos sumamente limitados, como los criterios de “uso potencial del suelo”, que se difundieron ampliamente durante la etapa de auge de la llamada revolución verde. Por cierto, criterios como estos, están predominando fuertemente en la actualidad, bajo el afán de aprovechar las oportunidades derivadas del aumento de la demanda mundial de alimentos, productos agroindustriales, agrocombustibles y carbono forestal, entre otros, sin considerar que en los distintos territorios en que se proponen nuevas oportunidades de inversión, existen diversas formas y estrategias de uso y manejo de recursos a cargo de una amplia diversidad de actores y grupos sociales.

En general, las estrategias y políticas de inversión impulsadas por el Estado a menudo terminan reproduciendo patrones de exclusión, despojo y expulsión de grupos y comunidades rurales. Esto se explica por el lugar preponderante que se le asigna a las estrategias y políticas de promoción de inversiones, pues bajo los argumentos de generación de actividades productivas que generan empleos e ingresos, crecimiento económico, así como otros objetivos como la transferencia tecnológica, el progreso y modernización, otros objetivos de política igualmente importantes, como la equidad y sustentabilidad, no forman parte de las agendas de atracción y promoción de inversiones en los países.

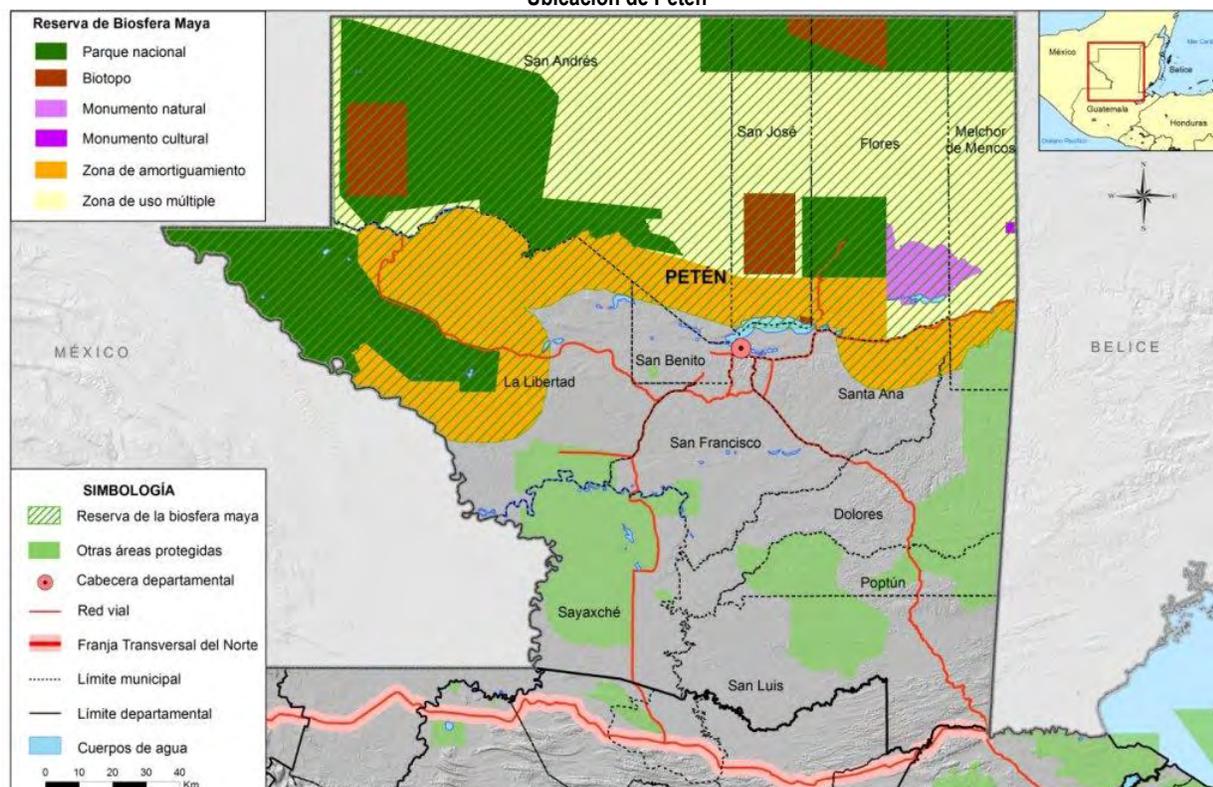
Inversiones y dinámicas territoriales en Petén, Guatemala

Petén es una región que ha experimentado enormes cambios a lo largo de los últimos sesenta años. Desde el proyecto de colonización promovido a través del FYDEP a partir de los años cincuenta, hasta el proyecto de conservación iniciado en los años noventa del siglo pasado con la creación de la Reserva de la Biosfera Maya, así como las diversas estrategias por parte de distintos actores, han configurado las actuales dinámicas territoriales en Petén. El modelo conservacionista implementado en Petén se ha ido debilitando frente a un contexto de creciente ingobernabilidad, presencia de

poderes fácticos y severas disputas sobre los recursos que provienen tanto de antiguos, como de nuevos intereses en el territorio. En su mayoría, las nuevas dinámicas territoriales se impulsan por inversiones privadas (actuales y futuras), que en buena medida han sido facilitadas y apoyadas por la inversión estatal, por la banca multilateral, e incluso por la cooperación internacional.

Vale la pena destacar dos iniciativas que han sido de particular importancia: la primera es la construcción de la carretera Franja Transversal

Mapa 4
Ubicación de Petén



Elaborado por PRISMA, basado en SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

del Norte, una iniciativa contemplada en el marco del Proyecto Mesoamérica, iniciada por el gobierno en 2009 y financiada con un préstamo del BCIE por \$203 millones. La segunda iniciativa consiste en un grupo de programas de regularización de tierras que se implementan desde 1998, incluyendo dos proyectos del Banco Mundial por más de \$103 millones, con un fuerte énfasis en Petén. También se incluyen una amplia gama de proyectos enfocados en la regularización de las tierras de Petén, que han recibido financiamiento del Gobierno de Guatemala, ONGs, y la cooperación internacional, incluyendo USAID, el Gobierno de Austria y la Unión Europea. (SEGEPLAN, 2011)

Palma africana

La palma africana ha demostrado un enorme nivel de crecimiento a lo largo de los últimos 10 años en Guatemala. Se estima que en el año 2000 la palma tenía una extensión aproximada de 14,000 hectáreas, aumentando a 100,000 en 2010 (Alonso-Fradejas et al, 2011). La mayoría de esta extensión se ha concentrado en Petén, donde se dedican aproximadamente 44,173 hectáreas al cultivo, casi todo en el suroeste, en Sayaxché. Justo al sur, en Alta Verapaz y Quiché (municipalidades de Chisec, Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá e Ixcán) han ocurrido procesos de expansión de la palma hasta cubrir aproximadamente 16,800 hectáreas. Se aúna a esto un despliegue territorial de 18,631 hectáreas en Izabal y Polochic (integrando partes de Alta Verapaz e Izabal), así como nuevos procesos de expansión en la costa sur del país.

Por esta razón, es importante considerar no solamente la expansión de la palma ocurrida en Petén, sino también en el territorio que abarca las "tierras bajas del norte", al sur de Petén, además de las municipalidades Chisec, Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá e Ixcán

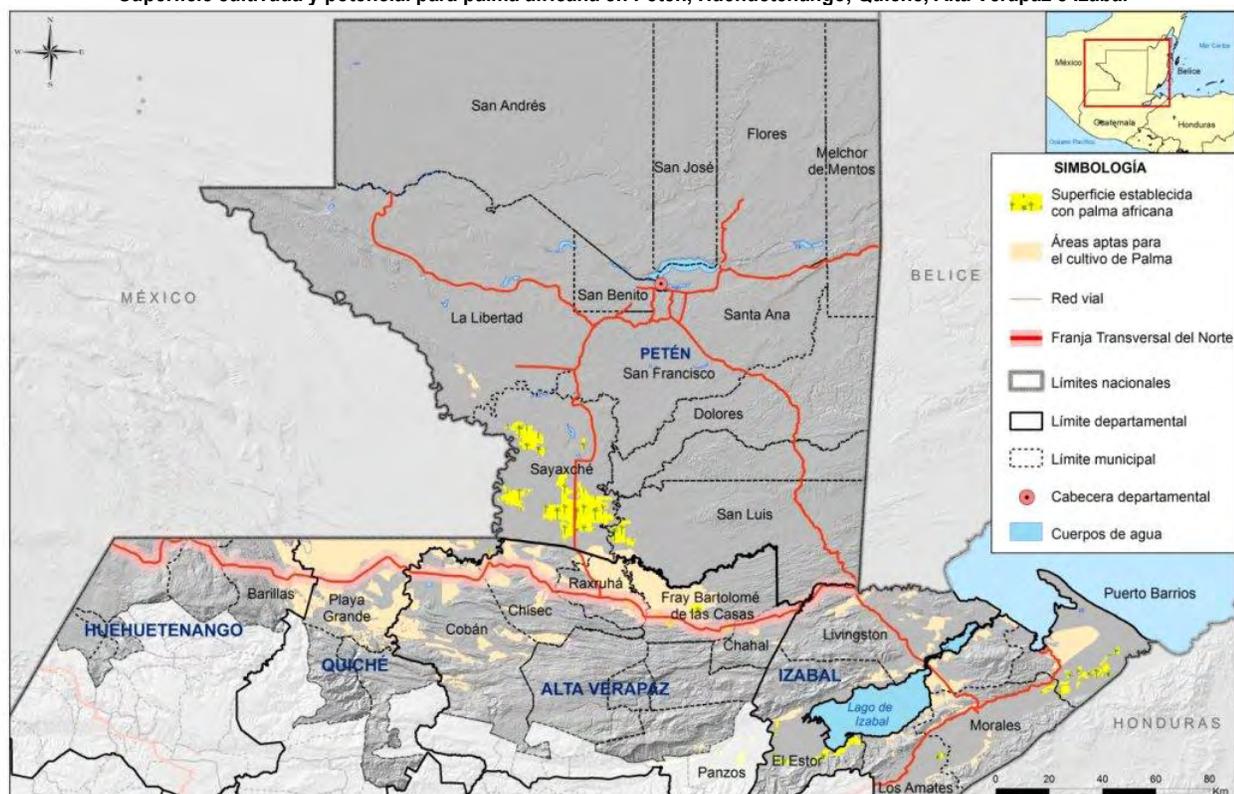
de Alta Verapaz y Quiché, pues estas tierras son las que presentan condiciones idóneas para el cultivo de palma. De hecho, se afirma que están entre los mejores y más productivos suelos del mundo. Asimismo, como se discutirá más adelante, es en estas regiones donde se observa y se pueden prever fuertes implicaciones para las comunidades rurales de Petén, que incluyen procesos de despojo y desalojo asociados con la expansión de la palma, que se traducen en procesos de expulsión de comunidades de estas zonas hacia otras regiones del país, incluyendo áreas protegidas y las concesiones forestales de la Reserva de la Biosfera Maya.

Las implicaciones para el norte de Petén son más evidentes cuando se comparan las fuertes densidades poblacionales en estas zonas con la poca densidad de las áreas del norte. Es importante también señalar los cambios en el uso de la tierra que afectan la seguridad alimentaria y los servicios ecosistémicos del territorio, pues se estima que entre 2005 y 2010, el 23% de la expansión de la palma en la región (Ver Mapa 5) reemplazó la producción de granos básicos, mientras que el 27% de la expansión ocurrió a costa del bosque, incluyendo el 1% de humedales, así como de nuevas presiones sobre los recursos hídricos de la región que ejerce el cultivo. (Alonso-Fradejas et al, 2011)

Actores y mercados para la palma africana

Congruente con las tendencias que existen en el sector de la agroindustria, tanto a nivel regional como a nivel global, las plantaciones de la palma africana en Guatemala se encuentran bajo el control de pocos actores, con importantes y crecientes vínculos transnacionales. De los seis actores que dominan la palma africana en Petén y en la Franja Transversal del Norte (Solano, 2010), podría considerarse que existen dos tipos generales: el primero, formado principalmente por grupos empresariales vinculados a la pro-

Mapa 5
Superficie cultivada y potencial para palma africana en Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal



Elaborado por PRISMA, basado en Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP y Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CEMEC-CONAP) (2010); SIGMAGA (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

ducción de aceites comestibles, además de otros productos para usos industriales como el jabón, detergentes, etc.; mientras que los del segundo tipo provienen de grupos empresariales más orientados hacia la agroindustria y agrocombustibles.

Dentro del primer tipo se incluye Olmeca, uno de los mayores productores de aceites, margarinas y aderezos en Guatemala, asociado también a productores de jabones y detergentes, empresa propietaria de la marca de aceite Olmeca, la cual disfruta de una fuerte cuota del mercado en Guatemala (Solano, 2010). El segundo actor es NAISA, que integra parte de un grupo empresarial que incluye Alimentos Ideal (Idealsa), uno de los más antiguos productores

de aceites, grasas y jabones en el país, con presencia a lo largo de Centroamérica. Este grupo se ha asociado con las familias Köng Vielman, Köng Serra, Köng Subirá y Urruela Köng (Solano, 2010; Solano y Solís, 2011), quienes controlan La Luz-Henkel, una alianza de capital Guatemalteco-Alemán que utiliza aceite de palma como materia prima para la producción de jabones y detergentes (Solano, 2010). El tercer actor, INDESA, también se puede vincular a la familia Köng, siendo la familia Urruela Köng los principales socios de esta empresa, junto con la familia Maegli (Solano y Solís, 2011). INDESA se especializa en la producción de aceites, margarina, manteca y detergentes, con las marcas Capullo y el aceite Cora. (Solano, 2010)

Olmecca tiene la capacidad instalada de procesamiento más alta que cualquier otro grupo, con siete plantas extractoras y una refinería. Por su parte, NAISA cuenta con una refinería y dos plantas extractoras (y otra en proyecto), mientras INDESA tiene proyectada la construcción de una planta extractora. (Solano, 2010)

El segundo tipo de actores provienen principalmente de la agroindustria o el sector energético, e incluye Palmas del Ixcán, una subsidiaria de Green Earth Fuels de Houston, Texas, creada por Riverstone Holdings, The Carlyle Group y Goldman Sachs. Si bien se estableció para producir biodiesel, Green Earth Fuels es una empresa de energía “renovable”, pocos meses después de iniciar sus operaciones anunció que produciría palma exclusivamente para fines alimenticios (Solano, 2010). El segundo actor en este grupo es la Corporación Agroindustrial del Caribe S.A., la cual a su vez forma parte de Agroamérica, un grupo agroindustrial regional que se especializa en la producción de frutas de exportación, como piña, mango y rambután (Solano, 2010). Además, vale la pena señalar que este grupo se ha asociado con varias iniciativas agroindustriales y de agrocombustibles en México. (Solano, 2010)

El último grupo empresarial es Tikindustrias y Agropecuaria Montana, S.A., asociados con el Ingenio El Pilar de la familia Weissenberg (Solano, 2010), una de las familias azucareras con enorme influencia sobre las políticas públicas (Kraznic, 2005). Con respecto a la capacidad de procesamiento, Palmas del Ixcán (Green Earth Fuels/Riverstone Holdings/Goldman Sachs/Carlyle Group) tiene planificado construir entre tres y cuatro plantas extractoras, con los cual, se podrían convertir en uno de los mayores productores de palma (Solano, 2010). Por su parte, Agroindustria del Caribe cuenta con un extractor en funcionamiento y otro en proyección, mientras Tikindustrias tiene una planta extractora en planificación. (Solano, 2010)

Además de las estrechas relaciones que se observan en este grupo, también se han generado alianzas entre grupos nacionales con capital regional. Este es el caso del establecimiento en 2009 de la empresa Comercializadora de Productos de Consumo, S.A. (COPROSA) en El Salvador, una iniciativa conjunta entre un grupo de empresarios aceiteros de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Los miembros guatemaltecos se vinculan a NAISA e INDESA, mientras el grupo también integra familias asociadas con el Grupo Nomar, el mayor productor de aceites en Centroamérica con sede en Costa Rica, pero con presencia en Nicaragua y Honduras por medio del Grupo Jaremar. (Solano y Solís, 2011)

La producción de estos grupos se destina tanto a nivel nacional como internacional. Los principales consumidores de palma en el país integran, además de las ya mencionadas, empresas regionales y/o transnacionales como Bimbo, Frito Lay, Colgate-Palmolive y Unilever. La demanda nacional alcanza entre 40% y 47% de la producción de palma y sus derivados. Una buena parte de este mercado se ha desarrollado en años recientes, pues se ha buscado reemplazar la soya importada con el aceite de palma para usos comestibles e industriales (Solano, 2010). La producción de biodiesel en escalas importantes en Guatemala es prácticamente nula, pues no existe un mercado que ofrezca rentabilidad, y tampoco existen políticas que la promuevan. (Solano, 2010)

Se estima que entre 53% y 60% de la producción se exporta al exterior (Solano, 2010), principalmente a México, que recibe más del 75% de las exportaciones guatemaltecas de productos de palma. No se ha podido confirmar el uso final de los productos exportados, pero se conoce que hay una considerable demanda mexicana hacia sectores industriales, mientras que también hay producción de biodiesel. El Salvador

es otro país que importa palma de Guatemala para producir biodiesel. (Solano, 2010)

El papel del Estado y organismos oficiales

El principal programa explícitamente relacionado a la palma es PRORURAL, que se enfoca en fomentar la producción de la palma entre pequeños productores, para luego venderla a las plantas de extracción. Promotores de este Programa, quienes también tienen estrechos vínculos con las empresas dominantes del mercado de la palma, afirman que la iniciativa busca promover la expansión de este cultivo pero evitando el desalojo de comunidades (Solano, 2010). El Programa es financiado por el Fondo de Desarrollo, que tiene un presupuesto de \$1.5 millones y lleva aproximadamente 2,100 hectáreas sembradas de las 6 mil que tiene planeado. Además, involucra la firma de un contrato de 25 años para un crédito condicionado a pequeños productores, como pago para futuros servicios (Alonso-Fradejas et al, 2011), que es un componente del Programa de Maíz, el cual forma parte de la estrategia de seguridad alimentaria del gobierno. (Solano, 2010)

De los programas relacionados directamente con la palma, quizás como de mayor importancia se deben señalar los relativos a la regularización de tierras, con impactos diferenciados en la región, pero que en numerosas ocasiones han facilitado el acceso de grandes empresas palmeras, desalojando a comunidades Q'eqchi' por medio de diversos métodos, incluyendo violencia o amenazas de violencia (Grandia 2006; Ybarra, 2008; SEGEPLAN, 2011). La construcción de la Franja Transversal del Norte también ha resultado de fundamental importancia, pues reducirá los costos de transacción para la producción y comercio del cultivo, incrementando la rentabilidad económica de la tierra en estas zonas y atrayendo mayor interés por parte de inversionistas.

Además de estos programas, se ha citado una amplia gama de casos en los que la débil institucionalidad estatal en Guatemala ha permitido la expansión de este cultivo. Esto se evidencia con el incumplimiento en el pago de impuestos estatales, así como de las leyes y/o certificaciones ambientales. En muchos casos, la expansión de la palma se ha dado por la capacidad de actores poderosos para aprovechar los fallos institucionales, los traslapes entre instancias y la ambigüedad en el marco legal (Alonso-Fradejas et al, 2011), ante lo cual, el gobierno no ha tenido la voluntad política para corregir.

Trayectoria de la palma africana en las tierras bajas del norte

Un análisis de los grupos involucrados en la palma africana permite ver una variedad de lógicas de incursión de este cultivo, desde el control sobre materias primas para fines alimenticios o industriales, hasta convertirlo en otro eje de acumulación para la agroindustria o para los agro-combustibles. Los distintos usos de la palma le dan una flexibilidad importante, por lo que todos los usos finales (comestibles, industriales, agro-diesel, agrogas, etc.) se suman para constituir un mercado amplio en plena expansión.

Ya se han observado indicios de diversificación de la producción, como el caso de actores de la industria de aceites comestibles e industriales produciendo agro-diesel (por ejemplo, PROBESA/INDESA, además de grupos como Palmas de Ixcán produciendo para fines alimenticios cuando la apuesta inicial era para agro-combustibles (Solano, 2010). De este modo, las características de estas empresas palmeras son consistentes con las tendencias regionales y globales, que incluyen un mayor interés hacia la concentración (Holtz-Gimenez y Kenfield, 2008), así como también la creciente convergencia entre empresas y sectores alimenticios y energéticos. (Roberts, 2007)

Las estrechas relaciones que se observan entre algunos grupos (INDESA y NAISA, por ejemplo), y alianzas como la suscrita por COPRONSA a nivel regional, sugieren que la dinámica entre el grupo concentrado de empresas podría en algunos casos trascender la competencia, y como afirman Solano y Solís (2011), llegar a existir relaciones de colaboración y/o coordinación para acaparar la mayor cuota del mercado regional posible durante esta etapa de expansión.

Cualquiera que sea el caso respecto a las relaciones inter-empresariales, parece claro que las tierras bajas del norte se han vuelto altamente estratégicas para grupos de capital nacional y transnacional, pues reúne condiciones biofísicas idóneas para el cultivo, y la nueva infraestructura de transporte permite aprovechar aún más la cercanía con el mercado mexicano, el mayor importador de la palma guatemalteca. Se reporta que las industrias aceiteras en México también ven en Guatemala y en la región centroamericana una alternativa importante para romper con la dependencia de los mercados asiáticos de aceites. (Solano y Solís, 2011)

En este contexto de fuertes apuestas de inversionistas transnacionales, no hay indicios de la voluntad o capacidad del Estado guatemalteco para frenar la continua expansión de la palma en la región. Si bien entidades como MARN, CONAP o SEGEPLAN se han opuesto por las fuertes consecuencias sociales y ambientales relacionadas con este cultivo, es dudoso si podrán contrarrestar los grupos de poder que buscan expandirse en ese territorio. De su parte, las empresas palmeras han impulsado programas para proteger sus intereses, incluyendo campañas públicas y certificaciones sociales y ambientales, los que a pesar de no ser monitoreados consistentemente, brindan cierto aval para la expansión del cultivo frente a críticas sociales y ambientales. (Alonso-Fradejas et al, 2011)

En este contexto, el programa gubernamental PRORURAL debe ser abordado con un alto grado de escepticismo, no solamente respecto a su capacidad sino también a su disposición de fomentar el 'desarrollo rural' en estas zonas. Las estrechas relaciones entre las empresas palmeras dominantes y este Programa (Solano, 2010) sugieren que el crédito condicionado a pequeños productores para contratos de arrendamiento de 25 años benefician, principalmente, a las empresas palmeras. Este beneficio se puede lograr con el control, sobre la producción, ejercido por medio del mercado con pocos compradores del cultivo, por lo tanto, se considera que este programa puede constituir un mecanismo que perjudica las modalidades tradicionales de medios de vida en la zona.

En resumen, se identifica la existencia de fuertes intereses nacionales y transnacionales comprometidos con la expansión de la palma africana en Guatemala y, en particular, en las tierras bajas del norte. Los programas clave de los bancos multilaterales y la acción del Estado han facilitado la expansión de los cultivos (programas de regularización de tierras y la Carretera Transversal del Norte), mientras se han creado nuevos mecanismos para expandir la producción en parcelas campesinas con PRORURAL. Las instancias estatales opuestas a la expansión tienen poco peso político para contrarrestar estas tendencias.

De no profundizarse la crisis financiera y económica global, se prevé una continuada expansión de la palma en estas zonas a corto y mediano plazo. La ubicación exacta, en particular, comparando Petén con el resto de las tierras bajas del norte no está del todo claro, pues las estimaciones sobre la tierra apta para la palma varían sustancialmente. Se han incluido en el mapa estimaciones conservadoras, las cuales sugieren que se ha agotado la tierra apta para la palma en Petén, y las zonas de mayores expansiones en el futuro se darán justo al sur del de-

partamento en Alta Verapaz y Quiché (en las municipalidades Chisec, Cobán, Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá e Ixcán). Aunque algunos sugieren que Petén ofrece oportunidades mucho más amplias para la expansión del cultivo (Solano y Solís, 2011). En todo caso, como bien afirma Alonso-Fradejas (2011) estos estudios no se tratan de un ordenamiento territorial y, además, los procesos de desalojo y despojo en las tierras bajas del norte podrían seguir ejerciendo presiones en el norte de Petén, independiente de originarse en el sur de este departamento, en Quiché o Alta Verapaz.

Nuevos cultivos no tradicionales: Papaya y jatropha

De forma paralela con la palma africana, se identifica la existencia de otros cultivos de importancia que si bien aún no demuestran la escala ni el dinamismo del sector palmero, tienen potencial para un mayor crecimiento, aumentando así la presión al sur de la Reserva de la Biosfera Maya. Entre estos cultivos se incluyen la papaya y la jatropha.

Papaya

Petén reúne características clave para la exportación de papaya, pues además de las condiciones de clima y lluvias propicias para el cultivo, 29,500 km² (más del 80% del territorio) están libres de la mosca del mediterráneo (Maza, 2001). Este último factor es clave, al ser un requisito para la exportación a los Estados Unidos, mercado que importa el 53% de papaya en el mundo (MINECO, s.f.). En su mayoría, la papaya guatemalteca se exporta, pues únicamente 25% de la producción se consume a nivel nacional. (Gómez, 2009)

No se conoce la ubicación y escala actual de la papaya en Petén, aunque se cree que la mayor parte de la producción se localiza en La Libertad. Si bien entidades como SEGEPLAN opinan

que este cultivo no ha cobrado suficiente fuerza como para ser un rubro importante en el departamento, varias cifras indican que el cultivo ha tenido un crecimiento exponencial durante la última década: la cantidad de papaya (en peso) exportada en 2010 fue más de ocho veces mayor de la cantidad exportada en 2004 (Ver Cuadro 6). Estos datos indican que este cultivo merece mayor atención por su posible expansión, pues la costa sur y Petén son las dos regiones desde las que se exporta la papaya. (Dardón, 2004)

Cuadro 6
Guatemala: Exportaciones de papaya

Año	Valor FOB (US\$)	Peso (Kg)
2002	743,429.0	2,513,195
2006	1,431,016.0	4,214,346
2008	2,107,679.0	9,794,080
2010	3,603,189.0	12,470,485

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva de Guatemala (partida 08072000).

El inicio de la expansión de este cultivo ocurrió a través del Proyecto Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria (PROFRUTA), ejecutado por el Ministerio de Agricultura (MAGA), en el que se ofrecía apoyo técnico para fomentar la producción de varias especies de frutas, entre ellas la papaya. Uno de estos proyectos se estableció en 2003 en La Libertad, con un costo de \$10,500 por manzana (Grandia 2010). Si bien este Programa inició con el fin de beneficiar a pequeños productores, la falta de acceso a insumos y tecnología impedían su incorporación, y al final se decidió vincular a Olmeca (Grandia, 2010), la misma empresa que tiene considerables extensiones de palma.

La papaya también ha recibido apoyo de la Misión Técnica de la República de China en Taiwán desde 2000 a 2008; ejecutada por \$8 millones por año, con un mayor enfoque en la papaya (Smith, 2008). Además, se reporta que la expansión de este cultivo ha sido facilitada por los programas de regularización de tierras. (SEGEPLAN, 2011)

Jatropha

La jatropha, otro posible cultivo de expansión a nivel regional, ha sido objeto de creciente interés en Guatemala por su potencial como agrocombustible. El cultivo no se ha desplegado de una forma significativa en el territorio, pero se han hecho varias inversiones de un tamaño relativamente modesto, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT), el Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (AGROCYT) y la Alianza de Energía y Ambiente de Finlandia. En 2007 ya existía una capacidad instalada para producir 2,090 galones de biodiesel por día, siendo la de Biocombustibles, S.A., la mayor con 1,500 galones por día. (MEM, 2007)

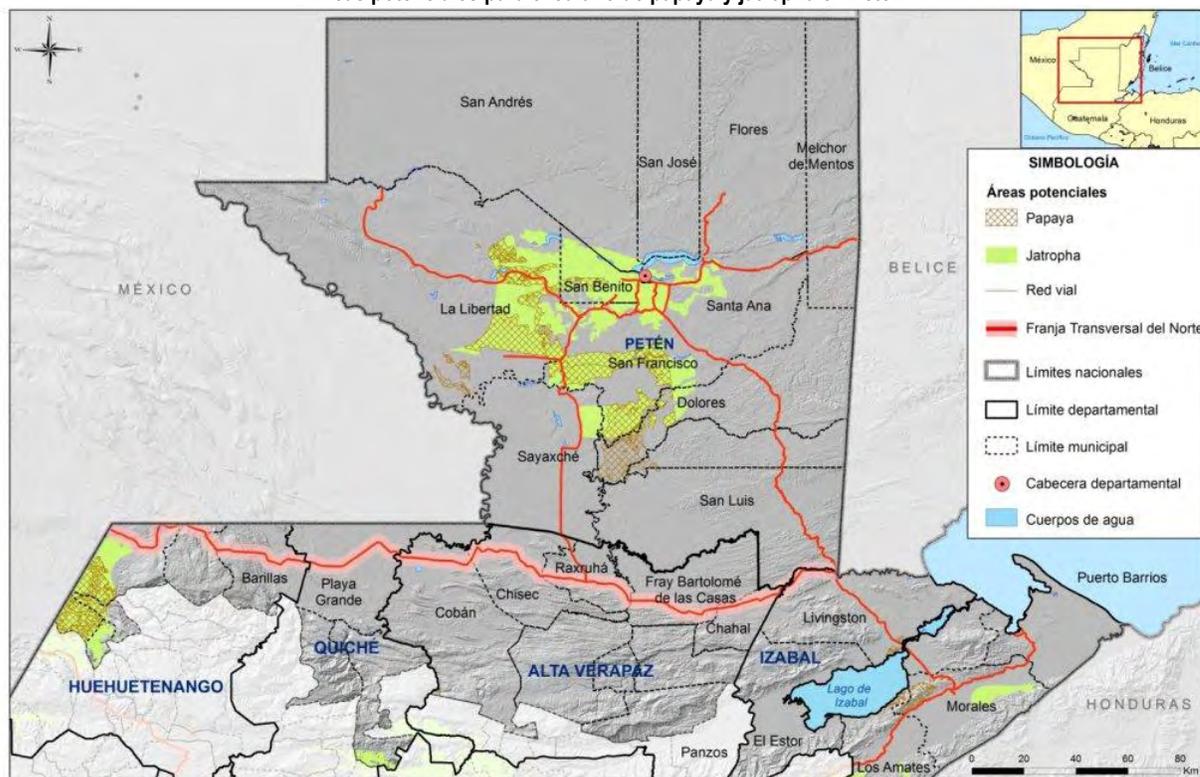
El gobierno guatemalteco ha apoyado los esfuerzos para fomentar este cultivo, brindando

estudios técnicos para identificar las áreas de posible producción. Se determinó que 1,377,576 hectáreas son aptas para el cultivo a nivel nacional, de las cuales 22% (304,867 hectáreas) se encuentran en Petén. (Barillas, 2010)

Trayectorias de los cultivos de papaya y jatropha

Es difícil predecir las proyecciones de la papaya y la jatropha. No se pudo identificar con exactitud los planes de inversiones para la papaya, aunque existe la percepción de “que Petén se está convirtiendo en un proveedor importante de papaya para Estados Unidos” (Gómez, 2009). En el caso de la jatropha, según sus promotores, este cultivo se encuentra en sus fases iniciales con varios proyectos piloto, por lo que la rentabilidad de esta actividad no se ha establecido. Sin embargo, se está discutiendo la

Mapa 6
Áreas potenciales para el cultivo de papaya y jatropha en Petén



Elaborado por PRISMA, basado en SIGMAGA (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

posibilidad de expandir este cultivo por medio de PINFOR e invertir en una planta procesadora en Petén. (SEGEPLAN, 2011)

A pesar de que ambos cultivos constituyen escalas mucho menores que la palma africana, podrían representar una rentabilidad más alta que otras opciones productivas, como la ganadería. Además, si bien hay iniciativas de incorporar a pequeños productores con estos cultivos, también existe la fuerte posibilidad de que se conviertan en monocultivos agroindustriales destinados a la exportación, por lo que las presiones de desalojo, migración y marginación en el departamento seguirían agudizándose.

Ganadería

La ganadería es otra actividad que a lo largo de los últimos 10 años se ha visto en pleno crecimiento. Se estima que para el 2010 existían en el departamento de Petén entre 2.3 millones y 2.5 millones de cabezas de ganado, una cifra cuatro veces mayor que la del año 2000 (Contreras 2010). La superficie dedicada a pastos aumentó de 376,320 hectáreas en 2003, a 1,336,554 hectáreas en 2008 (INE, 2008). No existen mapas detallados que permitan identificar el despliegue específico de la ganadería. Sin embargo, como señala Grandia (2010) hay evidencias que indican que si bien los niveles de ganadería en los departamentos del sur son más concentrados, hay indicios de estabilización en comparación con las municipalidades del norte, como San Andrés, donde se observa una continua expansión. Entre los factores de esta tendencia de expansión hacia el norte se cita la expansión de la palma africana, donde se han reportado varios casos de ganaderos que venden tierras para migrar al norte, frecuentemente hacia áreas protegidas. (Alonso-Fradejas et al, 2011)

La ausencia de información no permite una caracterización precisa de los actores involucrados en la ganadería. Existe ganadería de

pequeños, medianos y grandes productores en Petén, que operan bajo distintas modalidades de producción. Entre los que operan a gran escala figura la narco-ganadería, que brinda a los actores ilícitos en la región una modalidad de lavado de dinero, dominio territorial y una manera de ocultar las pistas de aterrizaje. Estas fincas ganaderas se encuentran a lo largo de la frontera entre Guatemala y México, en Sayaxché, y de forma creciente en el sureste hacia Belice, donde también existe un importante sector de ganadería tradicional (Grandia, 2010; Alonso-Fradejas et al, 2011). Otros actores también involucrados en la inversión ganadera de gran escala incluyen élites urbanas nacionales, empresarios y miembros del ejército. Las fincas de gran escala frecuentemente tienen un mayor impacto en la tenencia y el cambio de uso del suelo. A pesar de que mucha de la expansión ganadera ocurre en áreas donde se prohíbe esta actividad, como en las zonas de amortiguamiento y en áreas protegidas, se ha demostrado poca voluntad o capacidad política para prohibir su expansión.

Hay claras apuestas hacia apoyar la ganadería de gran escala, particularmente en aquellos casos en los que se puede lograr un alto nivel de tecnificación. Esto incluye un programa del MAGA con fondos de la Embajada Estadounidense que estableció un centro de capacitación y manejo genético ubicado en La Libertad, Petén, con el fin de fortalecer el desarrollo pecuario en la región (MAGA, 2011). Otro proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una planta procesadora de carne ubicada en La Libertad (Sánchez, n.p.). También se espera que un nuevo acuerdo comercial entre Guatemala y Venezuela genere un aumento en la exportación de la ganadería que proviene de Izabal y Petén, a través de la empresa ALBA Guatemala (Bolaños, 2011; Perdomo, 2011). Además de estas iniciativas, la expansión ganadera, al igual que la palma y la papaya, también ha sido facilitada en gran medida por los pro-

gramas de regularización de tierras. (Grandia, 2006; SEGEPLAN, 2011)

Más allá de los beneficios económicos de la ganadería, esta actividad se destaca por ser una conveniente manera de controlar vastas extensiones de tierra, por lo que una buena parte de la expansión ganadera no se explica solamente en términos de rentabilidad inmediata, sino que también se trata de una forma de especulación, o control territorial, frecuentemente para ganancias futuras asociadas a intereses de la agroindustria, la palma, el petróleo o el narcotráfico. Se añan a estas presiones las apuestas hacia captar fondos de reforestación por medio de PINFOR, y posiblemente fondos de carbono en el futuro (Grandia, 2010). Es por esto que los crecientes intereses sobre las áreas protegidas generan aún más incentivos para la especulación ganadera, en particular hacia el norte de Petén.

Si bien la evidencia sobre la ganadería es incompleta, se pueden vislumbrar tendencias generales como las que identifica Grandia (2010), según las cuales, la creciente presión sobre la tierra en las zonas del sur de Petén y la Franja Transversal del Norte parecen estar desplazando ganaderos hacia el norte, en búsqueda de tierras más baratas, respondiendo al mismo tiempo a una lógica de especulación. No parece haber suficiente oposición política o social para frenar esta expansión, que por ahora ocupa cada vez más terreno, dejando pocas oportunidades laborales e implicando fuertes impactos ambientales.

Proyectos hidroeléctricos

En el contexto del auge de los precios del petróleo, la alta dependencia de la matriz energética de Guatemala al petróleo importado ha revelado una vulnerabilidad enorme a la volatilidad de los mercados energéticos internacionales. El país depende en un 46% del petróleo para ge-

nerar electricidad, 100% del cual es importado (MEM, s.f.). No es casual entonces que dentro de las estrategias delineadas por el Ministerio de Energía y Minas se apueste fuertemente hacia la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y geotérmicos. Sin embargo, en este momento las posibles represas hidroeléctricas en Petén tienen poca definición. En 2008 varios proyectos de tamaño relativamente modesto tenían autorización temporal o definitiva (SEGEPLAN, 2011), pero no contaban con estudios de factibilidad, ni con diseños. Según Hirsch & Utreras (2010) actualmente no hay ninguna planta hidroeléctrica en proceso de planeación o construcción en el departamento.

Si bien estos proyectos representan una amenaza para las comunidades localizadas en las zonas de construcción, las renovadas propuestas del proyecto binacional México-Guatemala que incluye la construcción de cuatro represas sobre el Río Usumacinta, representa una amenaza de escala mucho mayor. En los planes publicados en 2008, el Ministerio de Energía y Minas nuevamente propone una serie de megaproyectos hidroeléctricos para ser iniciados en distintos momentos a partir de 2016 (MEM/CNE/DPE, 2008). Cada uno requiere de una inversión estimada de \$625 millones, por lo que se estima que será necesaria la combinación de capital estatal y privado (Ver Cuadro 7).

A pesar de estas amenazas, cabe señalar que hay fuerte oposición social y ambiental a estos

Cuadro 7
Potenciales mega-proyectos hidroeléctricos en Petén

Proyecto	Capacidad (MW)	Inicio de Operaciones	Inversión (Millones de dólares)
Usumacinta I*	200	2016-2022	625
Usumacinta II*	200	2018-2022	625
Usumacinta III*	200	2020-2022	625
Usumacinta IV*	200	2022	625

*Proyecto binacional (Guatemala – México).

Fuente: Elaboración propia con base en SEGEPLAN, 2011a; Invest in Guatemala, 2011; MEM/CNE/DPE, 2008.

megaproyectos. Organizaciones como el Frente Petenero contra las Represas se han formado en oposición a las propuestas anteriores de proyectos hidroeléctricos en la región. Asimismo, oficiales mexicanos han denegado en repetidas ocasiones su interés en el proyecto binacional Guatemala-México (Hurtado Paz y Paz, 2010), por lo que el futuro de estas propuestas no está claro.

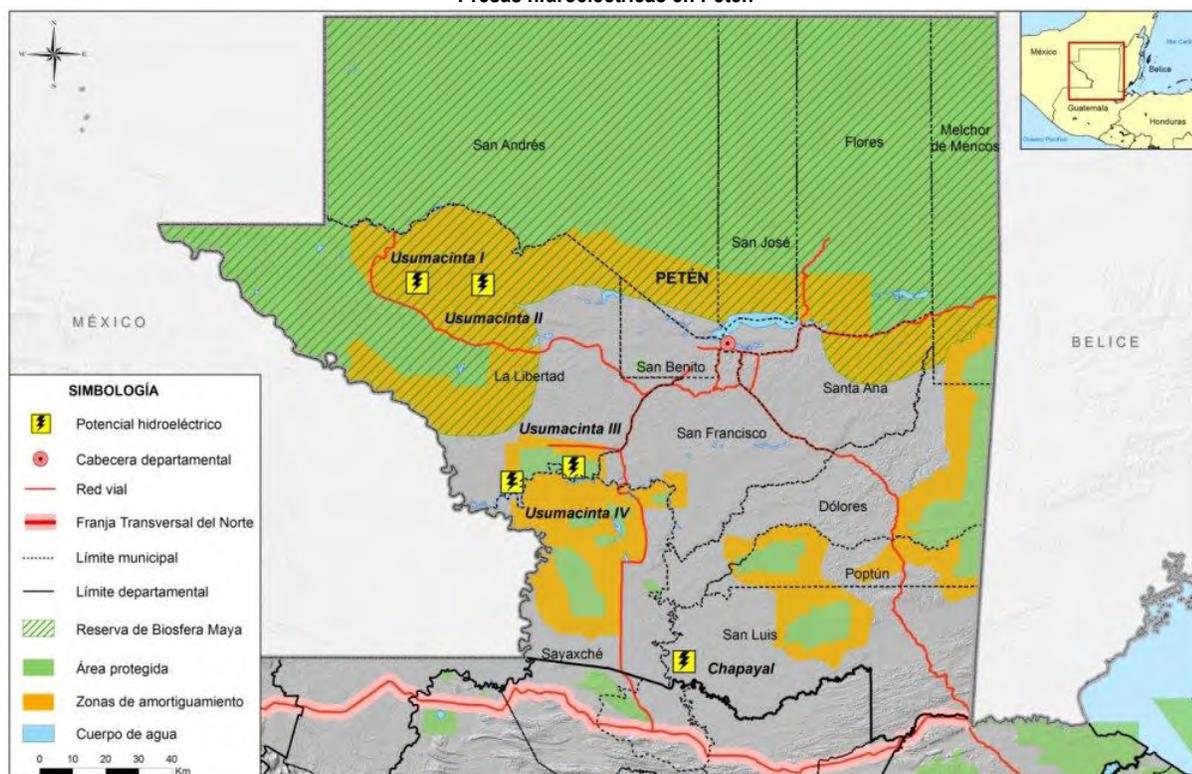
Petróleo

Petén también es un territorio clave para la producción petrolera en Guatemala, siendo el departamento donde se encuentran la mayoría de los hidrocarburos del país, y donde se concentra el 97.4% de la producción nacional (Sandoval, 2009). Las cuencas petroleras Petén Sur y Petén Norte ocupan una gran parte del territo-

rio del departamento, donde el primero presenta enormes traslapes con la Reserva de la Biosfera Maya, incluyendo las áreas pertenecientes a las concesiones forestales comunitarias. Debido a la calidad del petróleo disponible en el país y a la limitada capacidad de refinación, el petróleo obtenido, en su mayoría, se exporta. Por lo tanto, esta producción no contribuye a mitigar la crisis de la dependencia de la matriz energética del país a los precios del petróleo importado.

El auge en los precios del petróleo en el mercado global ha incentivado el interés para la explotación de este recurso en Guatemala. Sin embargo, a pesar de estas nuevas “oportunidades”, la producción nacional en el país ha ido disminuyendo desde 2003, cuando llegó a su punto más alto de 9 millones de barriles, mien-

Mapa 7
Presas hidroeléctricas en Petén



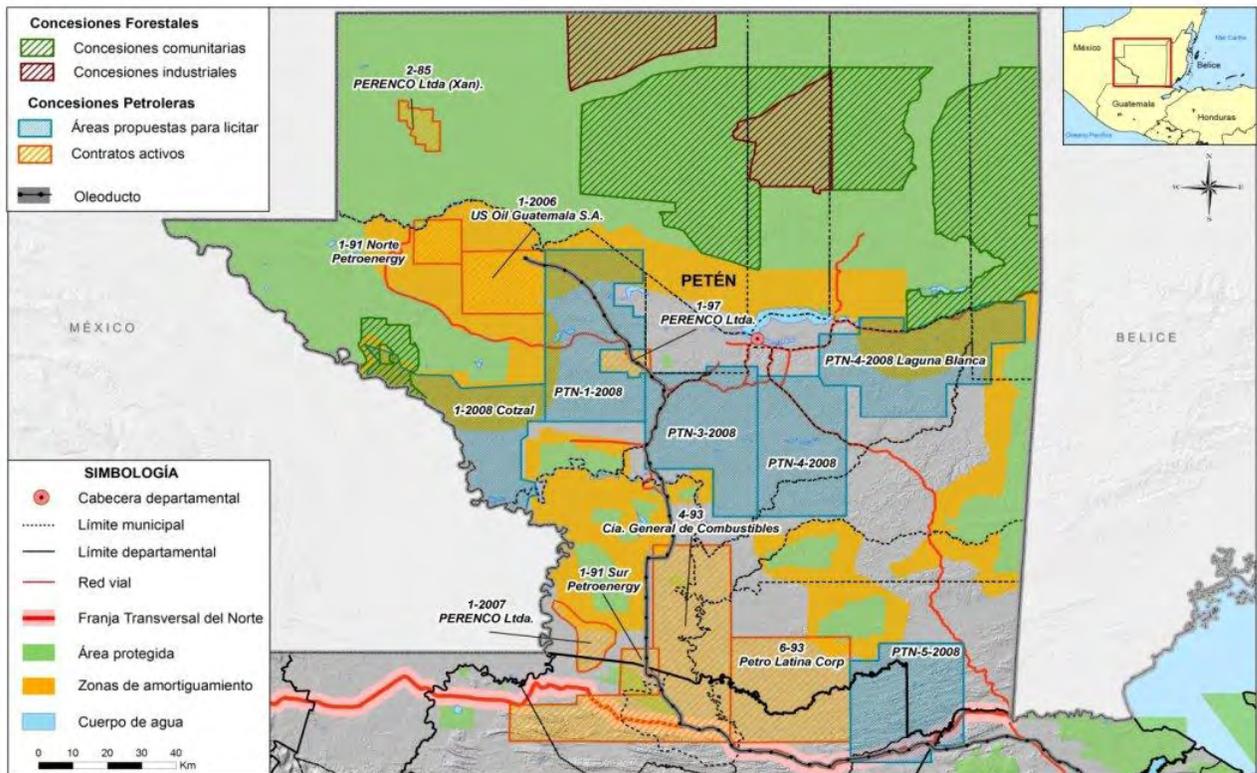
Elaborado por PRISMA, basado en Invest in Guatemala (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

tras que en el 2008 esta cantidad disminuyó a un poco más de 5 millones. Este declive ha ocurrido a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción, incluyendo varias rondas de nuevas licitaciones, prórrogas de contratos y otros esfuerzos para incrementar la productividad y llegar a la meta de 14.6 millones de barriles por año. (El Periódico, 2010)

En 2007 se aprobó la ley FONPETROL, la cual aumentó la proporción de regalías percibidas por los gobiernos locales, teniendo un efecto perverso en Petén, pues ha ayudado a disminuir la oposición a nuevas actividades de extracción. En 2010, se dio un nuevo conflicto alrededor de la prórroga del campo Xan (2-85), el más productivo del país que se ubica en la

Laguna del Tigre de la Reserva de la Biosfera Maya en Petén. Una fuerte oposición ambiental a la prórroga de esta concesión se dio en particular por parte de grupos ambientales, inclusive dentro de la administración Colom, particularmente en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Además, se suscitaron amenazas contra líderes sociales en el departamento, junto a reportes de chantaje y otras presiones políticas (InsightCrime, 2011). Al final se otorgó la prórroga y se anunció el despliegue de los “batallones verdes” del ejército en el área con el doble propósito de facilitar la continuada extracción petrolera en la región y de conservar los recursos naturales de la zona que se han visto fuertemente degradados por la presencia de grupos ilícitos. (Inforpress, 2011)

Mapa 8
Concesiones petroleras en Petén



Elaborado por PRISMA, basado en Cortavé (2009); Invest in Guatemala (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

Tanto en el FONPETROL como en la prórroga de la concesión del campo Xan se han vinculado directamente los grupos con mayor influencia en Petén, quienes han logrado posicionarse para lograr beneficios políticos y económicos de estas nuevas actividades petroleras, y han colaborado en distintas ocasiones con empresas petroleras transnacionales involucradas en su expansión. (InSightCrime, 2011)

Si bien estos hechos parecen indicar que la actividad petrolera podría ser una de las amenazas más grandes al territorio petenero, los recientes esfuerzos poco exitosos por ampliar la explotación en la región, ponen en duda la cercanía de esta amenaza. En el marco de lograr el objetivo de aumentar la producción, una nueva ronda de licitaciones de campos petroleros se realizó en el 2011 (Quiñónez, 2011). Tres de estas concesiones se encontraban en Petén, localizadas en la franja central del departamento, como se puede apreciar en el mapa, entre las dos concesiones ubicadas en los extremos este y oeste.

El gobierno guatemalteco buscó atraer el interés de varias empresas extranjeras, tanto privadas como estatales de Colombia, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Argentina (Álvarez, 2011). A pesar de estos esfuerzos, ninguna de estas empresas decidió invertir en la región, por lo que tres de las cuatro áreas licitadas se declararon desiertas. El único campo que recibió interés fue el PTN-1-2008, de parte de dos empresas que ya se encuentran trabajando en la zona: PERENCO Guatemala LIMITED y Citi Petén (Quiñónez, 2011). Esta falta de interés pudo haberse debido a tres factores: Primero, la presencia de poderes fácticos y la violencia prevaleciente en la región ha sido un desincentivo para la inversión. Segundo, la fuerte oposición social y ambiental a nuevas exploraciones es otro factor que pudo haber disuadido la inversión, pues muchos de estos campos presentan un considerable traslape con reservas naturales y/o áreas protegidas. Cabe señalar que las

nuevas propuestas turísticas en la RBM presentadas más adelante, no son fácilmente compatibles con la expansión petrolera, por lo que podrían constituir otro elemento de oposición al petróleo. Un tercer factor, en opinión del director del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), es la escasa información sísmica y geológica disponible sobre los campos licitados. Precisamente, el PTN-1-2008 recibió ofertas, pues presentaba el mayor grado de información disponible (Ortiz, 2011). En este momento no hay planes para profundizar la información disponible sobre estas áreas.

Por lo tanto, la proyección del sector petrolero en el país tiene un alto nivel de incertidumbre. La creciente demanda de petróleo a nivel global a mediano y largo plazo seguirá presionando el alza de los precios internacionales, aunque en el corto plazo este panorama es incierto debido al volátil estado de la economía global.

Nuevos intereses de turismo en la RBM también introducen otro elemento de posible oposición al petróleo. Sin embargo, la reciente gestión de política realizada por PERENCO y sus aliados en la aprobación de FONPETROL y la prórroga del Campo 2-85, permite ver la fuerte influencia que ejerce esta compañía petrolera transnacional y sus aliados, vinculados prácticamente con todos los actores poderosos en Petén. (InSightCrime, 2011)

Por el momento la mayor presión para la explotación parece estar sucediendo justo al sur de la Reserva de la Biosfera Maya, reflejadas en las licitaciones mencionadas anteriormente, además de otras áreas propuestas (las áreas licitadas en años recientes o propuestas para licitación aparecen en azul en el mapa 8). Por ende, la mayor presión por el momento parece yacer en la nueva infraestructura que se podría construir en estos campos y el mayor acceso que se le brindará a poblaciones buscando migrar al norte. En el mediano y largo plazo, la posibili-

dad de nuevas actividades petroleras en las áreas de la RBM sigue siendo una amenaza importante.

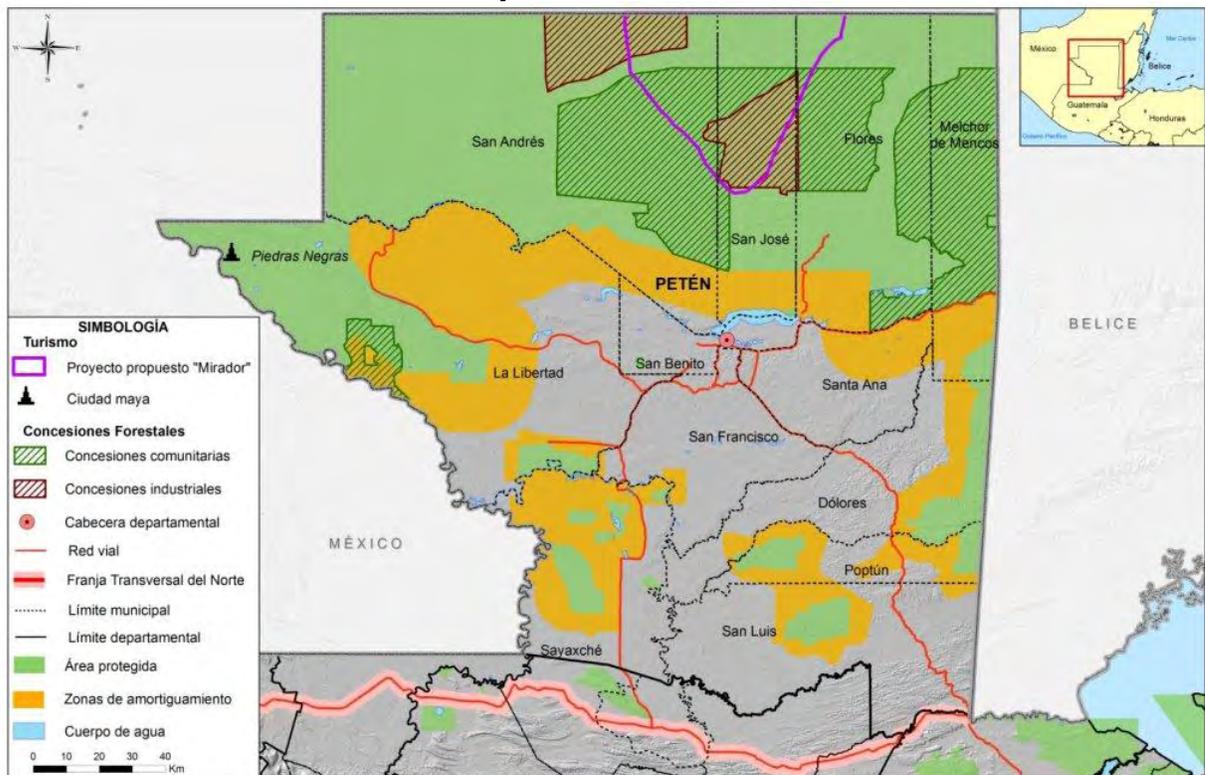
Turismo

Si bien existen propuestas de iniciativas turísticas a lo largo de Petén, aquellas vinculadas a una nueva mega-iniciativa turística en la Reserva de la Biosfera Maya representan una de las mayores amenazas en el departamento, atendando directamente contra los derechos de las concesiones forestales comunitarias de Petén. La más reciente iniciativa se denomina 4 Balam, que es una iniciativa turística de gran escala que busca aprovechar el patrimonio natural y cultural que existe en la RBM. Esta intervención podría atentar directamente contra los derechos

de las concesiones forestales comunitarias, pues uno de los proyectos centrales dentro de la Cuenca Mirador (ver mapa), cuya extensión de más de 200,000 hectáreas se traslapa con varias concesiones forestales comunitarias. Más allá de la Cuenca Mirador, esta iniciativa también contempla incorporar la Reserva de la Biosfera Maya, como señala Insightcrime (2011), incluyendo la incorporación de Piedras Negras, en el extremo oeste de la Reserva. Estos intereses introducen un nuevo elemento en áreas de alta conflictividad, donde conviven la empresa transnacional petrolera PERENCO, asentamientos humanos, grupos ilícitos y fuerzas militares.

Este plan ha recibido el apoyo público de altos niveles del gobierno, quienes han impulsado este programa desde 2008, como uno de cuatro

Mapa 9
Proyectos turísticos en Petén



Elaborado por PRISMA, basado en Cortavé (2009); Invest in Guatemala (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

componentes clave en la Agenda Nacional de Competitividad 2005–2015. El sector recibió apoyo consistente de la administración Colom, mientras el nuevo presidente Otto Pérez Molina ha afirmado su interés en expandir el sector turístico, e incluso ha propuesto convertir el Instituto de Turismo en una Secretaría de Estado (Batres, 2011). 4 Balam también aparece como una estrategia central en la Actualización del Plan de Desarrollo Integral de Petén (SEGEPLAN, 2011), y por varios años una iniciativa turística de este tipo ha sido discutida en el marco del Proyecto Mesoamérica (Grandia, 2006), y recientemente ha recibido el apoyo del BID. (BID, 2011)

Como el proyecto 4 Balam sigue en proceso de definición, no se puede brindar un perfil de actores e inversiones relacionadas con el mismo. Sin embargo, se puede afirmar que la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) queda bastante vulnerable frente a los actores que tienen una influencia importante en la definición del proyecto. Entre los grupos que han ejercido influencia importante se destacan el Global Heritage Fund (GHF) y el director de la Fundación para la Investigación Antropológica y Estudios Ambientales (FARES), Richard Hansen. Entre 2006 y 2008, estas organizaciones contribuyeron con más de \$3 millones para promover una iniciativa de ley que delimitara la Cuenca Mirador y asignara un estado de protección más restrictivo que el actual (SEGEPLAN, 2011). En años recientes, la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (PACUNAM) ha impulsado el turismo en la zona (SEGEPLAN, 2011) e integra una variedad de grupos privados transnacionales, que incluye a Cementos Progreso, Walmart México y Centroamérica, Cervecería Centroamericana S.A., Blue Oil, Citibank, PICA, Madre Tierra, Samsung, Banco Industrial, Claro, Disagro, la Fundación Pantaleón, y Cofino Stahl (PACUNAM, 2011). Si bien los grupos de poder peteneros están buscando aprovecharse de las nue-

vas oportunidades de inversión, parece que serán socios menores frente a los actores de capital regional y transnacional. (InsightCrime, 2011)

Parece inevitable que el turismo llegará a tener un mayor peso en la Reserva de la Biosfera Maya y posiblemente a lo largo de Petén. Sin embargo, aún no se ha definido la clase de turismo que se implementará. El turismo comunitario contrasta fuertemente con las mega-iniciativas que han dominado este sector en Centroamérica y también parece ser el tipo de turismo que favorecen tanto los actores transnacionales, como el INGUAT (Hurtado Paz y Paz, 2008). Sin duda, se requerirá de un esfuerzo constante para influenciar estas iniciativas y lograr que se implementen iniciativas del primer tipo.

Plantaciones forestales, proyectos de carbono y REDD+

En los últimos años ha aumentado la expansión de plantaciones de teca y melina apoyados por el programa PINFOR, lo cual sugiere una posible tendencia hacia una expansión de largo plazo (InsightCrime, 2011). Aunque no se ha podido identificar la totalidad de estas plantaciones, se confirma una fuerte expansión en La Libertad por parte de la empresa Green Millennium, con posibles vínculos al narcotráfico (ver mapa 9). Como se mencionó anteriormente, se reporta también que ganaderos migrando hacia el norte han mostrado interés en acceder a fondos del PINFOR. No existe suficiente información como para predecir la tasa de crecimiento de estas plantaciones. Sin embargo, la evidencia actual demuestra que se requiere mayor investigación sobre esta tendencia.

Por el momento el único proyecto que ha logrado acceder a fondos del mercado de carbono voluntario se encuentra en la municipalidad de San José, donde se ha firmado un convenio para evitar la deforestación en 11,000 hectáreas. Este

proyecto tiene previsto un período de 20 años, para evitar la emisión de 1.2 millones de toneladas de carbono. El comprador de los bonos es Global Carbon Group y ha sido facilitado por la ONG Conservacionista Rainforest Alliance y AGEXPORT, dos instancias que han sido agentes activos en la promoción de proyectos de carbono en el país.

Una variedad de otros proyectos de carbono están siendo discutidos o ya están en marcha en el país, incluyendo apuestas orientadas a vincular áreas protegidas y concesiones forestales comunitarias a mercados voluntarios de carbono. Sin embargo, una variedad de obstáculos técnicos, así como la ambigüedad respecto a los derechos de carbono han obstaculizado estas iniciativas que ya tienen varios años en marcha. (Davis, 2010)

El proceso de preparación para REDD+ en el país ha avanzado en años recientes, hasta elaborar una propuesta preliminar de preparación (R-PP), cuyo documento busca acceder a fondos del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) para desarrollar su estrategia. La última propuesta contemplaba un programa de más de \$5 millones, y entre sus principales componentes figuraba una mayor presencia estatal en la Reserva de la Biosfera Maya para recuperar la gobernabilidad e institucionalidad, además de incluir iniciativas tipo PINFOR como parte de una estrategia REDD. (R-PP, 2011)

Implicaciones para comunidades rurales

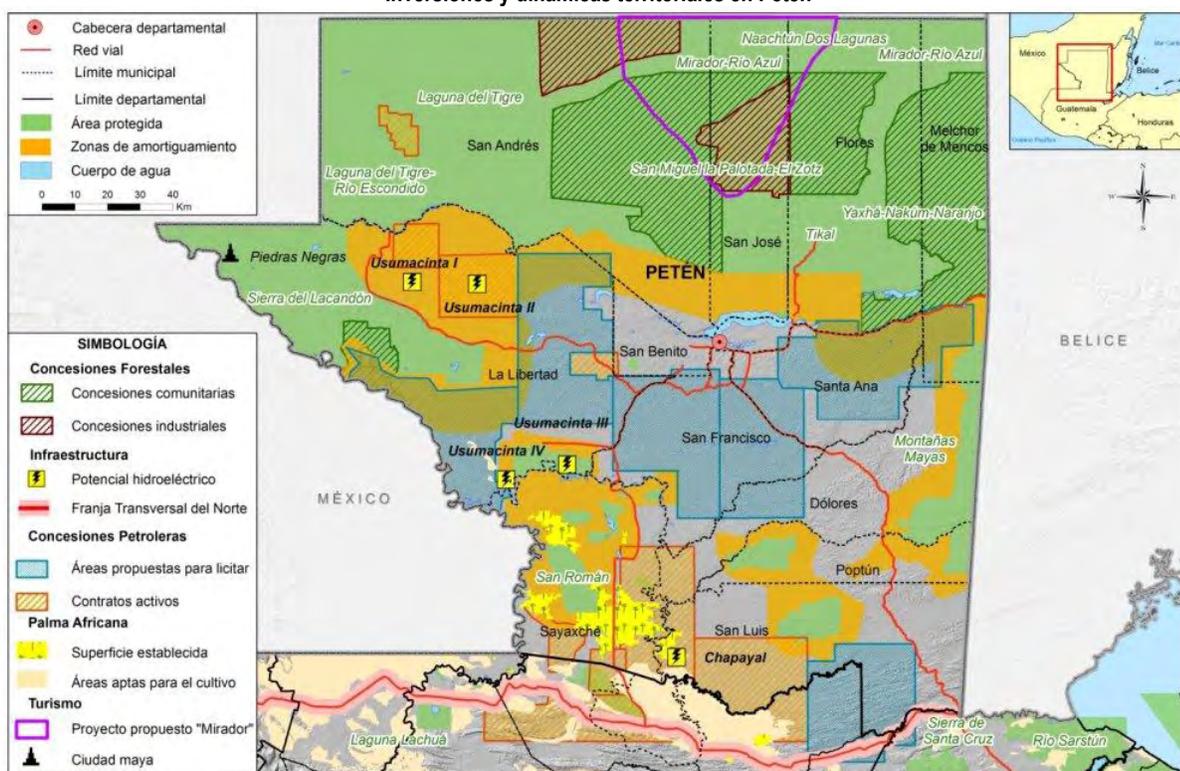
El territorio de Petén está siendo transformado por una serie de nuevos y antiguos intereses, generando una serie de dinámicas, con claras implicaciones para sus poblaciones. En la Reserva de la Biosfera Maya, se observa que si bien los intereses del petróleo han demostrado fuerte influencia sobre políticas públicas, ahora están siendo confrontados con un proyecto de

mega-turismo que se sustenta en los recursos naturales y arqueológicos de la región, y que tiene una amplia gama de intereses transnacionales organizados para su implementación. Si bien ambas representan amenazas directas para las comunidades de la región, la llegada del turismo introduce un nuevo elemento en la configuración del poder en la región con implicaciones desconocidas, y plantea la pregunta: ¿Cómo se reconciliará el turismo con los actores en la Reserva de la Biosfera Maya, incluyendo PERENCO, los batallones verdes, grupos ilícitos, asentamientos humanos y las concesiones comunitarias?.

Las respuestas de estas dinámicas también tendrán implicaciones para los distintos escenarios que se están generando al sur de Petén, muchos de los cuales se vinculan con Laguna del Tigre por medio del trasiego de drogas. En estas regiones se observa la creciente presión de la agroindustria, en particular la palma africana, además de la ganadería concentrada en el sur, pero con una creciente presencia en el norte. El petróleo convive con estas presiones y demuestra ser una amenaza cercana de mayor despliegue en las zonas justo al sur de la RBM, generando nuevas facilidades de acceso para la migración hacia el norte. Otras alternativas como las plantaciones forestales y de carbono ejercen sus propias presiones, pero también constituyen un incentivo para muchos ganaderos que migran con una lógica de especulación para la venta futura.

Todas estas actividades han generado fuertes impactos para las comunidades donde se expanden, dejando pocas oportunidades laborales, degradación ambiental y frecuentemente socavando los medios de vida tradicionales. Asimismo, en prácticamente todas estas actividades se ha detectado la participación y vinculación con poderes ilícitos, para fines de lavado de dinero y/o dominio territorial.

Mapa 10
Inversiones y dinámicas territoriales en Petén



Elaborado por PRISMA, basado en Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP y Centro de Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CEMEC-CONAP) (2010); SIGMAGA (2008); Cortavé (2009); Invest in Guatemala (2008); SEGEPLAN (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

Los actores identificados, además del análisis brindado por InsightCrime (2011) proporcionan nuevas perspectivas sobre los actores que están impulsando estos cambios. Se observa que las dinámicas actuales se impulsan cada vez más por alianzas transnacionales de diversa índole. Los grupos nacionales y departamentales de poder se entrelazan con grupos transnacionales, y se caracterizan por ser altamente volátiles, móviles y nebulosos, con fuertes vínculos con el poder fáctico, pero con agresivas apuestas para influir sobre las políticas públicas y la utilización de los recursos naturales como base de su acumulación de poder económico y/o político. (Robinson, 2004; InsightCrime, 2011; Segovia, 2005)

Petén, región que fue considerada como “válvula de escape” ante las rigideces de la

estructura agraria en Guatemala, ahora está comenzando a reproducir los mismos patrones de exclusión que en gran parte motivaban el proyecto colonizador a partir de los años cincuenta del siglo pasado. El resultado ha sido la existencia de patrones no muy distintos de lo que se vivió en el país en épocas anteriores: concentración de la tierra y la consecuente expulsión de la población para permitir nuevas rondas de acumulación, convirtiendo el sur de Petén, una vez destino de migrantes, en un territorio de expulsión. Pero además de estas similitudes, hay rasgos que distinguen las dinámicas de hoy con las del pasado: primero, el carácter transnacional de los actores en el territorio permite una celeridad de despliegue enorme con posibilidades de expansión prácticamente ilimitadas; y segundo, las nuevas inversiones ocurren dentro de territorios que

están cada vez frente a más presiones, por lo que la escala relativa (entre las apuestas y la tierra disponible) de las nuevas inversiones se ha vuelto mucho mayor. En épocas anteriores por lo menos se contaba con la “válvula de escape” correspondiente a las grandes masas forestales; sin embargo, hoy en día estos bosques no solamente están mucho más reducidos, sino que también están bajo mayor presión para diversas actividades económicas, agudizando la crisis socio-ambiental que se vive en el territorio.

Las nuevas dinámicas están impulsando transformaciones dramáticas en Petén, las cuales requieren intervenciones coordinadas, decisivas y sostenidas por parte del Estado. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) ha buscado formular una estrategia de este tipo para responder a las dinámicas territoriales en la región, la cual está siendo discutida tras la Actualización del Plan de Desarrollo de Petén en mayo de 2011. Este Plan incluye propuestas para el desarrollo de servicios eco-turísticos en la RBM y una mayor presencia estatal en estas zonas, además de fuerzas de seguridad para recuperar la gobernabilidad en el territorio (este tipo de acciones también aparece en la propuesta del MARN para REDD+). El documento reconoce los impactos dañinos de la palma en el sur y propone acciones de ordenamiento territorial en el suroeste (Sayaxché y La Libertad), proyectada como una región agroindustrial y turística. En el sureste, se propone un territorio agropecuario, turístico y de recuperación forestal. En ambas regiones del sur, se contemplan acciones de gestión de recursos naturales.

Si bien esta instancia demuestra un profundo entendimiento de las dinámicas actuales en el Petén, queda por ver si este espacio técnico podrá lograr la cooperación inter-institucional necesaria para realmente implementar un plan coordinado e integral en Petén. Generalmente,

ha existido una amplia brecha entre los planes de esta índole y la capacidad política de implementarlos frente a los poderes económicos presentes en la región.

En muchas ocasiones, la falta de coherencia entre las políticas sectoriales, ambigüedad en las leyes, traslapes institucionales o la brecha entre la normativa y la acción ejecutiva han permitido que actores poderosos en el territorio logren consolidar posicionamientos estratégicos sin temor de intervención del Estado. Tal es el caso de las redes de narcotráfico, la ganadería en áreas protegidas o la expansión de la palma africana. Tan comunes y decisivas son estas dinámicas en la transformación permanente del territorio que concordamos con Hurtado Paz y Paz (2008), en que esta inacción del Estado se puede interpretar como una política en sí misma.

Las acciones propositivas del Estado han sido más decisivas en su articulación y aval brindado a las iniciativas regionales, como el Proyecto Mesoamérica y otros programas. La importancia de estos planes en el marco de las reformas económicas, la construcción de la Carretera Franja Transversal del Norte, los programas de regularización de tierras, e incluso las propuestas para mega-proyectos de turismo, también se han venido discutiendo en el marco del Proyecto Mesoamérica.

En el contexto del agotamiento de la frontera agrícola y la continuada expansión de patrones de acumulación exclusivos, es preocupante la tendencia hacia la militarización, tal como ocurre con el despliegue de los ‘batallones verdes’, o los conflictos violentos relacionados con la palma africana en las tierras bajas del norte que han involucrado al ejército y a organizaciones de seguridad privada (Solano y Solís, 2011). Estos hechos sugieren que en ausencia de nuevas “válvulas de escape”, la militarización se vuelve una estrategia para proteger y continuar

la expansión de los patrones excluyentes de acumulación en el territorio.

Si bien las comunidades rurales de Petén y aquellas ubicadas alrededor de la Franja Transversal del Norte experimentan las mismas presiones sobre sus tierras, sus dilemas y opciones frente a las nuevas presiones sobre el territorio son bastante diferentes. Para las comunidades que están siendo afectadas directamente por la palma africana, la agroindustria y la ganadería en el sur, sobre todo los pueblos Q'eqchi', las rutas de defensa se han enfocado en la organización comunitaria, el desarrollo de propuestas para fortalecer los métodos de agricultura tradicional o agricultura familiar, además de otros medios legales. Algunas comunidades han logrado vincularse con aliados externos de conservación y proyectos pilotos de carbono, como es el caso de la Fundación Laguna Lachuá en Alta Verapaz, pero se trata de una escala relativamente pequeña y no parece presentar opciones de mayor escala para las comunidades Q'eqchi'. La gran mayoría de estas comunidades se encuentran en una posición sumamente vulnerable frente a los actores poderosos que impulsan las nuevas inversiones, en particular de la palma africana y la ganadería. Los que han migrado a áreas protegidas y no tienen derechos reconocidos se encuentran aun más vulnerables. Todos estos grupos tendrán que continuar negociando, resistiendo y/o luchando contra las nuevas presiones en el corto y mediano plazo.

Por su parte, las concesiones forestales comunitarias aglutinadas en ACOFOP se encuentran con dilemas diferentes. La figura de la concesión comunitaria, si bien tiene debilidades y limitaciones, les brinda un espacio institucional importante por medio del cual pueden proyectar sus reivindicaciones y propuestas. Además, estas comunidades cuentan con argumentos fuertemente fundamentados, pero poco reconocidos, de su experiencia de manejo forestal sos-

tenible en la RBM, como actores altamente efectivos en la conservación y uso sostenible de los bosques, a diferencia de las áreas núcleo, que han experimentado una fuerte degradación. Estos son elementos clave para proyectar los éxitos y capacidades de ACOFOP, no solamente en respuesta a las políticas y programas que atentan contra sus concesiones, sino también para reclamar las dinámicas en los espacios "grises" donde se ejercen las políticas de facto del Estado, que atentan directamente contra las concesiones.

Si bien las concesiones comunitarias quedan débiles frente a los múltiples actores transnacionales en Petén, las distintas visiones para la RBM brindan oportunidades y riesgos diferenciados para estas comunidades. Por ejemplo, es difícil imaginar un futuro de expansión petrolera en las zonas de las concesiones en las que se podría generar una convivencia positiva con las concesiones comunitarias. En cambio, si bien los intereses transnacionales en los proyectos turísticos en la Reserva atentan contra los derechos de las concesiones, podrían existir mayores y mejores espacios para que las concesiones logren posicionarse como actores clave dentro de estos procesos. Esto en particular porque los fines de conservación de la Reserva que proponen los intereses turísticos transnacionales, coinciden con los planes de SEGEPLAN, así como con los elementos centrales de las propuestas de REDD+, y podrían contar con fuentes de apoyo de múltiples donantes internacionales interesados en esta iniciativa. Las concesiones comunitarias tienen en estas organizaciones de influencia un aliado *sui generis*: una alta capacidad de gobernanza territorial y una organización social congruente con las iniciativas basadas en conservación de los recursos naturales y arqueológicos en la región. Esto es de especial importancia en el contexto de un Estado débil: difícilmente se puede imaginar una transición exitosa hacia una nueva modalidad de conservación (volcada más hacia el tu-

rismo) sin el apoyo de las concesiones comunitarias.

Con respecto a la transformación territorial que está ocurriendo en el sur, las opciones no son tan claras. Los planes de SEGEPLAN y del MARN (en el marco de REDD+) posiblemente podrían ayudar a las comunidades a protegerse de las crecientes presiones provenientes del sur. Además, si bien el proceso de preparación para REDD+ podría considerarse débil, también ha logrado vincularse con el MAGA y a través de sus planes inter-institucionales, posiblemente podría ser una forma de negociar o abrir espacios de diálogo con los actores de la agroindustria para frenar los procesos de desalojo en el sur. Sin embargo, no hay indicios de que se pueda incorporar al Ministerio de Energía y Minas dentro de estos procesos.

La cantidad de presiones que se viven en Petén y los numerosos actores con acceso a políticos y a extensos recursos implica que las concesiones, claramente, no pueden responder a cada presión y sector de manera individual. Se presenta como una alternativa la estrategia de una proyección general y constante en la que se destaca la prioridad compartida sobre los derechos en la conservación de la RBM. Esto será de fundamental importancia, en particular frente a ini-

ciativas como turismo y REDD+, cuyos promotores frecuentemente explican la degradación ambiental de la región como resultado de una falta de incorporar valor del mercado ('falla de mercado'), por lo que mayores niveles de inversión por medio de turismo o servicios ecosistémicos resolverían el problema. Si bien las inversiones son importantes, es esencial que se profundice el debate sobre la naturaleza del despliegue de estas inversiones y la profunda relevancia de los derechos de tenencia y arreglos institucionales alrededor de los recursos naturales para promover una gobernanza territorial socialmente justa y ambientalmente sustentable.

En este contexto, las iniciativas vinculadas a REDD+, en relación a los mercados voluntarios de carbono, como al proceso de preparación liderado por el MARN, presentan oportunidades estratégicas para ampliar el perfil de las concesiones como esquemas exitosos en la conservación de bosques. Entre las plataformas de mayor utilidad, la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques se presenta como un espacio clave de proyección, tanto a nivel departamental, nacional e internacional para defender los derechos de las concesiones forestales de las constantes amenazas que las rodean.

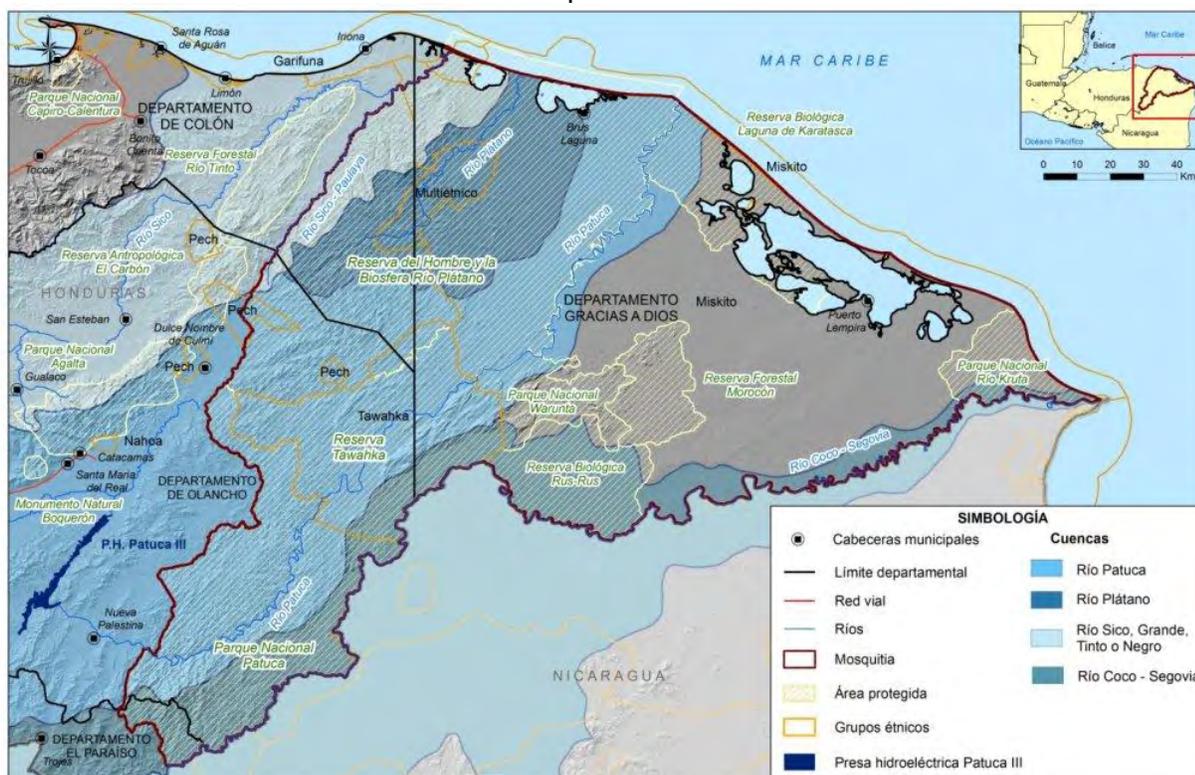
Inversiones y dinámicas territoriales en la Mosquitia, Honduras

La Mosquitia hondureña es un territorio marcado por los cambiantes intereses externos y un constante reposicionamiento de actores locales frente a diversas presiones. Las dinámicas territoriales que hoy prevalecen se remontan a la década de los años ochenta, cuando fuertes patrones de colonización desde el oeste empezaron a atentar contra los pueblos y bosques de ese territorio, facilitados por la expansión de la industria maderera y apoyados por diversos programas del gobierno, que veía en la región una 'válvula de escape' para la fuerte desigualdad en el acceso a la tierra en el resto del país.

Durante los años ochenta, se creó la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano (RHBRP) con una extensión de más de 800,000 hectáreas. Sin embargo, no fue hasta los años noventa que actores de conservación tuvieron una presencia importante en dicho territorio. En 1999, se establecieron el Parque Nacional Patuca, además de la Reserva Tawahka, que junto con la RHBRP ahora cubren la mayor parte de la Mosquitia (Ver Mapa 11).

Actualmente prevalece una compleja situación territorial en la Mosquitia, pues las presiones

Mapa 11
La Mosquitia hondureña



Elaborado por PRISMA, basado en ENEEE – UEPER (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

tradicionales de migración, ganadería y el narcotráfico han acelerado procesos de degradación, mientras que los actores de conservación se han ido debilitando frente a estas y otras dinámicas que incluyen petróleo, generación hidroeléctrica y militarización en el territorio. Los pueblos de la Mosquitia, incluyendo Miskitos, Pech, Tawankas y Garífunas se encuentran sumamente vulnerables a estas presiones. El acceso y tenencia de estas comunidades sobre los recursos forestales varía ampliamente dependiendo de la ubicación de las comunidades (la mayor parte de las áreas protegidas y reservas se consideran propiedad del Estado). La falta de demarcación de los territorios ha sido históricamente una debilidad enorme, algo que se ha comenzado a abordar con apoyo de la cooperación internacional.

A continuación se discuten las presiones que atentan sobre la tenencia y los derechos de los pueblos de la Mosquitia, incluyendo las dinámicas actuales que ya tienen expresiones en el territorio, tales como la tala ilegal, los flujos migratorios y la expansión de la ganadería, además de la creciente presencia del narcotráfico, la militarización de espacios rurales y la construcción de la represa Patuca III. Luego se discuten algunas posibles implicaciones derivadas de la nueva estrategia del gobierno para promover y atraer inversiones, identificando nuevas presiones prospectivas que complejizarán aún más las dinámicas territoriales en la Mosquitia.

Dinámicas actuales

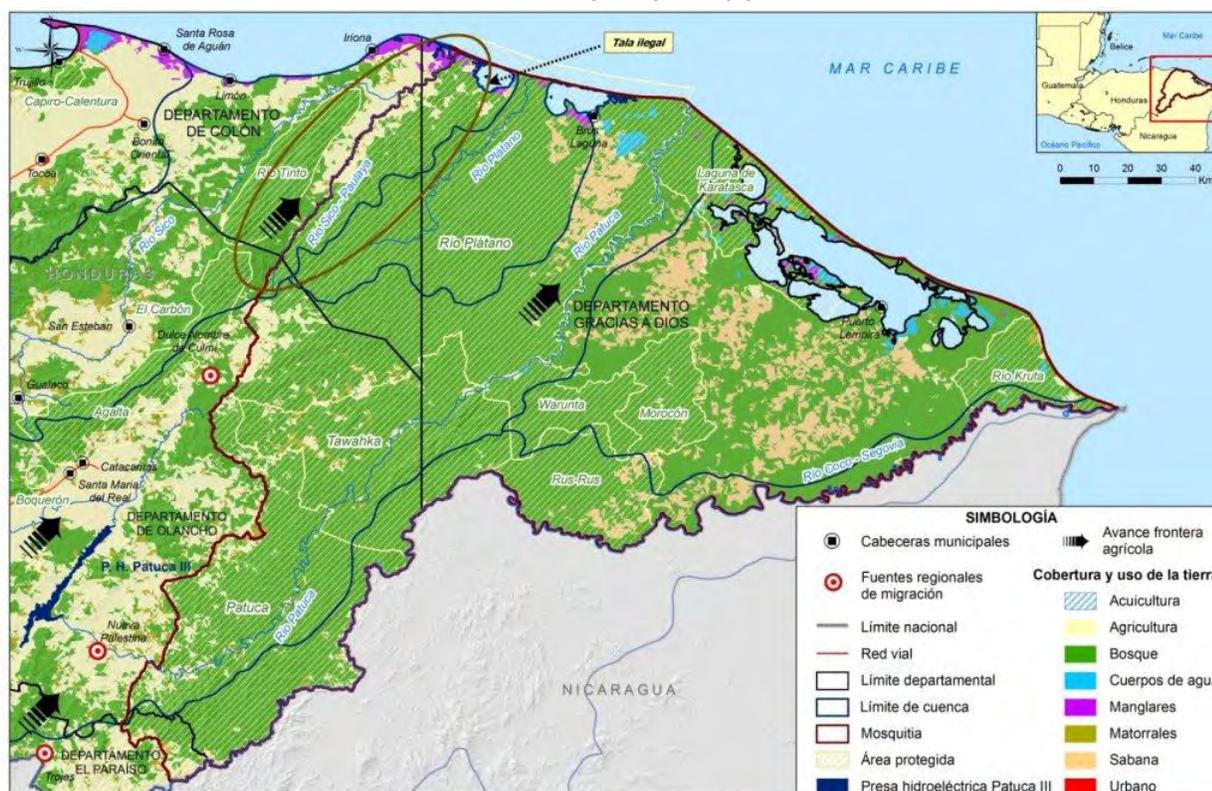
Tala ilegal, migración y ganadería

La tala ilegal, la migración campesina y la expansión de la ganadería constituyen dinámicas que llevan varias décadas desplegándose en la región, ejerciendo una continuada presión sobre los recursos y territorios de los pueblos de la Mosquitia. Se observa un patrón conocido en

el que los caminos establecidos por los madereros que talan facilitan el acceso de migrantes campesinos quienes tumban y queman áreas de bosque para establecer pequeñas parcelas agrícolas, que luego de pocos años son convertidos en áreas de pasto para la ganadería. Esta es una dinámica que refuerza procesos de invasión bastante comunes en la Mosquitia, incidiendo en los tradicionales procesos de degradación ambiental inherentes a las dinámicas de avance de la frontera agrícola. Un elemento nuevo en este proceso es que la expansión de la ganadería se entremezcla con estrategias de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y con la necesidad de establecer un dominio territorial que resulta clave para fuerzas ilícitas, que han agudizado estas presiones históricas en la Mosquitia. Desafortunadamente, ninguna de estas dinámicas muestra indicios de disminuir a corto o mediano plazo.

La tala ilegal en la Mosquitia ha sido una fuente continua de presión sobre el bosque y el territorio, canalizando recursos hacia centros urbanos, degradando ecosistemas y extrayendo recursos valiosos (como la caoba) que bien pudieran ser aprovechados en el marco de iniciativas comunitarias. A pesar de varios esfuerzos por frenar estas actividades, se reporta que la tala ilegal sigue desarrollándose principalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, en el cauce del río Sico y Pauluya (departamentos de Olancho y Colón). Tal como demostraron los informes del Environmental Investigation Agency en 2005 y Global Witness en 2009, actores poderosos han logrado penetrar las instituciones del Estado para perpetuar la tala ilegal, llevando al continuado saqueo de los recursos madereros de la región. Estas actividades generan ganancias extraordinarias: en una comunidad de la Mosquitia un árbol tiene un precio de \$30, mientras que en San Pedro Sula, un metro cúbico de madera puede venderse por \$1,200 (Global Witness, 2009). Si bien iniciativas inter-

Mapa 12
Dinámicas de tala ilegal, migración y ganadería



Elaborado por PRISMA, basado en Rivera (2011); ENEEE – UEPEP (2011); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002)

nacionales como REDD+ y FLEGT pretenden frenar la tala ilegal, a menudo se encuentran frente a enormes obstáculos e intereses.

La migración campesina a la Mosquitia es una presión importante que ha marcado fuertemente las dinámicas prevalecientes durante varias décadas. El despliegue territorial de la migración hacia la Mosquitia se explica principalmente por la presencia o ausencia de caminos de acceso, además de la topografía de la región, pues las cuencas Sico-Paulaya, Plátano, Patuca y Coco-Segovia, operan como corredores naturales para la migración, vinculando los altiplanos del interior con la Mosquitia. (Cochran, 2008 citando a Bass, 2002; Davidson, 1991; y Herlihy, 1997)

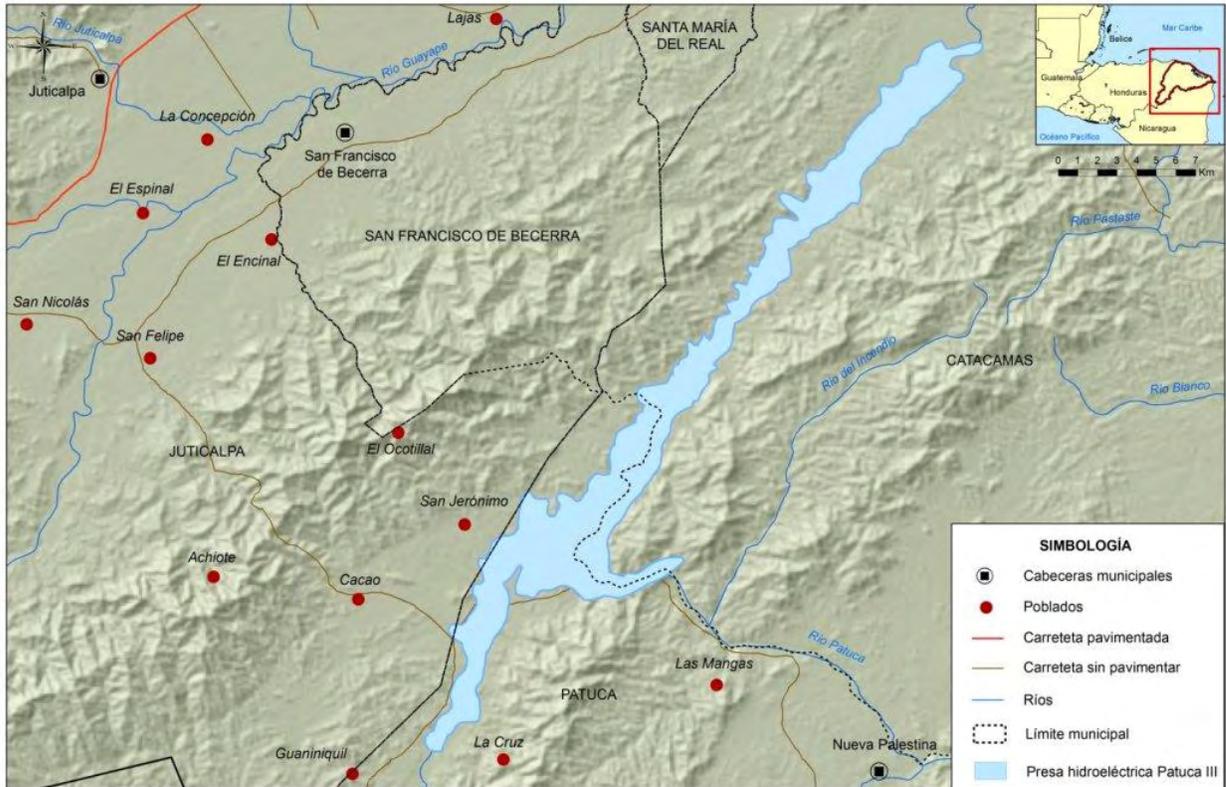
Actualmente, se reporta que la venta de tierras y la expansión de la frontera agrícola avanzan por los ríos Patuca, Sico, Plátano y carreteras por los caminos desde Olancho hasta la Mosquitia, en camino al proyecto hidroeléctrico Patuca III, actualmente en construcción. Según fuentes oficiales, se considera que la mayor parte de la migración inmediata proviene de pueblos rodeando la Mosquitia: Dulce Nombre de Culmí, el Paraíso, Nueva Palestina y los cafetaleros de Trojes. Cabe señalar que también hay dinámicas más amplias en el país de migración oeste-este en búsqueda de tierras, aunque no se cuenta con información precisa de dichos flujos.

Como se ha visto, uno de los elementos de mayor importancia en la migración es la vinculación con actividades ganaderas, tanto por parte de pequeños, medianos y grandes productores que representan extensiones importantes de tierra. Desafortunadamente no se cuenta con información sobre la composición de los pequeños, medianos y grandes ganaderos en la Mosquitia. La percepción generalizada aún en entidades oficiales en la región, es que la aceleración de la expansión ganadera en la Mosquitia, en particular en las zonas de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, se debe a la presencia del narcotráfico (Más adelante se discute la presencia de actores ilícitos y la respuesta militar que se está dando en la Mosquitia).

Represa hidroeléctrica Patuca III

La construcción de la carretera y caminos, así como la construcción misma de la presa hidroeléctrica Patuca III, están constituyendo nuevos factores que refuerzan los flujos de migración. Al igual que ocurre en la mayoría de los países centroamericanos, Honduras depende fuertemente del petróleo importado para la generación eléctrica, por lo que ha establecido la meta nacional de elevar la proporción de energía generada a partir de fuentes hidroeléctricas al 25% para el año 2034 (Republica de Honduras, s.f.). Se discuten una variedad de proyectos en el país para lograr esta meta, pero el proyecto con mayor impacto para la Mosquitia es la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca

Mapa 13
Presa hidroeléctrica Patuca III



Elaborado por PRISMA, basado en ENEEE – UEPER (2011); USGS-Eros Data Center (2005), imágenes de google earth, google maps y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002)

III, en el Departamento de Olancho entre los municipios de Catacamas y Patuca (Ver Mapa 13). Este proyecto tiene más de una década de venir siendo propuesto y discutido. Tras la cancelación de planes de construcción a cargo de una empresa taiwanesa debido a la crisis financiera, se comenzó la construcción a cargo de Sinohydro, una empresa propiedad estatal de China, encargada de más del 70% de las centrales hidroeléctricas en aquel país (América Economía, 2010). La construcción de Patuca III, además de otros proyectos futuros (Patuca I y II, aguas arriba) se está financiando con fondos del BID, a través de un préstamo por \$1,200 millones (América Economía, 2010). En el Mapa se aprecia la ubicación de la Presa Patuca III, que también supone la construcción de nuevos caminos que ya están facilitando nuevos flujos migratorios hacia la Mosquitia. Además de las presiones migratorias, las represas representan un fuerte impacto para los recursos hídricos aguas abajo, los cuales constituyen un eje fundamental de las formas de vida de los pueblos de la región, un recurso imprescindible para sus medios de vida, transporte y culturas.

Actividades ilícitas y militarización

Sin duda, uno de los elementos de gran importancia, para comprender la forma en la que se están desplegando las dinámicas actuales en la Mosquitia es la creciente presencia de actores vinculados con actividades ilícitas. Al igual que en otros países de Centroamérica, Honduras ha experimentado un fuerte repunte en la presencia de traficantes de drogas, en particular la cocaína, debido a que rutas tradicionales de tráfico de drogas a través de México en buena parte se han desplazado hacia el sur, en estrecha relación con organizaciones criminales mexicanas (Bosworth, 2010). Si bien Honduras, y la Mosquitia en particular, ya habían sentido los efectos del narcotráfico desde hace más de una década, ha habido una fuerte agudización derivada de una mayor presencia de estos acto-

res en los años recientes. Analistas sobre temas de seguridad en la región estiman que este tipo de actividades aumentaron dramáticamente en Honduras alrededor del año 2005, al igual que en otros países de la región. Sin embargo, con la crisis política hondureña de 2009 (que se discute más adelante) se aceleraron estas actividades, pues se reporta que organizaciones criminales se sintieron con mucho más libertad de movimiento en el contexto de la crisis. (Bosworth, 2010)

La Mosquitia es claramente un territorio estratégico para actores ilícitos. Vuelos aéreos utilizan al territorio como una parada estratégica en la ruta hacia Estados Unidos, aunque la mayoría de las pistas de aterrizaje se encuentran en Olancho o Atlántida (Bosworth, 2010). Sin embargo, la gran mayoría de la cocaína que pasa por Honduras, pasa por vías marítimas, sobre todo a través de la costa caribeña (Bosworth, 2010). La presencia de actores ilícitos ha tenido enormes impactos en las comunidades de la región, impulsando la expansión de la ganadería como forma de lavar dinero y de establecer control territorial, pero también por la presencia de nuevas formas de ingreso y nuevas amenazas a los sistemas tradicionales de manejo.

En respuesta a estas dinámicas, se ha desplegado una respuesta militar agresiva. En abril de 2010, el Presidente Lobo anunció un decreto de emergencia permitiendo el uso del ejército para asuntos nacionales (Bosworth, 2010). Dos meses después, el Congreso aprobó una iniciativa permitiendo al ejército un mayor papel en el apoyo a las fuerzas civiles responsables de la seguridad. Durante la misma época, se desplegaron 2,000 soldados en costa atlántica para frenar las actividades ilícitas. A pesar de las amenazas reales de los actores ilícitos, existía una preocupación fuerte de que estos soldados se utilizaban no solamente para frenar estas actividades ilegales, sino también para reprimir

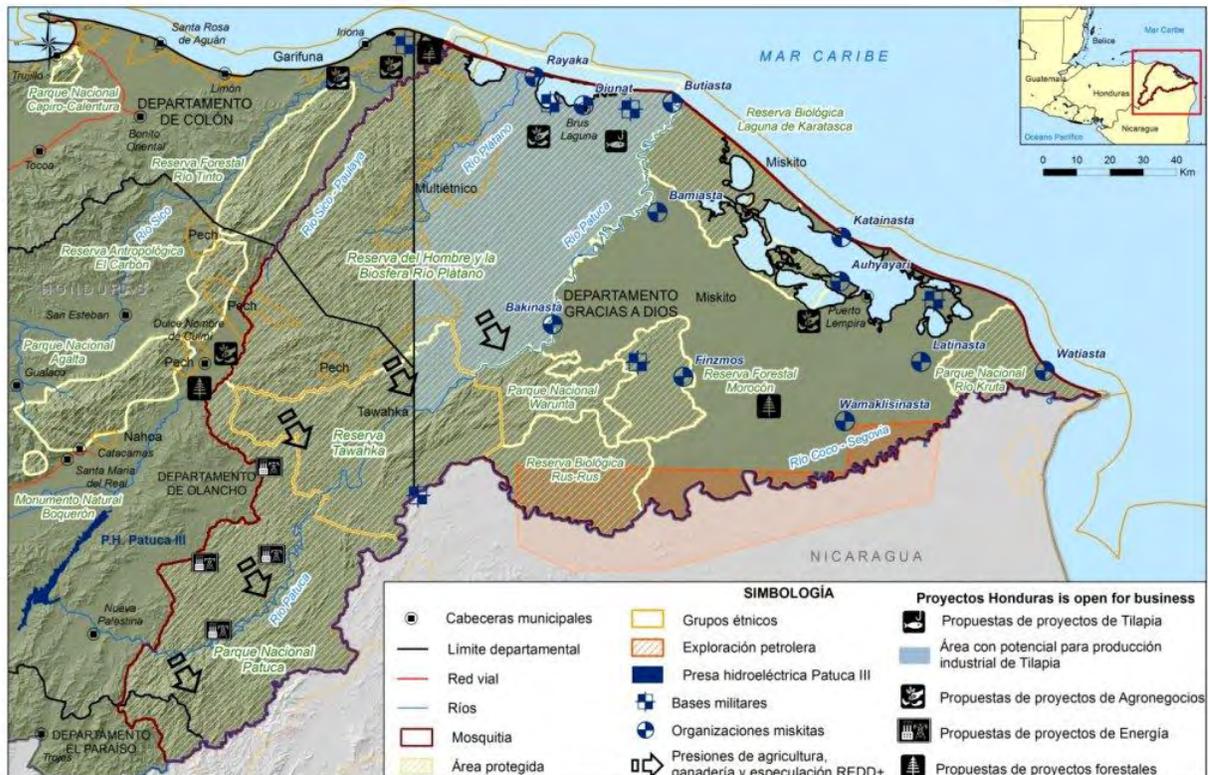
los grupos sociales que reivindicaban el derecho de acceso a la tierra, así como para frenar las luchas en contra de la expansión de la palma africana en el Bajo Aguán. Entidades como la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos han manifestado su ‘profunda preocupación’ por los reportes de actos violentos del ejército contra grupos sociales. (Comité por la Libre Expresión, 2011)

Hoy en día, la Mosquitia vive con una presencia militar mucho más fuerte. Esta presencia también se vincula con otras decisiones de políticas: en los años recientes, las instancias militares y de seguridad han aumentado su injerencia en el manejo de las áreas protegidas. Pero la presencia también es física: además de las varias bases militares ya existentes en la

Mosquitia (Ver Mapa 14), se han instalado nuevas bases, una de ellas en Patuca III, con el doble objetivo de acompañar la construcción de la presa y proteger los recursos naturales de la región (El Herald, 2011). Además, en 2010 se anunció la creación de una base militar estadounidense en Laguna de Karataska, cuya instalación tendría lo que el gobierno considera una ubicación estratégica contra el narcotráfico, y de donde se pretende desalojar a los actores ilícitos de la región. Líderes comunitarios han rechazado rotundamente esta instalación por considerarla ilegal.

Todo esto complejiza las nuevas realidades para las comunidades que son afectadas por el conflicto del narcotráfico. Líderes comunitarios confirman las relaciones tensas que existen con

Mapa 14
Bases militares y ubicación de proyectos “Honduras is open for business”



Elaborado por PRISMA, basado en Bendless (2009); Padilla (2009); Mopawi (2005); ENEEE – UEPER (2011); Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (2010); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

el ejército en el territorio, además del temor de posibles acciones que incluyen patrullajes con helicópteros sobre sus territorios.

Nuevas amenazas prospectivas y viraje institucional

Paralelamente a las dinámicas desplegándose en el territorio, hay una serie de nuevos intereses que están emergiendo con la mirada sobre el territorio de la Mosquitia y sus recursos. En buena medida estos intereses han sido impulsados y promovidos por el viraje institucional que se ha dado en el país tras la salida forzada del Presidente Zelaya en 2009. Este acto que se consideró válido y legítimo entre las instituciones oficiales del Estado, fue denunciado como un golpe de Estado por la comunidad internacional. Sin lugar a dudas, este momento fue decisivo para impulsar un nuevo conjunto de políticas, que con el cambio de gobierno, se tradujo en el impulso a reformas de promoción y atracción de inversiones, con una agresiva apertura internacional y una fuerte delimitación del papel del Estado para inversiones que ahora se consideran claves por parte del gobierno.

Durante el gobierno interino, en el medio de la crisis política, Honduras se desligó de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), además, definió la Visión del País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022, que fue aprobado como último acto del gobierno interino. La Visión del País 2010-2038 traza los lineamientos para los próximos 7 períodos de gobierno; en tanto que con el Plan de Nación 2010-2022, se busca operativizar una serie de metas y principios explícitamente orientados a lograr una mayor apertura e inserción de Honduras a la economía global, facilitando las condiciones de inversión extranjera. Es notorio el papel prominente de la seguridad, pues esta se detalla como requisito para el desarrollo: varias de las medidas militares mencionadas se llevaron a cabo durante esa época, lo cual explica

tanto los impactos, como las preocupaciones y reacciones discutidas anteriormente.

Sobre esta base se logró avanzar en 2011 con la aprobación de la Ley de Promoción de Inversión, la cual pretende brindar mayor seguridad para los inversionistas internacionales. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de la Inversión, nuevos seguros de inversión para contrarrestar el “riesgo político” para inversiones en el país, además de un capítulo especial para la atracción de mega-proyectos mayores de \$50 millones denominado “Del Procedimiento acelerado de las inversiones de gran escala” (La Prensa, 2011). Esta ley se aprobó justo antes del evento “Honduras is Open for Business”, a través del cual se invitó a inversionistas de todo el mundo a aprovechar las oportunidades de inversión en el país, sobre la base de una cartera de proyectos en los sectores de energía, infraestructura, agroindustria, forestería y turismo, entre otros.

La nueva orientación del gobierno hondureño excluye prácticamente por completo a los pueblos indígenas y a las comunidades de la Mosquitia. Si bien promueve “la cultura como medio de emancipación”, esta sección está vacía de contenido de utilidad para los pueblos de la Mosquitia. La Visión de País sí menciona el territorio como una región “con potenciales de incalculable valor para nuestro futuro”. Propuestas concretas aparecen en el documento “Honduras is Open for Business” dentro del marco del “Desarrollo Integral de la Mosquitia”, que plantea una nueva visión para ese territorio. Esta propuesta es radicalmente distinta de las visiones expresadas por los pueblos autóctonos de la región, las cuales se basan en los derechos de autodeterminación y el consentimiento previo, libre e informado. El proyecto del gobierno implicaría una transformación del territorio impulsado por infraestructura de transporte e inversiones externas en energía, agroindustria y forestería, entre otros. A mane-

ra de ejemplo, vale la pena citar el resumen de este marco de proyectos para el “Desarrollo Integral de la Mosquitia”:

“El polo de desarrollo será la comunidad de Mocerón, que posee, al momento, un aeropuerto militar y los servicios básicos de educación, telecomunicaciones y salud. Se prevé que los productos se exportarán vía Puerto Cabezas, en Nicaragua, mientras se mejoran las instalaciones de Puerto Lempira y las vías de comunicación internas. En ese momento se deberá tomar la decisión de la construcción de la línea férrea “ecológica” que unirá Mocerón con Catacamas, cruzando la parte sur de la Reserva Tawacka [sic], de un largo de aproximadamente 200 kilómetros. La producción será principalmente aceite de palma comestible para exportación a los Estados Unidos; derivados de la palma (aceite de palmiste y coquito) para exportación a Nicaragua y venta local; muebles y partes de madera de color para exportación; etanol; certificados de carbono y de las prácticas agroforestales introducidas, la producción de Yuca para consumo local. A mediano plazo, y como alternativa turística, se prevé la construcción del “Ferrocarril del Caribe” que unirá Mocerón, Puerto Lempira y Barra Patuca, permitiendo el desarrollo turístico del sistema lagunar de la Mosquitia. La distancia es de aproximadamente 190 kilómetros y permitirá la incorporación al mercado nacional de las comunidades étnicas de la costa Caribeña”. A continuación se detallan las principales propuestas de inversión para la Mosquitia, así como sus posibles impactos y trayectorias.

Palma africana

A nivel nacional, la palma africana ha experimentado un crecimiento acelerado a lo largo de la última década. La extensión de este cultivo comprendía 33,000 hectáreas en el año 2000, cifra que llegó a 82,250 hectáreas en 2005 (CEPAL, 2007) y hasta 120,000 hectáreas en 2009 (Cadena de Biocultivos Energéticos, s. f.). La ubicación de esta expansión se ha dado principalmente en las zonas norteñas del país, en Colón (46% de la extensión nacional), Atlán-

tida (28%), Yoto (14.4%) y Cortés (11.5%) (Cadena de Biocultivos Energéticos, s. f.). Este crecimiento ha sido acompañado con recursos financieros del orden de los \$18.7 millones en los últimos cuatro años, aportados entre el BCIE (37%), BANADESA (34%), la banca privada (28%) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (menos de 1%). Al igual que en Guatemala, la exportación de palma hondureña se destina en su gran mayoría a México.

Este crecimiento ya ubica a la palma africana como el tercer generador de divisas en el sector agroindustrial, después del café y el banano (Cadena de Biocultivos Energéticos, s. f.) y continúa siendo promovido activamente por el gobierno como un eje central para el desarrollo.

A pesar de este crecimiento acelerado, la palma africana todavía no ha llegado a la Mosquitia en escalas significativas. Sin embargo, ya existen plantaciones en Iriona, de aproximadamente 2,000 hectáreas, además de Puerto Lempira, pero la evidencia disponible refleja que estas plantaciones son bastante pequeñas comparadas con el resto del país y comparadas con lo que podría desplegarse en la región en el futuro. Autoridades afirman que el mayor factor limitante para la palma en la Mosquitia es la falta de infraestructura. Si bien no se cuenta con estudios de suelos en la región, la información disponible sugiere que el territorio podría sostener la producción de al menos 30,000 hectáreas de palma africana (Cadena de Biocultivos Energéticos, s. f.). Se ha identificado una franja de tierras aptas para la palma africana en las zonas colindantes con la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano al oeste (Ver Mapa 14). Estas zonas muestran un considerable traslape con comunidades asentadas a lo largo del río Paulaya y es muy probable que una expansión de la palma a gran escala en esta zona, impulse una migración de comunidades hacia adentro de la Mosquitia.

Hay intereses fuertes tanto en el gobierno, como en el sector privado que están explorando la posibilidad de hacer estos planes una realidad. El empresario Miguel Facusse, presidente de Corporación Dinant, la empresa que ha estado al centro de los conflictos relacionados con la palma africana en Bajo Aguán, llegó recientemente a la Mosquitia para conocer oportunidades de inversión. No es remota la posibilidad de promover la producción de palma africana en la Mosquitia, en particular en el contexto del continuado crecimiento del mercado regional y global, así como por los continuos conflictos en Bajo Aguán. En repetidas ocasiones, el gobierno también ha promovido la expansión del cultivo hacia la Mosquitia, tal como se propone en el Proyecto Desarrollo Agrícola de Palma Africana en la Mosquitia contenido en la cartera de proyectos “Honduras is Open for Business”:

“La producción será principalmente de aceite de palma comestible, para exportación a los Estados Unidos (la demanda actual es de 500,000 toneladas por año). Se prevé que el producto y sus derivados se exportarán vía Puerto Cabezas, en Nicaragua (...) Uno de los subproductos, la cachaza (coquito) es excelente para la alimentación animal y será también exportado a Nicaragua, donde se transformará en concentrado animal.”

La combinación de todos estos factores apunta hacia una inminente expansión de la palma africana a la Mosquitia. Además de las zonas colindantes al oeste de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano, otras posibles zonas de expansión incluyen Puerto Lempira por su infraestructura de transporte y las propuestas existentes para esta región. La expansión del cultivo en las áreas más adentro en la Mosquitia no parecieran factibles en este momento por la falta de infraestructura, sin embargo, propuestas para una mayor infraestructura de transporte podrían cambiar por completo esta situación.

Petróleo

La exploración y extracción petrolera no son nuevas para Honduras, ni para la Mosquitia. Actualmente existen dos concesiones petroleras en Gracias a Dios (La Tribuna, 2011a), operadas por Honduras-Texas Oil y Victory Resources, las cuales fueron solicitadas en 1999 y autorizada en 2009 (La Tribuna, 2011d). Sin embargo, en su mayor parte, el petróleo constituye una amenaza prospectiva, pues la envergadura de actividades petroleras hasta el momento ha sido pequeña en comparación con la escala de extracción que se está contemplando, tanto para la Mosquitia, como para el mar Caribe hondureño.

En 2001 se comenzó a revelar mayores detalles sobre los recursos petroleros en la región, cuando un estudio demostró la existencia de yacimientos considerables en Tela y en la Mosquitia, abarcando unos 150 mil kilómetros cuadrados, con un potencial importante para fines comerciales (La Tribuna, 2011). En 2008, se firmó un convenio con la empresa Noruega-Estadounidense Petroleum Geo-Services (PGS) para realizar estudios de exploración en 10,000 kilómetros de líneas sísmicas del mar territorial de Honduras. Se reportó que PGS invertiría \$23 millones para el estudio, que recuperaría al venderlos posteriormente a firmas petroleras. El trabajo se demoró por la crisis política iniciada en 2009, por lo que los hallazgos de este estudio no se entregaron hasta 2010. Si bien los resultados no han permitido un grado completo de seguridad sobre la factibilidad de extracción comercial, según el gobierno, existen buenas posibilidades de extracción petrolera en el mar. Este resultado desató una ‘ola especulativa’ en 2011, provocando una gran cantidad de solicitudes de interés en exploración y explotación de petróleo, tanto en el mar, como en tierra firme. Esto incluye una solicitud de un ex Vice-Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quien representa a la empresa estadou-

nidense Caribx, buscó obtener una concesión petrolera para prácticamente todo el departamento de Gracias a Dios (La Tribuna, 2011a). El gobierno confirma que ha autorizado a varias empresas para llevar a cabo estudios de exploración en la Mosquitia y en Olancho, entre otros (La Tribuna, 2011), aunque todavía no se ha realizado una licitación pública para nuevas concesiones extractivas.

Los hallazgos de este estudio y la posibilidad de explotación de grandes cantidades de petróleo han acelerado el Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que se viene discutiendo. Esta propuesta de ley contempla la concesión de 100,000 hectáreas en tierra firme para explotación petrolera, además de 200,000 hectáreas en aguas internacionales. El gobierno ha planteado que es necesario implementar esta ley para establecer un marco institucional y legal adecuado para la producción petrolera a una escala mayor, además de establecer términos más favorables para empresas transnacionales (La Tribuna, 2011d; y 2011b). Hasta el momento, el anteproyecto carece de aspectos fundamentales de interés para las comunidades de la Mosquitia, como la distribución de beneficios, los estándares ambientales y sociales, además de la incertidumbre sobre la existencia y naturaleza de la consulta que se realizaría con comunidades para la implementación de actividades petroleras.

Por el momento existe un riesgo inmediato y cercano en la producción petrolera en el mar Caribe de Honduras, lo cual pone en peligro a unas 30,000 personas que dependen de los recursos del mar en esas zonas (OFRANEH-ODHPINH, 2011), mientras que en tierra firme, la situación no es tan clara. Parece muy probable que se implementarán mayores actividades de exploración en Gracias a Dios, pues ya se ha visto una gran cantidad de actores transnacionales buscando asegurar derechos sobre estos posibles recursos. Aunque aún está por deter-

minarse la calidad y ubicación de los yacimientos petroleros, no se puede tener mayor certeza sobre la envergadura de la amenaza a los pueblos de esta región.

Otras inversiones prospectivas: industria forestal, tilapia, carbono, REDD+, turismo

Se añan a estas presiones una serie de intereses en nuevas inversiones sobre los recursos naturales y forestales de la Mosquitia. El primero de estos se trata de un proyecto propuesto detallado en la iniciativa "Honduras is Open for Business", denominado "Manejo del Recurso Forestal para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña". Esta iniciativa busca promover una inversión de \$119.4 millones para el aprovechamiento privado y manejo de un área de más de 308,000 hectáreas de bosque, en una región que abarca las áreas protegidas propuestas de Mocerón y Rus Rus. Se prevé una producción anual de 4.5 millones de metros cúbicos de madera y una posibilidad de corta de 203,961 metros cúbicos. El área del proyecto comprende las comunidades de Sirsirtara, Rondin, Walpakiakira, El Salto, Mocerón y se prolonga hasta la frontera con Nicaragua. Por el momento no se ha anunciado ninguna inversión concreta bajo esta iniciativa.

Otra inversión prospectiva es la producción industrial de tilapia, actividad que no se incluía en el lanzamiento inicial de "Honduras is Open for Business", pero que en meses recientes se ha promovido por la Oficina de Promoción de Inversiones Extranjeras. Estas actividades se sumarían a la producción de tilapia ya existente en el país, que ya es el segundo mayor exportador a los Estados Unidos. La propuesta para la Mosquitia se centra en el pueblo de Brus Laguna, aunque el área del proyecto según la Oficina de Promoción de Inversiones comprende toda la municipalidad (Ver Mapa 14). El proyecto consistiría en el montaje de 271 jaulas flotantes

para la tilapia, en un área total de 54 m³; se proyecta una producción anual de 1 millón de kg a partir del tercer año (Honduras is Open for Business, 'Gracias a Dios', s.f.). Dada la evidencia sobre los fuertes impactos ambientales que se han asociado con varias prácticas de la producción industrial de tilapia (Cole et al, 2009), es bastante preocupante el impacto que tendría esta producción para los medios de vida de las comunidades del territorio. Hasta el momento no han anunciado inversiones concretas en esta iniciativa.

Además de estas inversiones potenciales, la promoción de otras nuevas incluye proyectos para acceder a mercados de carbono, sobre todo para los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y Yoro. De hecho, ya se ha reportado que empresas inmobiliarias han comprado tierras para este fin (La Tribuna, 2011c), aunque hay poca claridad sobre la ubicación exacta y la envergadura de estas compras, así como las características de las dinámicas que ya están ocurriendo en el territorio. Lo que sí es claro, es el decidido apoyo gubernamental para el aprovechamiento de iniciativas vinculadas con el mercado de carbono, cuyas inversiones se mencionan como estratégicas en la Visión de País y en el Plan de Nación, además de las iniciativas 'Honduras is Open for Business'. A pesar de estos factores, todavía no está claro qué impacto tendrán los mercados de carbono en el país, en particular por el débil estado de estos mercados a nivel internacional y por el tamaño relativamente pequeño de los bosques de Honduras, comparados con los de otros países fuera de la región, como México y Brasil, por ejemplo.

Vale la pena mencionar también el proceso de preparación para REDD+ en el país, pues la Mosquitia ha sido identificada como una de las regiones prioritarias para esta iniciativa. Esto es un elemento de particular preocupación en Honduras, donde las reivindicaciones de priorizar derechos, como primer y fundamental

paso para cualquier mecanismo REDD+, no tienen una ruta clara de diálogo con el gobierno actual. Se aúna a estas iniciativas un proyecto sobre REDD+ impulsado por Rainforest Alliance para implementar con algunas comunidades de la Mosquitia, de la misma índole del proyecto que se ha estado trabajando durante varios años con las concesiones forestales comunitarias de Petén.

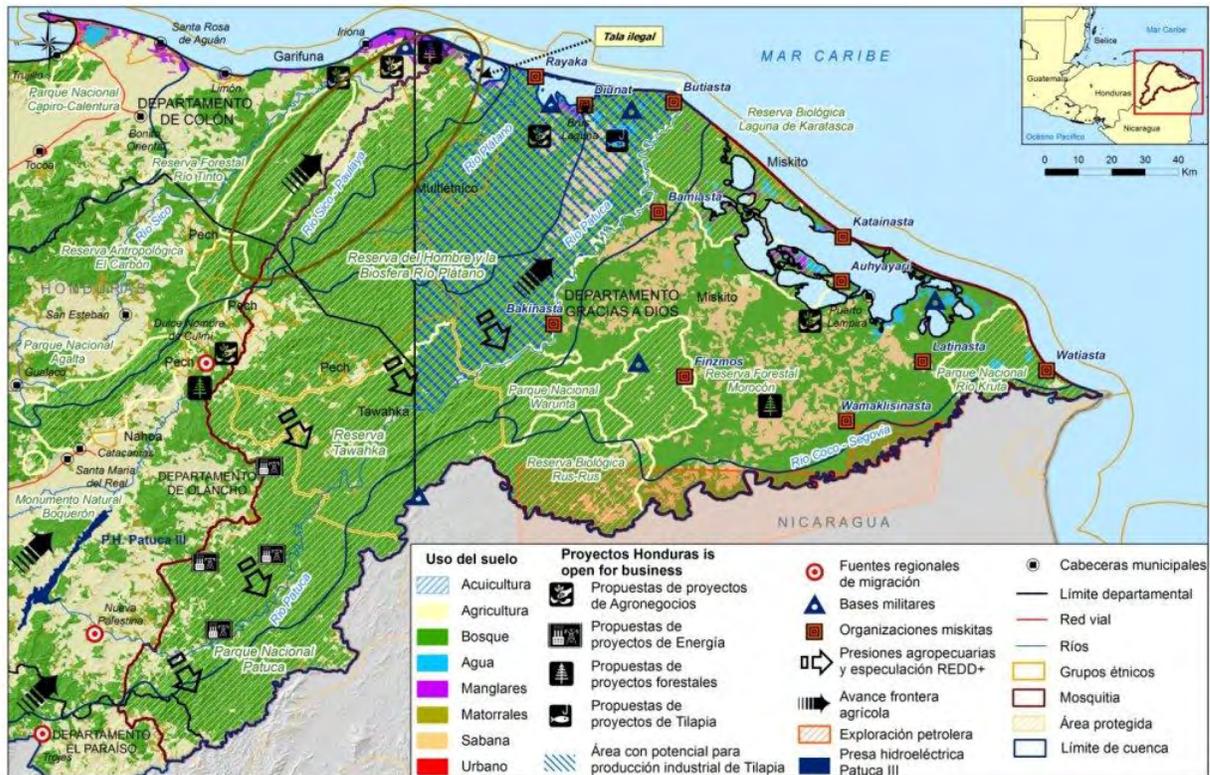
Finalmente, debe mencionarse el turismo como una presión en el futuro, en particular si se logran concretar proyectos de infraestructura de transporte en la región, pues la Mosquitia también se percibe como un territorio de desarrollo turístico de largo plazo, según la Secretaría de Turismo de Honduras. (Secretaría de Turismo, 2011)

Implicaciones para las comunidades de la Mosquitia

La Mosquitia se enfrenta con fuertes presiones que continúan degradando los recursos del territorio y debilitando los derechos y la tenencia de la tierra por parte de las comunidades indígenas de la región. Presiones tradicionales provenientes de la tala ilegal, la migración campesina y la expansión ganadera, ahora se han agudizado con las nuevas presiones del narcotráfico, que además han acelerado las presiones sobre el territorio (Ver Mapa 15).

Sin respuestas decisivas ante estas dinámicas, se puede dar por hecho que estas terminarían transformando a la región de la Mosquitia. Por si esto fuera poco, se aúnan a estas presiones una nueva generación de intereses por inversiones que aún no han llegado al territorio, pero que ya muestran indicios de un posible y amplio despliegue en el futuro. Estos intereses son facilitados por la nueva institucionalidad volcada hacia la atracción de inversión extranjera, incluyendo garantías extraordinarias ofrecidas por el Estado. No obstante, queda por ver si el

Mapa 15
Bases militares y ubicación de proyectos “Honduras is open for business”



Elaborado por PRISMA, basado en Rivera (2011); Bendless (2009); Padilla (2009); Mopawi (2005); ENEEE – UEPER (2011); Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras (2010); USGS-Eros Data Center (2005) y bases de datos SIG de Mesoamérica / CCAD-BM (2002).

gobierno logrará atraer el interés de inversionistas en la Mosquitia en el entorno de crisis política e institucional. Por ello, no se puede precisar con certeza la cercanía de las amenazas o sus probabilidades de desplegarse en el futuro cercano. La evidencia disponible permite especular sobre las amenazas cercanas, muy vinculadas con la expansión de la palma africana y con la extracción petrolera en el mar, así como en tierra firme, dependiendo de si se encuentran yacimientos de buena calidad. Más allá de las presiones por sector, la rapidez con la que se están generando distintas propuestas para la Mosquitia (palma africana, madera, carbono forestal, tilapia, entre otros), pareciera que estamos en presencia de una especie de subasta de la Mosquitia. Más que una estrategia de desarrollo en la región basada en las visiones

endógenas que también consideran los derechos de los pueblos y comunidades en ese territorio, pareciera que el gobierno busca promover la inversión extranjera a toda costa, sin importar el tipo de inversión, ni los impactos sociales o ambientales que tendrían en el territorio. El andamiaje institucional que se ha construido para promover estas inversiones dificultarán mucho los esfuerzos por contrarrestar estas visiones sobre el futuro de ese territorio.

Dadas las dinámicas expuestas, la Mosquitia se encuentra en un momento crucial. Primero, ante la necesidad de confrontar las presiones actuales sobre el territorio, urge una respuesta decisiva y efectiva. Esto es importante no solamente para la defensa inmediata del territorio, sino también para frenar la apertura de inte-

reses externos que aprovecharían el deterioro de la región como pretexto para promover nuevos mega-proyectos. De manera simultánea, será sumamente importante aprovechar el espacio brindado por las dificultades nacionales en atraer la inversión extranjera, para establecer senderos de defensa de derechos frente a las presiones prospectivas que tarde o temprano constituirán una amenaza inmediata, incluyendo el trabajo de incidencia frente a estos proyectos que pretenden acaparar tierra en la Mosquitia. A continuación se discuten algunos factores claves en la construcción de estos senderos.

Acceso y conectividad: Infraestructura de transporte

El factor imprescindible y de mayor importancia para actores agroindustriales y forestales es la infraestructura de acceso y conectividad en la región. Los caminos y carreteras contribuirán a la viabilidad de una expansión de cultivos agroindustriales, por lo que será de suma importancia responder a propuestas de infraestructura de manera rápida y eficaz, con aliados estratégicos. Se debe poder contar con actores de la conservación para aliarse con estos esfuerzos.

Demarcación y titulación: Condición necesaria para la gobernanza territorial

Una de las iniciativas de mayor importancia para el fortalecimiento territorial de la Mosquitia son los proyectos de demarcación, titulación y fortalecimiento institucional que ya cuentan con diversos apoyos de parte de entidades como el Banco Mundial y GIZ, entre otros. Está claro que la demarcación y la obtención de títulos en áreas demarcadas puede ser un paso necesario y de suma importancia para la defensa de los territorios, aunque también está claro que hay elementos importantes en estos proce-

sos que habrá que seguir trabajando, como por ejemplo, a nombre de quién se titula. Sin embargo, quizás el elemento de mayor importancia es la gobernanza territorial, pues habrá que superar los desafíos actuales de la gestión territorial, lo cual, irónicamente requiere apoyos adecuados del Estado y de la cooperación internacional, incluso bajo las presiones que llegan cada vez con mayor fuerza en el territorio.

REDD+ y FLEGT: ¿Posibles oportunidades?

La apertura de espacios de diálogo franco con el actual gobierno es limitada. Sin embargo, hay nuevos e importantes procesos que abren posibles oportunidades de fortalecimiento de derechos frente a los nuevos patrones de inversión. Estas incluyen los avances de la iniciativa sobre Legislación, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT por sus siglas en inglés), que abre oportunidades de diálogo sobre reformas en la gobernanza forestal y el papel de las comunidades en la gestión forestal-territorial. Además, consideramos que si bien REDD+ representa una posible amenaza, también abre oportunidades importantes para reivindicar y fortalecer derechos, a nivel local, nacional e internacional.

Aprendizaje de procesos en territorios con inversiones más avanzadas

El avance relativo de las inversiones en la Mosquitia se encuentra en un estado más incipiente que otros en la región, como Petén. Aprovechando que este territorio hondureño todavía no atraviesa la fuerte presencia de actores transnacionales como en otros territorios, la construcción de 'senderos' de defensa frente a inminentes amenazas se beneficiarían mucho del aprendizaje de experiencias que atraviesan desafíos similares en la región, en las cuales, las dinámicas territoriales están mucho más generalizadas y desarrolladas.

Inversiones y dinámicas territoriales: Implicaciones para la gobernanza y la construcción de alternativas territoriales

Las inversiones en Centroamérica reflejan la manera en que el cambio económico y la globalización se amplían y profundizan, transformando sustancialmente los desafíos y oportunidades que enfrentan las comunidades rurales en la región. Sin duda, los derechos y tenencia de las comunidades rurales, campesinas y forestales, así como los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica enfrentan severas amenazas cuya envergadura es proporcional a la manera en que las inversiones requieren nuevos despliegues territoriales, tal como ocurrió con el viejo modelo agroexportador. Sin embargo, el nuevo contexto también plantea nuevas oportunidades, no solamente para defender y fortalecer los derechos, sino también para construir estrategias territoriales endógenas para avanzar hacia la equidad, la sustentabilidad y la resiliencia frente al cambio climático.

Con esa lógica, a continuación se discuten algunas de las tendencias clave en la región, en relación con las crecientes inversiones, los marcos institucionales que las promueven, su vinculación con las dinámicas territoriales, así como las implicaciones para los derechos, la gobernanza y la construcción de alternativas territoriales en la región.

Inversiones: Nuevas y viejas fronteras de acumulación

Centroamérica es sustancialmente distinta de lo que hasta hace algunas décadas se conoció como una región cuyas economías se basaban predominantemente en el modelo agro-

exportador (Bulmer-Thomas, 1987). Las economías de la región se han diversificado, experimentando un auge acelerado en el creciente peso de las remesas como fuente principal de generación de divisas (con excepción de Costa Rica y Panamá) y el surgimiento de una nueva serie de sectores dinámicos como servicios, maquila, turismo y nuevos monocultivos no tradicionales (Robinson, 2004; Segovia, 2005; y Rosa, 2008). Una parte importante de esta transformación económica se observa en la evolución, focalización y ampliación de las inversiones en la región, que se basan en apuestas claras y en reformas institucionales agresivas para captar mayores flujos de inversión nacional e internacional como un pilar fundamental en las estrategias de crecimiento y desarrollo en todos los países de la región.

En este proceso se evidencia una ‘confluencia perfecta’ de por lo menos tres tendencias claras: *primero*, el proceso de diversificación económica promovido desde la implementación de los procesos de reforma y liberalización, hasta las propuestas más recientes que posibilitan inversiones públicas y marcos institucionales favorables para convertir a la región centroamericana en una plataforma logística; *segundo*, un acelerado impulso por parte de grupos económicos y empresas transnacionales que en sus estrategias de acumulación, orientan una parte importante y creciente de sus inversiones para aprovechar las oportunidades en nuevos territorios que hasta hace unos pocos años estaban relativamente fuera de las carteras de inversión privada; y *tercero*, el contexto mundial de aumento en la demanda de alimentos y materias primas,

que se combina con la búsqueda de inversiones en el sector real de la economía ante la crisis financiera, ha puesto a los territorios rurales en Centroamérica bajo la mirada de importantes estrategias de inversión de origen nacional, regional y transnacional.

En esta confluencia, todo parece apuntar hacia una mayor profundización de las inversiones que buscan aprovechar las oportunidades de mejorar la inserción de Centroamérica en la economía global. Esto supone la promoción sistemática de inversiones en nuevos proyectos de energía, en telecomunicaciones y en infraestructura de transporte, que junto a las crecientes inversiones en alimentos, agro-combustibles, minería, hidrocarburos, productos maderables e incluso en servicios ecosistémicos, constituyen severas amenazas para los derechos, los medios de vida y la gobernanza en los diversos territorios de la región. Los crecientes y violentos conflictos que ya se observan en la región denotan esta situación.

Cambios y continuidades que amenazan los derechos

El aumento de la inversión y la promoción de nuevos sectores para invertir en Centroamérica se traducen en mayores presiones sobre los territorios rurales, por la importancia de sus recursos, por la ubicación estratégica para diversas actividades críticas para el auge de sectores como energía, transporte, comunicaciones o turismo, pero también por el despliegue territorial de diversas actividades ilícitas. En estas dinámicas, se observan cambios y continuidades en relación a patrones de acumulación previos que vale la pena resaltar, pues son críticos para una mejor comprensión de los desafíos para una gobernanza territorial.

A diferencia del modelo tradicional centrado en grandes extensiones de tierra dedicadas princi-

palmente a un cultivo específico (café, banano ó algodón), actualmente coexisten inversiones más diversificadas en franca expansión, que incluyen el auge de cultivos como la palma africana, la agroindustria a gran escala, la ganadería, industrias extractivas como minería y petróleo, proyectos de generación hidroeléctrica, el auge del turismo, la explotación forestal y de la acuicultura con fines industriales, así como un creciente interés en iniciativas de mitigación del cambio climático vinculadas con mercados de servicios ecosistémicos, como el carbono forestal, entre otros.

A diferencia del pasado, esta nueva diversidad de inversiones que ocurren de manera simultánea y acelerada, genera dinámicas abrumadoras en diversos territorios rurales de Centroamérica. Por ejemplo, en relativamente poco tiempo en Petén, la dinámica desatada por los fuertes intereses vinculados con megaproyectos de turismo y con la expansión de la palma, reemplazaron al petróleo, que era vista como la mayor amenaza en ese territorio. Esta diversidad de inversiones en si misma plantea contradicciones importantes, tal como ocurre en la Mosquitia hondureña, donde se promueve la explotación forestal, al mismo tiempo que se fomentan iniciativas de mitigación del cambio climático y la explotación petrolera.

La diversidad de inversiones refleja la coexistencia de estrategias de acumulación diferentes en un mismo territorio. En parte, esto es resultado de las condiciones institucionales que han promovido y facilitado iniciativas de inversión, así como la articulación a nuevos mercados, no solo de materias primas, sino también de eventuales mercados de servicios ecosistémicos, a través, por ejemplo, de la combinación de incentivos forestales con inversiones turísticas, explotación maderera, o ampliación de la superficie cultivada con palma africana, entre otros.

Las implicaciones de estas tendencias complejizan la posibilidad de anticipar la (s) amenaza (s) más inminentes a los derechos y a las condiciones de gobernanza; también implica que las inversiones no solo podrían ser mayores, sino que también tendrían un despliegue territorial mucho más amplio, extendiéndose para aprovechar diversas condiciones críticas para su rentabilidad (biofísicas, ambientales, logísticas, etc.).

La composición y el comportamiento de los actores que impulsan las inversiones son aspectos que también presentan cambios significativos. Al mismo tiempo que se amplían mercados como el de China y se incrementan los flujos de inversión y comercio con países como México y Brasil, los grupos económicos (nacionales y regionales) se consolidan y establecen alianzas con otros grupos (regionales y extra-regionales) alrededor de uno o varios sectores de interés. Como resultado, se conforman redes empresariales mucho más complejas y se incrementa considerablemente la cantidad de recursos disponible, con implicaciones directas en una mayor celeridad de su despliegue, con alcances mucho mayor de las inversiones en distintos territorios, e incluso con una mayor capacidad de respuesta ante nuevas oportunidades y tendencias de los mercados nacionales, regionales y globales. En esta dinámica, los grupos económicos acumulan un poder cada vez más creciente, no solo por su inserción en los mercados en que participan, sino también por su influencia en los marcos de política pública y en la definición del '¿qué hacer?' en diversos territorios rurales.

Junto a las dinámicas económicas, el rol del Estado también ha evolucionado. A diferencia de épocas anteriores en las que el Estado se destacaba como un actor decisivo en los procesos de expansión de la agro-exportación a través del apoyo técnico, de subsidios y de diversas políticas para promoverla, principalmen-

te para proyectos de acumulación nacionales (Robinson, 2004), hoy en día, su papel consiste en el de un facilitador activo para la llegada de múltiples inversiones a los territorios. Con el objetivo de asegurar un clima de negocios favorable para atraer la inversión y lograr una mayor inserción de los países en la economía global, los gobiernos y la banca multilateral han implementado diversas reformas en los marcos legales y regulatorios, financiado megaproyectos de infraestructura, promovido la de inversión en 'nuevas tierras', e incluso, propiciado el despliegue de fuerzas de seguridad para proteger grandes proyectos de inversión.⁷ Además de asegurar estas condiciones básicas, se observa un papel del Estado mucho más limitado en los territorios, lo cual demuestra la enorme ausencia de mecanismos regulatorios de la manera en que se despliegan las inversiones en el territorio. Los tradicionales marcos de ordenamiento territorial, que han demostrado debilidades estructurales en los países de la región, son insuficientes frente a las dinámicas desatadas por estas nuevas configuraciones de la inversión en los territorios rurales. Incidir en estas dinámicas no solo requiere una mayor acción del Estado, sino también espacios y mecanismos de participación (y negociación) de los diversos actores en el territorio, que también tienen intereses económicos, sociales y ambientales.

Inversiones avasalladoras: ¿Únicas opciones para los territorios?

Las inversiones extranjeras, regionales ó nacionales en territorios rurales se vuelven aún más importantes en el contexto de los pobres resul-

⁷ Pareciera que los incentivos todavía están dirigidos predominantemente a sectores individuales. Con excepción de las recientes iniciativas en Honduras, no se identifican programas de incentivos más integrales para la producción territorial. A menudo, los incentivos no son factores tan decisivos para las inversiones, como los son otros elementos (marcos regulatorios, acceso a tierra, seguridad).

tados en sectores que se consideraron claves para la generación de empleo y para dinamizar las economías de la región, ejerciendo mayores presiones para promover inversiones de envergadura por toda la región. A manera de ejemplo, las apuestas por la maquila tuvieron resultados limitados en relación con las enormes expectativas de los gobiernos e inversionistas. Además, entre los nuevos sectores que se promueven para la inversión, se experimentan condiciones de volatilidad importantes (Robinson, 2004), incluso en sectores como turismo y desarrollo inmobiliario en países como Costa Rica, que han sido afectados fuertemente por la crisis económica y financiera.

El escenario regional está influenciado por el nuevo contexto global de aumento en la demanda y repunte en los precios de alimentos y materias primas, lo cual es visto como una de las mejores oportunidades para la inversión y el crecimiento, por parte de tomadores de decisión e inversionistas. Esto explica, en parte, la celeridad, agresividad y uniformidad con la que se promueven nuevas estrategias de acumulación en territorios rurales, con un renovado interés por la tierra y los recursos naturales. Si bien en varios países, la envergadura de las inversiones todavía no es de gran escala, las inversiones que se han realizado en otros ya demuestran un enorme dinamismo, así como severos impactos negativos, tanto en términos sociales y ambientales, como de gobernanza, tal como ocurre en Petén, donde existe un despliegue bastante avanzado de diversas inversiones, tanto por los sectores económicos en que se invierte, como por el origen de los inversionistas (nacionales, regionales y transnacionales), que más allá de la esfera económica, también se vinculan con estructuras políticas locales y nacionales, fuertemente vinculados con los diversos intereses sobre los recursos naturales, que constituyen ahora una base importante para la acumulación de poder económico y político. La diversidad y envergadura de intereses que si-

guen desplegándose en Petén, constituyen enormes amenazas que desafían la defensa y consolidación de derechos para diversas comunidades rurales, campesinas y pueblos indígenas.

Una situación relativamente distinta de Petén ocurre en la Mosquitia hondureña, donde aún predominan las presiones tradicionales de migración, tala ilegal, ganadería y narcotráfico, pero que rápidamente pueden verse rebasadas como resultado de los más recientes planes e iniciativas de promoción de la inversión extranjera, regional y nacional. Territorios como la Mosquitia y otros en la región en los que aún no se han extendido estas dinámicas de inversiones, adolecen de propuestas alternativas con una envergadura territorial, capaz de constituirse en pilares para la construcción de senderos alternativos, que vayan más allá de la defensa y fortalecimiento de derechos.

Limitados marcos de inversión: Replantear la institucionalidad y la gobernanza territorial

Las inversiones no son nuevas en las áreas rurales. En épocas anteriores, las grandes masas forestales estaban sujetas a programas de colonización rural y hasta cierto punto, eran destinos frecuentes de inversiones tanto públicas como privadas. Sin embargo, la mayor parte de áreas de bosque quedaba al margen de las actividades económicas más dinámicas (cultivos de agroexportación, ganadería, minería, etc.), pero frecuentemente se consideraban como 'válvulas de escape' ante las rigideces de los sistemas de tenencia de la tierra. Hoy en día, territorios predominantemente forestales tienen un perfil mucho más alto en las nuevas lógicas de inversión, tanto por la importante cantidad de recursos naturales que poseen y por ende, por la variedad de opciones de inversión, por el agotamiento de otras opciones en territorios que se dieron procesos de expansión, así como por las

nuevas oportunidades que abre la construcción de infraestructura de transporte y de otros proyectos que facilitan el acceso y conectividad en diversos territorios.

Las inversiones se realizan en contextos diferentes. En los pueblos indígenas y tradicionales, el territorio tiene significados y cosmovisiones diametralmente distintos a la visión predominante de quienes promueven las inversiones. Además, con frecuencia, en estos territorios existe también una fuerte representación de los actores, visiones y estrategias de conservación (incluyendo áreas protegidas), así como la presencia de fuerzas ilícitas. Se suma a estas dinámicas el hecho que los territorios de expansión de las inversiones, no cuentan con las 'válvulas de escape' como ocurría durante la expansión del modelo agroexportador, lo cual es sustancialmente distinto considerando que con las inversiones también se desatan procesos de desalojo y despojo, tal como ocurre en distintas zonas de Petén. Esto hace que la dimensión de derechos para comunidades rurales y pueblos indígenas resulte mucho más crítica que en el pasado.

Las nuevas configuraciones de actores y la nueva institucionalidad para promover inversiones, continúan basándose en condiciones de exclusión económica y social, pues explícitamente se promueve y se favorece a sectores económicamente poderosos (a menudo provenientes de fuera de los territorios), cuyas inversiones tienen severos impactos negativos para las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta situación de vulnerabilidad se agrava por fenómenos como la concentración de la tierra,⁸ el despojo de derechos y la destrucción de los medios de vida tradicionales,

⁸ Para una mayor discusión sobre este tema, puede consultarse "La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: una aproximación a la problemática actual", publicado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. (Wiener Bravo, 2011)

con el consiguiente desplazamiento de los habitantes de sus territorios de origen. Los patrones de despojo de la tierra y expulsión ocasionados por la expansión de la palma africana en Petén evidencian estos impactos.

Sin lugar a dudas, el contexto actual y las perspectivas hacia futuro presagian la profundización de las presiones sobre los territorios rurales en Centroamérica. Esto plantea una doble reevaluación: por un lado, las estrategias de promoción de inversiones no han tenido mayores evoluciones, pues a pesar de los considerables impactos, los marcos que las guían y orientan, ni siquiera incorporan consideraciones sociales y ambientales capaces de moderar ó gestionar las dinámicas que desatan en los territorios. Más allá de las evaluaciones de impacto ambiental, marcos alternativos como el consentimiento libre, previo e informado deberían formar parte de los marcos de promoción de inversiones en la región.

Los marcos de política pública en la región siguen sobre-determinados por la lógica económica y eso también determina las visiones de desarrollo hacia los territorios, que es justamente el marco que orienta las políticas de promoción de inversiones. Esto no es nuevo, de hecho, es el abordaje que ha guiado políticas públicas en territorios rurales en distintos momentos, pero que se han profundizado desde las reformas de los años ochenta y noventa. En este sentido, aspectos mucho más críticos que en el pasado, como las condiciones de gobernanza territorial, la tenencia y los derechos de las comunidades se supeditan a la instauración de condiciones para la inversión y actividades económicas bajo el afán de maximizar el rendimiento económico de los territorios.⁹

⁹ La idea de rendimiento, generalmente es entendida en un sentido limitado (materias primas exportadas, monocultivos de exportación, etc.). Una mirada a los planes de inversión revela este patrón, así como la centralidad de las metas de reducir los costos de transporte y aumentar la eficiencia.

Los crecientes conflictos y presiones en territorios rurales ejercidos como resultado del aumento en la demanda de alimentos y materias primas, magnifican una nueva serie de consecuencias e implicaciones para los territorios rurales. Esto ya se observa en Petén, donde inversiones de gran envergadura ya se han desplegado sin esfuerzos paralelos que eviten impactos negativos en la estructura de tenencia, ni que fortalezcan la gobernanza territorial. El resultado ha sido que las comunidades más vulnerables por su situación de tenencia y gobernanza son las más directamente afectadas por las dinámicas territoriales que desatan las inversiones, pues sus territorios son apetecidos para la implementación de diversas carteras de inversión. Procesos similares se observan a lo largo y ancho de la región, incluyendo territorios como la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (Cuéllar et al, 2011), comarcas indígenas en Panamá y el despliegue de este tipo de dinámicas en la costa atlántica y la Mosquitia hondureña, entre otros territorios.

Estas tendencias son congruentes con patrones de inversiones en territorios rurales en otras regiones. Por ejemplo, en el estudio de Deinenger y Byerlee (2011) realizaron un análisis de regresión de 464 proyectos de inversión con una extensión total de 56.6 millones de hectáreas en diversos países de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, encontrando que la ausencia de derechos reconocidos tuvo una correlación importante con la atracción de inversiones (tanto planeadas, como implementadas), por cierto, una correlación mucho más importante que los índices de ‘clima de inversión’.¹⁰ Otros estudios también identificaron la débil gobernanza democrática y de tierras, así como derechos poco seguros como condiciones propicias para la erosión de las condiciones de tenencia y la generación de procesos de despojo y desalojo

¹⁰ Hubo una correlación débil con la inversión planeada y ninguna correlación con la inversión implementada. (Deinenger y Byerlee, 2011)

.(Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011; Anseeuw et al, 2011)

Dada esta evidencia, es preocupante que la mayor parte de las iniciativas regionales como las que se implementan en el Proyecto Mesoamérica, siguen enfocándose casi exclusivamente en una lógica económica. Las consecuencias van mucho más allá del despojo, desalojo o erosión de los derechos frente a las nuevas inversiones, pues también incluyen una enorme cantidad de implicaciones en el territorio que socavan senderos más sensatos de sustentabilidad ambiental, social e incluso económica a largo plazo. Como se observa de forma dramática en Petén, pero también en otros territorios en la región (Cuéllar et al, 2011), la expansión de la palma africana no solamente despoja y desaloja a comunidades, sino también afecta fuertemente las condiciones para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos, lo cual repercute fuertemente en los medios de vida, mucho más allá de los impactos más directamente atribuibles a la expansión de cultivos, actividades extractivas e incluso el turismo.¹¹

La migración forzada como consecuencia de estos procesos se refuerza por la co-existencia de otros proyectos de inversión como petróleo, hidroelectricidad, ganadería, infraestructura y narcotráfico, que siguen impulsando nuevos procesos de degradación, incluyendo áreas protegidas. Por cierto, los actores de la conservación parecieran haberse conformado a enfocarse y reforzar el modelo tradicional de ‘islas de conservación’ a través de las áreas protegi-

¹¹ A manera de ejemplo, en diversas aldeas en Sayaxché, las comunidades evidencian los impactos de la expansión de la palma, pues mencionan problemas como la “falta de agua: se secaron los arroyos, los nacimientos, por causa de los drenajes o cunetas de la empresa [de palma]. Ya no hay [bosque] todo ha sido botado, ya solo palmas hay”; y “arroyos secos, escasez del agua en los pozos, de agua comunitaria y arroyos contaminados secando la plantación”. (Alonso-Fradejas et al, 2011)

das. Con algunas excepciones, los actores de la conservación no han adoptado un abordaje más territorial, y de hecho, pareciera que la emergencia de nuevos mercados de servicios ecosistémicos derivados de las iniciativas de mitigación del cambio climático han reforzado el abordaje de los tradicionales modelos de conservación, tal como ocurre con varias iniciativas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación.

Las políticas sectoriales y los abordajes fragmentados no han podido responder o guiar las inversiones. Al contrario, en la práctica, las inversiones de los actores de poder con fuertes intereses en los territorios explican el despliegue de dinámicas como estas. Un elemento perverso en estos contextos es que la ingobernabilidad territorial y a veces la violencia misma, se han vuelto parte de las 'ventajas competitivas' más relevantes, incidiendo en las decisiones de inversión generalmente a corto plazo, que terminan impactando en las mismas condiciones de gobernanza, en mayores impactos ambientales y sociales en los territorios. La expansión de la llamada narco-ganadería ilustra esta situación.

Lo que se pierde con estas dinámicas no solamente son condiciones ambientales, sino también las prácticas, conocimientos, visiones e institucionalidades comunitarias (que van desde lo forestal hasta prácticas agrícolas tradicionales, campesinas e indígenas), las cuales representan condiciones territoriales fundamentales para la promoción y fortalecimiento de senderos alternativos de desarrollo endógeno, que no solamente son críticos para estrategias más inclusivas de conservación, sino que también representan una base territorial para estrategias de adaptación al cambio climático.

Más allá de los derechos: El desafío de alternativas territoriales

Las estrategias utilizadas por comunidades y organizaciones locales para defender sus derechos, requieren adoptar nuevos mecanismos y nuevas alianzas con otros actores. Esto plantea importantes desafíos, no solo para los actores territoriales, sino también para las instancias que acompañan estos esfuerzos. El creciente interés, tanto a nivel global como regional por las problemáticas ambientales y los avances en el tema de derechos, son factores clave sobre los cuales habrá que fortalecer y unificar esfuerzos, como pilar fundamental para la construcción de alternativas.

El reconocimiento y fortalecimiento de derechos y gobernanza territorial en Centroamérica es crucial para responder efectivamente a las crecientes presiones y dinámicas territoriales. Es bastante conocido que el reconocimiento de derechos tiene resultados positivos en el manejo de los bosques, tal como se ha visto en distintos territorios en la región.¹² Este reconocimiento es fundamental para apoyar la amplia gama de prácticas productivas de las comunidades tradicionales, campesinas y pueblos indígenas en la región.

El énfasis de la importancia de una mayor preocupación en los derechos y las condiciones de gobernanza en territorios rurales se han resaltado en varios estudios (Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 2011; Anseeuw et al, 2011; Deinenger y Byerlee, 2011). A pesar de su importancia, por sí mismos, los derechos no son suficientes frente a las diversas, aceleradas y complejas presiones desatadas por el auge de las inversiones, aunque son la base fundamental para la cons-

¹² Entre otros, se puede mencionar los bosques en Petén, Guatemala; el sur de México (Bray et al, 2008), BOSAWAS en Nicaragua (Stocks et al, 2007); y Darién, en Panamá. (Nelson et al, 2001)

trucción de alternativas endógenas. De hecho, existen prácticas que abarcan una amplia gama de alternativas con una lógica productiva que van desde la forestería comunitaria, hasta estrategias de producción agroecológica y la incorporación de estrategias de turismo rural comunitario, entre otros. Sin embargo, se requieren marcos estratégicos que además de basarse y apoyar esfuerzos endógenos, también tengan posibilidades de interactuar y negociar con los actores que promueven la inversión, de modo que las estrategias y visiones locales también sean parte del entramado de negociaciones sobre el futuro de los territorios (Cuéllar y Kandel, 2007; Kandel y Cuéllar, 2011). Los desafíos de sustentabilidad, equidad y desarrollo, requieren moldear la visión económica unidimensional con que se promueven inversiones, un desafío eminentemente político que requiere la construcción de correlaciones distintas de poder.

Aunque hay experiencias innovadoras, también hay una brecha importante entre los planteamientos alternativos en los territorios con los planteamientos en distintos foros de política, incluso internacionales. Esta brecha refleja y refuerza la fragmentación de políticas que inciden en los territorios, donde las propuestas de alternativas transitan por caminos distintos y limitados, sin mayores posibilidades de acercamiento para la construcción y fortalecimiento de alianzas. Las falencias y contradicciones que se generan en los territorios tradicionalmente considerados como ‘agrícolas’, de manera creciente se reconocen también como problemas forestales, y cada vez más se entrelazan profundamente con problemas como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad energética y la conservación de biodiversidad, entre muchos otros. Abordar uno de estos problemas, requiere esfuerzos más sensatos que abarquen sus interrelaciones, lo cual se facilita de manera sustancial, al considerar el conjunto de dinámicas y actores en el territorio.

Si bien hay fuertes limitaciones para avanzar en la construcción de alternativas territoriales, también hay aperturas emergentes que ofrecen oportunidades importantes. Movimientos alrededor de los derechos sobre la tierra, como Vía Campesina, ya han adoptado principios de sustentabilidad y autonomía que se promovían en sistemas agroecológicos, lo cual ha posibilitado nuevas alianzas entre actores agrarios y movimientos ambientales. Hay evidencias crecientes que demuestran los beneficios considerables que tienen los movimientos de pequeños productores para alcanzar objetivos vinculados con la seguridad alimentaria, la sustentabilidad del uso de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Incluso, estudios científicos demuestran cada vez más, que las prácticas de pequeños productores suelen ser más eficaces en conservar la biodiversidad que los abordajes convencionales que promueven ‘islas de conservación’ rodeadas de extensivas plantaciones agroindustriales (Perfecto et al, 2010) y otros mega-proyectos de inversión (infraestructura, industrias extractivas, etc.).

Se suman a estas oportunidades otros procesos de política en Centroamérica, que si bien aún son incipientes, reconocen la necesidad de nuevos abordajes territoriales y de marcos más integrales de políticas referidos a la agricultura, los bosques, la energía, la salud y el cambio climático. Iniciativas como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) y la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS) cuentan con el aval político de los países y representan parte de un necesario nuevo andamiaje de políticas para promover procesos alternativos de desarrollo en los territorios de la región. Sin embargo, las oportunidades reales en estas iniciativas dependerán de la manera en que se relacionen con las dinámicas territoriales concretas, pues como se ha visto, en los territorios se han desplegado fuertes intereses económicos, y también políticos.

Vale la pena destacar como una de las principales amenazas para las comunidades rurales, las implicaciones derivadas de las inversiones vinculadas al cambio climático. A pesar que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos del cambio y variabilidad climática, aún no hay políticas para responder de manera coordinada e integrada en los territorios. Lo que es más grave aún, es que con el despliegue de las inversiones, se están ampliando y profundizando procesos de degradación ambiental y desplazando comunidades que son las que cuentan con conocimientos, prácticas y visiones de sustentabilidad, todas ellas fundamentales para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos cada vez más críticos, pero también para promover estrategias masivas de adaptación al cambio climático. Reconocer y apoyar este papel clave que juegan las comunidades es quizá una de las mayores oportunidades para replantear las visiones prevalecientes de promoción de inversiones en particular, y de enfoques tradicionales de desarrollo en general. Muy probablemente, la actual coyuntura representa una oportunidad sin precedentes para el establecimiento de nuevas alianzas y nuevos marcos de política que además de las inversiones, pongan la equidad, la gobernanza y la sustentabilidad, como parte inherente de las estrategias alternativas de desarrollo en los territorios.

Alianzas y alternativas para el desarrollo futuro de los territorios

Si bien las nuevas inversiones y la envergadura de su despliegue en la región pueden parecer abrumadoras para las comunidades rurales, es importante resaltar las considerables capacidades que tienen las comunidades en tomar un rol protagónico en la coproducción del territorio, entendiendo que este es un proceso de construcción social. El fenómeno del 'acaparamiento de tierras', con frecuencia asume que las comunidades no tienen capacidad de respuesta a las

estructuras que inciden en los territorios. Como se observa en distintas partes del mundo, estos no son procesos absolutamente deterministas en que las comunidades quedan sin ninguna opción. Tomando en cuenta que se trata de procesos de construcción social de los territorios, los mismos son el resultado de una configuración de distintas fuerzas que convergen para definirlo, incluyendo a las comunidades que buscan defender sus derechos y desplegar sus propias estrategias alternativas de desarrollo. Las concesiones comunitarias de Petén, el proceso de fortalecimiento autonómico en la RAAN y las Comarcas Panameñas, entre otros, son solamente algunos ejemplos de estos procesos en Centroamérica.

La ampliación del acceso, control y toma de decisiones de las comunidades rurales ciertamente será clave como parte de las respuestas ante las dinámicas territoriales, pero también la construcción de alternativas a partir de las identidades y autoridades endógenas de los territorios. (Kandel, 2007)

Al igual que los procesos de globalización cambian la forma en que se invierte en territorios rurales, los avances en las comunicaciones y en el transporte también abren nuevas oportunidades para enfrentar las nuevas dinámicas territoriales. Con dichos avances, alianzas locales, nacionales y transnacionales alrededor de una amplia gama de problemas se han hecho más factibles, convenientes y útiles para las comunidades rurales. Los procesos de 'acaparamiento de tierras' abren nuevas oportunidades para alianzas con comunidades de otras regiones experimentando las mismas presiones, así como con grupos locales que antes no encontraban agenda en común, como las forestales y las agrícolas, por ejemplo. Procesos, políticas y actores vinculados a iniciativas como REDD+, FLEGT, ECADERT, ERAS adquieren una relevancia importante en este sentido, sobre todo

frente a la necesidad de adaptación al cambio climático.

Sin duda, las estrategias comunitarias que se desplieguen en el presente, serán cruciales en la definición de los territorios a futuro, en los cuales los derechos no solo se consoliden, sino que también se implementen estrategias alternativas basadas en la equidad, la sustentabilidad y la construcción de condiciones de gobernanza territorial que hagan más viables los esfuerzos de desarrollo en la región. Los senderos de construcción social de los territorios también

tendrán implicaciones en la forma en que la región se adapte, o no, al cambio climático. Esos senderos, así como la construcción de alianzas, no están exentos de peligros, de hecho, en la región también existen 'confluencias perversas' como parte de estrategias más amplias de gestión del riesgo social impulsadas por actores poderosos (económicos, políticos, lícitos e ilícitos), por tanto, esto también plantea desafíos importantes para avanzar hacia los objetivos de inclusión, equidad, sustentabilidad y gobernanza en territorios de la región.

Referencias

- Alonso-Fradejas, Alberto, Jose Luis Caal Hub y Tere-sita Chinchilla Miranda (2011). *Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI*. Instituto de Estudios Agrarios Rurales (IDEAR) y CONGCOOP. Guatemala.
- Alvarado, C. (28 de Marzo de 2006). *Aceite de jatropa para los automóviles*. Accedido el 10 de Septiembre de 2011, de El Periódico: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20060328/actualidad/26171/>
- Álvarez, L. (01 de Junio de 2011). *Solo Perenco y City Petén ofertan por área petrolera*. Accedido el Septiembre de 2011, de El Periódico: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20110601/economia/196224/>
- América Economía (2010). *BID financiará proyecto Hidroeléctrico Patuca*. <http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/honduras-bid-financiaraproyecto-hidroelectrico-patuca>. Accedido el 26 de enero, 2012.
- Anseeuw, Ward, Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula y Michael Taylor (2011). *Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*. IIED, CIRAD y ILC.
- Banco Interamericano de Desarrollo. <http://www.iadb.org>.
- Barillas, J. (2010). *Ponencia presentada en el I Simposio: Presente y futuro de los biocombustibles en Guatemala, 29 y 30 de junio*. Perspectiva agrícola. Guatemala.
- Bendless, Delbert (2009). *Crisis global y dinámicas territoriales en Centroamérica: implicaciones para la construcción de alternativas*. En Fundación PRISMA (coordinador). Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>
- BID (2007). *Empresario produce combustible de una planta nativa*. Accedido el 10 de septiembre de 2011, de <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=4330>.
- BID (2008). *Evaluación del apoyo del BID a la Iniciativa del Plan Puebla-Panamá*. Washington, DC.
- Bolaños, R. (22 de Junio de 2010). *Impulsan créditos para bajar carbono*. Accedido el 15 de Septiembre de 2011, de Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/economia/Impulsan-creditos-bajar-carbono_0_284971506.html
- Bosworth, James (2010). *Honduras: Organized Crime Gaining Amidst Political Crisis*. Woodrow Wilson Center For Scholars.
- Bray, D.B., Duran, E., Ramos, V.H., Mas, J.F., Velazquez, A., McNab, R.B., Barry, D., and Radachowsky, J. *Tropical Deforestation, Community Forests, and Protected Areas in the Maya Forest*. Ecology and Society 13 (2).
- Bulmer-Thomas, Victor (1987). *The political economy of Central America since 1920*. Cambridge University Press. New York.
- Caballero, L; y Maradiaga, E. (2007). *"Dinámica del turismo y desarrollo inmobiliario en Honduras. El caso de Tela"*. En Fundación PRISMA (coordinador) Seminario-Taller "Turismo y Desarrollo Inmobiliario en Centro América". Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en [http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews\[tt_news\]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e](http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews[tt_news]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e)
- CEPAL (2011). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Documento Informativo. Santiago, Chile.
- Cole, D., R. Cole, S. Gaydos, J. Gray, G. Hyland, M. Jacques, N. Powell-Dunford, C. Sawhney, W. Au. (2009). *Aquaculture: Environmental, toxicological and health issues*. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 212 (4).
- Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (2011). *Informe ejecutivo del Proyecto Mesoamérica 2010-2011*. XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

- Comité por la Libre Expresión. *CIDH Manifiesta Profunda Preocupación Sobre Bajo Aguán*. <http://clibrehonduras.com/main/noticias/cidh-manifiesta-profunda-preocupaci%C3%B3n-sobre-bajo-agu%C3%A1n> Accedido el 25 de enero, 2011.
- Cortavé, M. (2009). *Diálogo mesoamericano. Reducción de emisiones por deforestación y degradación: implicaciones para comunidades forestales*. En Fundación PRISMA (coordinador). Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en <http://www.prisma.org.sv>.
- Cuéllar, N., Kandel, S., Davis, A., Díaz, O., Luna, F., and Ortiz, X. (2011). *Territorial Dynamics in Central America: context and challenges for rural communities*. Fundación PRISMA, San Salvador, El Salvador.
- Cuéllar, Nelson y Kandel, Susan (2007). *Gestión territorial rural: Enfoque para fortalecer estrategias de vida de comunidades rurales pobres*. Avance de Investigación No. 3. PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- Dardón, B. (08 de Abril de 2004). *Un futuro prometedor*. Accedido el Septiembre de 2011, de Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/economia/futuro-prometedor_0_91792058.html
- Davis, Andrew (2010). *Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación en Guatemala: Iniciativas, territorios y actores de un proceso en marcha*. Fundación PRISMA, San Salvador.
- Deinenger, Klaus y Derek Byerlee (2011). *Rising Global Interest in Farmland: can it yield sustainable and equitable benefits?* The World Bank.
- El Heraldo (2011, 29 de abril). *Honduras instalará base militar en Patuca: base servirá para evitar el avance de la deforestación y limitar las operaciones del narcotráfico*. Accedido al: <http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2011/04/29/Noticias/Honduras-instalara-base-militar-en-Patuca>
- El Periódico (2009, Agosto 11). *Congreso aprueba préstamo para financiar la Franja Transversal*. Accedido el 24 de Noviembre 2011: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20090811/pais/110007>
- El Periódico (2010, 22 de Agosto). *La producción petrolera nacional sin salir de los números rojos*. Accedido el 20 de Noviembre 2011: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20100222/economia/138802>
- Environmental Investigation Agency (2005). *The Illegal Logging Crisis In Honduras*. A report by the Environmental Investigation Agency produced with the support of the Center for International Policy', Washington, DC.
- García, S. y Lebeau, J. (2007). *"Turismo y desarrollo inmobiliario en Guatemala. Un mosaico de experiencias"*. En Fundación PRISMA (coordinador) Seminario-Taller "Turismo y Desarrollo Inmobiliario en Centro América". Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en [http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews\[tt_news\]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e](http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews[tt_news]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e)
- Global Witness (2009). *Illegal logging in the Rio Platano Biosphere Reserve: A Farce in Three Acts*.
- Gómez, R. (27 de Noviembre de 2009). *Papayas de exportación*. Accedido el Septiembre de 2011, de El Periódico: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20091127/economia/125929>
- Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (2011). *Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura*. Roma.
- Holt-Giménez, Eric e Isabella Kenfield (2008). *When Renewable Isn't Sustainable: Agrofuels and the Inconvenient Truths Behind the 2007 U.S. Energy Independence and Security Act*. Food First Institute for Food and Development. Policy Brief No 13. Marzo. Oakland.
- IFC (2011a). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP26009. Consultado 20 de noviembre.
- IFC (2011b). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27345. Consultado 20 de noviembre.
- IFC (2011c). *Summary Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP25331. Consultado 21 de noviembre.

- IFC (2011d). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27250. Consultado 21 de noviembre.
- IFC (2011e). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27924. Consultado 21 de noviembre.
- IFC (2011f). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27243. Consultado 22 de noviembre.
- IFC (2011g). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP27975. Consultado 22 de noviembre.
- IFC (2011h). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP28139. Consultado 22 de noviembre.
- IFC (2011i). *Summary of Proposed Investment*, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP26819. Consultado 22 de noviembre.
- IFC. 2011. *Summary of Proposed Investment*, Julio 2011, http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/ProjectDisplay/SPI_DP25449. Consultado 20 de noviembre.
- InSightCrime (2011). *Grupos de poder en Petén: Territorio, Política y Negocios*. Consultado el Agosto de 2011, de Organized Crimen in The Americas: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.libertopolis.com%2F%3Fdl_id%3D11&ei=YGqoToHLF7CmsAKrt7DhDw&usq=AFQjCNHxMrKKEySzQzPwViN8mCz0efzA
- Kandel, Susan (2007). *Construyendo un abordaje territorial para la Gestión Territorial Rural que favorece a las comunidades rurales más pobres*. Fundación PRISMA, San Salvador, El Salvador.
- Kandel, Susan y Cuéllar, Nelson (2011). *Compensation for ecosystem services: Directions, potentials and pitfalls for rural communities*. PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- Krznaric, Roman (2004). *The Limits on Pro-Poor Agricultural Trade in Guatemala: Land, Labour and Political Power*. United Nations Development Program, Nueva York.
- Krznaric, Roman (2005). *The Limits on Pro-Poor Agricultural Trade in Guatemala: Land, Labour and Political Power*. United Nations Development Programme. New York.
- La Gaceta (2001). *Diario Oficial de la República de Honduras*. No. 32,601. 23 de Agosto. Tegucigalpa.
- La Prensa (2011, 3 de Mayo). *Honduras aprueba ley para la inversión*. Consultado en: <http://archivo.laprensa.hn/Ediciones/2011/05/04/Noticias/Honduras-aprueba-ley-para-la-inversion>
- La Tribuna (2011, 17 de Mayo). *En tierra firme hay petróleo*. Consultado en: <http://www.latribuna.hn/2011/05/17/en-tierra-firme-hay-petroleo/> Consultado el 26 de enero, 2012.
- La Tribuna (2011b, 16 de Mayo). *Fiebre del petróleo desata lluvia de solicitudes de exploración*. Consultado en: <http://www.latribuna.hn/2011/05/16/%E2%80%9Cfiebre-del-petroleo%E2%80%9D-desata-%E2%80%9Cluvia%E2%80%9D-de-solicitudes-de-exploracion/>
- La Tribuna (2011c, 24 de Febrero). *Darán remuneración a quienes conservan parcelas de bosques*. Consultado en: <http://www.latribuna.hn/2011/02/24/daran-remuneracion-a-quienesconserven-parcelas-de-bosques/#respond>
- La Tribuna (2011d, 19 de mayo). *Transnacionales compran derecho de información sobre hallazgo de petróleo*. Consultado en: <http://www.latribuna.hn/2011/05/19/transnacionales-compran-derecho-de-informacion-sobre-hallazgo-de-petroleo/>
- Margarita Hurtado Paz y Paz (2010). *Petén ¿La última frontera? La construcción social de una región*. Tesis Doctoral, Universidad de Wageningen.
- Maza, M. (08 de Septiembre de 2001). *Oportunidad para exportar*. Consultado el Septiembre de 2011, de Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/economia/Oportunidad-exportar_0_39597003.html
- MEM/CNEE/DPE. (2008). *Plan de expansión indicativo del sistema de generación 2008-2022*. Guatemala.
- MINECO. (s.f.). *Caracterización económica El Petén*.
- Ministerio de Agricultura. <http://portal.maga.gob.gt/portal/page/portal/2010>.

- Ministerio de Energía y Minas (s.f.). *Política energética*.
- Miranda, B. (2006). "Dinámicas territoriales en la zona norte de Costa Rica". En Fundación PRISMA (coordinador). Taller metodológico sobre dinámicas territoriales en Centroamérica. Simposio realizado en Costa del Sol, El Salvador. Disponible en [http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews\[tt_news\]=308&cHash=2ac3524c36f64d43dfe0c95513b06e25](http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews[tt_news]=308&cHash=2ac3524c36f64d43dfe0c95513b06e25)
- MOPAWI (2005). *Memoria anual de labores 2005*. Disponible en <http://www.mopawi.org>.
- Nelson, C., Harris, V., Stone, S.W. (2001). *Land use, and property rights: Empirical evidence from Darién, Panama*. Land Economics Vol 77, No. 2.
- OFRANEH-ODHPINH (2011). *Declaraciones de Norvin Goff Presidente MASTA en el Marco Asamblea Pueblos de la Tierra y el Mar*. Accedido el 25 de enero, 2012: <http://www.youtube.com/watch?v=DwXW8wkcYFU>
- PACUNAM. <http://www.pacunam.org>
- Padilla, A. (2010, marzo). "Pueblos indígenas, áreas protegidas y desarrollos mineros, petroleros y represas en Mesoamérica: hacia una economía para la vida". III Congreso Mesoamericano de áreas protegidas. Simposio III realizado en Mérida, Yucatán, México. Disponible en http://www.paraboldesigns.com/congresomesoamericano/pdf/simposio3/s4/S3s4M_Adalberto_Padilla.pdf
- Perdomo, E. (27 de agosto de 2011). *Ganaderos venden reses a Venezuela*. Accedido el 20 de Septiembre de 2011, de Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/economia/Ganaderos-venden-reses-Venezuela_0_543545652.html
- Perfecto, I., J. Vandermeer y A. Wright (2010) *Nature's matrix: Linking agriculture, conservation and food sovereignty*. London & Washington D.C., Earthscan.
- República de Honduras (S.f.). *Visión de país y plan de nación 2010-2038*.
- Roberts, Don (2007). *Convergence of the food, fuel and fiber markets*. CIBC World Markets/Rights and Resources Initiative.
- Robinson, William (2004). *Transnational conflicts: Central America, social change and globalization*. Verso. Londres y Nueva York.
- Rosa, Herman (2008). *Perfiles y trayectorias del cambio económico en Centroamérica, una mirada desde las fuentes generadoras de divisas*. PRISMA. San Salvador, El Salvador.
- Rosenthal, Gert (2006). *La inversión extranjera directa en Centroamérica, 1990-2004: Un bosquejo*. En: López, Grettel y Carlos Umaña, eds. (2006). *Inversión extranjera en Centroamérica*. Academia de Centroamérica. San José, Costa Rica.
- S. Rivera et al / *Revista de Teledetección* (2011) 35 94 - 108
- Schatan, C., G. Friedinger, A. Mendieta y Indira Romero (2008). *Integración regional e integración con Estados Unidos. El rumbo de exportaciones centroamericanas y de República Dominicana*. CEPAL. México.
- Secretaría de Turismo, 2011. <http://ents.ihh.hn/index.php?id=15>
- SEGEPLAN (2011). *Petén: Procesos de actualización del plan de desarrollo integral*. Guatemala.
- Smith, E. (03 de Mayo de 2008). *Taiwán crecerá su cooperación local*. Accedido el Septiembre de 2011, de Prensa Libre: http://www.prensalibre.com/economia/Taiwan-crecera-cooperacion-local_0_165583735.html
- Solano, Luis (2010). *El mercado del os agrocombustibles: destino de la producción de caña de azúcar y palma africana de Guatemala*. Serviprensa, S.A. Guatemala.
- Solano, Luis (2010). *Polemica por prórroga de contrato petrolero*. Inforpress Centroamericana 1857.
- Solano, Luis y Fernando Solis (2011). *La palma africana: agronegocio que se expande*. El Observador (28 y 29).
- Stocks, A., McMahan, B., and Taber, P. (2007). *Indigenous, colonist, and government impacts on Nicaragua's Bosawas Reserve*. Conservation Biology Vol 21 Issue 6.
- UNCTAD (2011). *Informe sobre las inversiones en el mundo 2011. Formas no accionariales de producción internacional y desarrollo*. Nueva York y Ginebra.

Uribe, A. (2007). *“Dinámica del turismo y desarrollo inmobiliario en Panamá. El caso de Bocas del Toro”*. En Fundación PRISMA (coordinador) Seminario-Taller “Turismo y Desarrollo Inmobiliario en Centro América”. Simposio realizado en San Salvador, El Salvador. Disponible en [http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews\[tt_news\]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e](http://www.prisma.org.sv/index.php?id=26&tx_ttnews[tt_news]=284&cHash=70884d1b4f75499b2bf4c47ef2e54f4e)

Wiener Bravo, Elisa (2011). *La concentración de la propiedad de la tierra en América Latina: Una aproximación a la problemática actual*. Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.

Ybarra, Megan (2008). *Violent visions of an ownership society: The land administration project in Petén, Guatemala*. Land Use Policy 26 (2008).



prisma@prisma.org.sv www.prisma.org.sv
3a. Calle Poniente No. 3760, Col. Escalón, San Salvador
(503) 2298 6852, (503) 2298 6853, (503)2224 3700 and Fax: (503) 22237209